



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la República

Folio: 0001700026815

Ciudad de México, Distrito Federal, a trece de mayo de dos mil quince.

VISTO el estado que guarda el expediente del recurso de revisión **RDA 0802/15**, interpuesto en contra de la Procuraduría General de la República, se emite la presente resolución tomando en consideración los siguientes:

R E S U L T A N D O S

PRIMERO. Solicitud de información. El veintitrés de enero de dos mil quince, el particular presentó, a través del Infomex, una solicitud de acceso a información ante la Procuraduría General de la República, en la que requirió lo siguiente:

Modalidad preferente de entrega de información: "Entrega por Internet en el INFOMEX" (sic)

Descripción clara de la solicitud de información: "Solicito los reportes y las fotos que entregó el 27 Batallón de Infantería de la SEDENA, con sede en Iguala, sobre las actividades que realizaron la noche del 26 de septiembre de 2014, y todo el día 27. Requiero que se me precise también el número de fotos obtenidas de esa noche y una descripción de cada una." (sic)

Otros datos para facilitar su localización: "En el programa radiofónico Atando cabos, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que en el expediente del caso figuran las declaraciones de 26 elementos del 27 batallón de infantería, quienes acudieron al llamado de personal de la clínica, porque refieren que hay personas armadas. El titular de la SG explicó: Cuando llega el Ejército a este lugar y hay fotos, yo las vi, debe haber unos 20 jóvenes encucillados, sentados en el piso, o un poco más. <http://www.jornada.unam.mx/2015/01/20/politica/004n1pol>" (sic)

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El veintitrés de febrero de dos mil quince, la Procuraduría General de la República respondió la solicitud, a través del Infomex, en los siguientes términos:

"Con fundamento en los artículos 44 y 45 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la información solicitada no puede ser proporcionada debido a que es:

Reservada 12 años.

Motivo del daño por divulgar la información: LA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CLASIFICADA COMO RESERVADA Y CONFIDENCIAL, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 13, FRACCIÓN V, 14, FRACCIÓN I Y III Y 18 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 16 DEL CÓDIGO FEDERAL



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

*DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LO ANTERIOR POR ENCONTRARSE INMERSA
EN AVERIGUACIONES PREVIAS Y TRATARSE DE DATOS PERSONALES." (sic)*

Como anexo a la respuesta consta el oficio número **SJAI/DGAJ/01897/2015**, del dieciséis de febrero del dos mil quince, emitido por la Unidad de Enlace de la Procuraduría General de la República y dirigido al ahora recurrente, cuyo contenido es el siguiente:

"Con fundamento en lo establecido por los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 4, 28, 41, 42, 44 y 45 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 de su Reglamento; así como el artículo 49, fracción XV del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y en relación a su solicitud de acceso a la información, a través del cual solicitó conocer:

[Téngase por reproducida la solicitud de información]

A. En cumplimiento en lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la presente solicitud se turnó para su atención a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.

*Derivado de la búsqueda minuciosa y exhaustiva que se realizó en la unidad administrativa antes descrita, la misma manifestó que los documentos en cuestión se encuentran inmersos en **averiguación previa** y por ende tiene el carácter de reservados, conforme lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, motivo por el cual no es posible hacerla del conocimiento, ni revelarla a un particular, bajo ninguna circunstancia, por lo que la información podrá permanecer con tal carácter hasta por **un periodo de doce años**, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 30 de su Reglamento.*

Lo anterior se sustenta en igual forma, a través de lo dispuesto por el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, que dispone:

Artículo 16....

*...La **averiguación previa** así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, y los objetos, registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, **son estrictamente reservados**.*

*El Ministerio Público **no podrá proporcionar información una vez que se haya ejercido la acción penal** a quien no esté legitimado.*

***Al servidor público que quebrante la reserva de la información de la averiguación previa** o proporcione copia de los documentos que contenga, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal que corresponda.*



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

**Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República**

Folio: 0001700026815

Además, se considerará reservada, aquella información relacionada con las actividades que el Ministerio Público lleva a cabo durante la etapa de averiguación previa, es decir, en el lapso en que se realizan todas aquellas actuaciones y diligencias necesarias para conocer la verdad histórica de un hecho posiblemente constitutivo de delito, a efecto de ejercer, o no, la acción penal.

En consecuencia, no resulta posible obsequiar la petición planteada, toda vez que existe impedimento legal para proporcionar datos relativos a las averiguaciones previas, porque reviste características de confidencialidad o no divulgable y a efecto de definir cuáles son esos parámetros, es menester transcribir los siguientes preceptos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental:

Artículo 14. También se considerará como información reservada:

I.-

II.-...

III.- Las averiguaciones previas;...

De la transcripción anterior, se advierte que las actuaciones de los agentes del Ministerio Público de la Federación, no tienen la calidad de registros públicos, ni pueden ser considerados como fuente de acceso al público.

En suma, la reserva de la información se encuentra fundada y motivada en términos de los artículos 45, primer párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70, fracción IV de su Reglamento, por disposición expresa de la ley.

*Además cabe precisar, que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, ha establecido en su **'Criterio de interpretación de la fracción I del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental'**:*

Que existe un principio general de derecho y de interpretación de la ley llamado 'principio de reserva de ley'. Dicho principio establece, que cuando el legislador, ya sea en su carácter de constituyente o de legislador ordinario, hace referencia a la regulación que se hace en otra "ley", se entiende que se refiere a una ley en sentido formal y material, es decir, a un ordenamiento jurídico con las características de generalidad, abstracción e impersonalidad, pero además que haya sido expedido a través del proceso legislativo establecido en la Constitución Mexicana.

Luego entonces, se insiste que el fundamento legal en que se apoya esta Institución, para reservar su información deviene de una ley federal, como es la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada:

'Artículo 13. A las actuaciones de averiguación previa por los delitos a que se refiere esta Ley, exclusivamente deberán tener acceso el inculpado y su defensor, únicamente con relación a los hechos imputados en su contra, por lo que el



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

Ministerio Público de la Federación y sus auxiliares guardarán la mayor reserva respecto de ellas...

Es una ley en sentido formal y material la que regula un sector concreto del ordenamiento jurídico, y bajo esa línea de pensamiento, se solicita que en este caso concreto se pondere la jerarquía normativa, que sustenta la reserva de la información planteada por esta Institución.

Otro impedimento jurídico que tiene esta autoridad para ventilar la información solicitada es lo previsto en el artículo 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal, que dispone:

'Artículo 225. Son delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos los siguientes:

*...
XXVIII.- Dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obren en una averiguación previa o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean confidenciales...*

*...
A quien cometa los delitos previstos en las fracciones...XXVIII..., se le impondrá pena de prisión de cuatro a diez años y de mil a dos mil días multa. ...'*

(Nota: el subrayado no es de origen).

Bajo este contexto, el servidor público que quebrante la reserva de la información al dar a conocer datos inmersos en averiguaciones previas, a quien no tiene derecho, incumpliría en lo preceptuado en el numeral antes citado, por lo que estaría cometiendo el delito de Contra la Administración de Justicia, por lo que no es posible atender lo solicitado.

Lo anterior, de acuerdo con lo previsto en los artículos 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, en concordancia con el 13 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 14, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el artículo 27 de su Reglamento, se determina que la información solicitada se considera reservada, haciéndose valer la imposibilidad jurídica para responder a la solicitud en cuestión.

Por su parte, en el artículo 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, prevé como información confidencial los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución comercialización.

*Por otra parte, también se debe tomarse en cuenta que el **proporcionar la información requerida por el peticionario, esta vulneraría los derechos humanos de las víctimas** relacionadas con los hechos que se investigan, en detrimento a su derecho a la privacidad, a su derecho de acceso a la justicia, así como a la reparación del daño y al resguardo de su identidad, previstos en los artículos 16, párrafo segundo, 17 y 20, apartado C, fracción IV y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 3, fracción II y 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.*



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

**Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República**

Folio: 0001700026815

No se omite mencionar, que la información considerada con carácter de pública, se encuentra en los Boletines de Prensa, 180/14, 182/14, 184/14, 187/14, 191/14, 192/14, 193/14, 194/14, 195/14, 197/14, 198/14, 199/14, 201/14, 207/14, 210/14, 212/14, 214/14, 218/14, 225/14, 228/14, 240/14, 003/15, 005/15, 009/15 y 017/15 mismos que pueden ser localizados en la página de internet de esta Institución en www.pgr.gob.mx, para mayor referencia se anexan copias.

*Por último, la respuesta antes descrita, se emitió con fundamento en lo dispuesto en los artículos 15, 29, fracción III, 31 y 45 de la LFTAIPG y 70, fracción III de su Reglamento. Por ende, al ser información en resguardo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, y en estricto cumplimiento a lo previsto por el referido artículo 31 de la LFTAIPG, **no es necesario pronunciamiento por parte del Comité de Información de esta Procuraduría.***

Si usted tiene alguna duda sobre la respuesta otorgada, puede acudir a esta Unidad de Enlace de Acceso a la Información, ubicada en Río Guadiana No. 31, Planta Baja, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Distrito Federal, o llamar al teléfono (55) 5346 0000, extensiones 5716 y 5717, con un horario de atención de 9:00 a 15:00 y 16:30 a 19:30; o bien, escríbanos al correo leydetransparencia@pgr.gob.mx, en donde con gusto atenderemos sus dudas y/o comentarios." (sic)

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. El veinticuatro de febrero de dos mil quince, a través del Infomex, el particular interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por la Procuraduría General de la República, mediante el cual manifestó lo siguiente:

Acto que se recurre y puntos petitorios: "Interpongo este Recurso de Revisión ante la PGR, debido a que reserva la información que estoy solicitando sobre el caso Ayotzinapa. El mismo IFAI en el recurso ya resuelto con número de expediente RDA 5366/14 ante SEDENA indico que no importa que la información forme parte de una averiguación previa en curso y aun que pueda contener datos que vulneren la actuación del Ministerio Público Federal. Debe entregar la información debido a que existe un interés público que es superior a la reserva de la información dado que las víctimas sufrieron violaciones graves a derechos humanos, como lo determinó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y es por lo tanto, nadie incluido la PGR podrá clasificar esta información como reservada. Gracias" (sic)

CUARTO. Trámite del recurso. El veinticuatro de febrero de dos mil quince, se asignó al recurso de revisión el número de expediente **RDA 0802/15** y se turnó a la Comisionada Ponente **María Patricia Kurczyn Villalobos**, para los efectos establecidos en el artículo 55, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

El veintisiete de febrero de dos mil quince, se acordó la admisión del recurso de revisión interpuesto por el particular en contra de la Procuraduría General de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como los acuerdos Primero, fracciones III, V y VIII, y Segundo del Acuerdo del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintinueve de agosto de dos mil catorce.

El dos de marzo de dos mil quince, se notificó al recurrente mediante correo electrónico, la admisión del recurso, haciéndole saber el derecho que le asiste para formular alegatos, de conformidad con lo establecido en el artículo 55, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el diverso 86, fracción III de su Reglamento.

El dos de marzo de dos mil quince, se notificó a la Procuraduría General de la República la admisión del recurso de revisión interpuesto en su contra, otorgándole un plazo de siete días hábiles a partir de dicha notificación para que manifestara lo que a su derecho conviniera y formulara alegatos, dando cumplimiento al artículo 55, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el diverso 88 de su Reglamento.

QUINTO. Alegatos. El once de marzo de dos mil quince, se recibió en este Instituto mediante la Herramienta de Comunicación con la Administración Pública Federal, el oficio número **SJAI/DGAJ/03004/2015**, de fecha diez del mismo mes y año, signado por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República y dirigido a la comisionada ponente, por conducto del cual se formularon los siguientes alegatos:

"LIC. MARIO MIGUEL ORTEGA, Director General de Asuntos Jurídicos, personalidad que solicito me sea debidamente reconocida en términos del artículo 49, fracciones V y XV del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, así como 28, fracción de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con domicilio en calle Río Guadiana número 31, colonia Cuauhtémoc, delegación Cuauhtémoc, C. P. 06500, autorizando a los Licenciados: Miguel Manrique Betanzos, Angélica Cañas Pérez, Pilar Georgina Osorno Fregoso, Sandra Beatriz Rojas Martínez, Lilia Córdoba Morales, Claudia Soidneef Rodríguez Carrera, Lilian Irazú Hernández Ojeda, así como a los C.C. Karla Monserrat Hernández Pizaña y Miguel Angel Fitta Zavala, para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, ante esa H. Autoridad comparezco y expongo:

Con fundamento en el artículo 88 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, acudo en tiempo y forma para dar



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

**Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República**

Folio: 0001700026815

contestación al recurso de revisión interpuesto por la particular, en contra de la respuesta que le fue otorgada a su solicitud de acceso a la información con número de folio 0001700026815, por esta Procuraduría General de la República, en los términos siguientes:

ANTECEDENTES

I. El 23 de enero de 2015, se recibió en el Sistema de Solicitudes de Información (INFOMEX), la solicitud de acceso a información pública con número de folio 0001700026815, consistente en:

...

II. El 23 de febrero del año en curso, a través del Sistema INFOMEX, y mediante oficio SJA/IDGAJ/01897/2015, se notificó a la particular que el que el expediente de averiguación previa solicitado tiene el carácter de reservado, conforme a lo dispuesto por el artículo 14, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales.

El 02 de marzo del presente, vía herramienta de comunicación, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), notificó la admisión del recurso con número de expediente RDA 0802/15, en el cual, la particular interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por esta Procuraduría General de la República, en los siguientes términos:

...

De conformidad con los antecedentes referidos, se formulan los siguientes:

ALEGATOS

PRIMERO. La presente solicitud se turnó para su atención a la **Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada**, misma que es competente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, así como con el numeral 3, inciso A, fracción III del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

SEGUNDO. Esta Procuraduría General de la República informó a la particular que el expediente de averiguación previa tiene el carácter de reservado por un periodo de doce años, conforme a lo dispuesto por el artículo 14, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el numeral 16 del Código Federal de Procedimientos Penales y Vigésimo Sexto de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal (Lineamientos Generales)

En esa consideración, es procedente referir lo dispuesto por el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, en donde se indica que el expediente de averiguación previa se encuentra estrictamente reservado.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

'Artículo 16.- El juez, el Ministerio Público y la Policía estarán acompañados, en las diligencias que practiquen, de sus secretarios, si los tuvieran, o de dos testigos de asistencia, que darán fe de todo lo que en aquéllas pase.

Al expediente de averiguación previa únicamente tendrán acceso el inculpado, su defensor y la víctima u ofendido o su representante legal. La averiguación previa así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, y los objetos, registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados.

Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, únicamente deberá proporcionarse una versión pública de la resolución de no ejercicio de la acción penal, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal, sin que pueda ser menor de tres ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha resolución haya quedado firme.

Si la resolución de no ejercicio de acción penal resulta de la falta de datos que establezcan que se hubiese cometido el delito, el Ministerio Público podrá proporcionar la información de acuerdo a las disposiciones aplicables, siempre y cuando no se ponga en riesgo indagatoria alguna.

En ningún caso se podrá hacer referencia a información confidencial relativa a los datos personales del inculpado, víctima u ofendido, así como testigos, servidores públicos o cualquier persona relacionada o mencionada en la indagatoria.

El Ministerio Público no podrá proporcionar información una vez que se haya ejercitado la acción penal a quien no esté legitimado.

Al servidor público que quebrante la reserva de la información de la averiguación previa o proporcione copia de los documentos que contenga, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal que corresponda.

En el proceso, los tribunales presidirán los actos de prueba y recibirán, por sí mismos, las declaraciones.

En las diligencias podrán emplearse, según el caso y a juicio del funcionario que las practique, la taquigrafía, el dictáfono y cualquier otro medio que tenga por objeto reproducir imágenes o sonidos y el medio empleado se hará constar en el acta respectiva. [...]

Asimismo, el artículo 13 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada dispone que a las actuaciones de las averiguaciones previas, reguladas en dicha norma, únicamente tendrán acceso el indiciado y su defensor.

'Artículo 13. A las actuaciones de averiguación previa por los delitos a que se refiere esta Ley, exclusivamente deberán tener acceso el indiciado y su defensor; una vez que haya aceptado el cargo, únicamente con relación a los hechos imputados en su contra, por lo que el Ministerio Público de la Federación y sus auxiliares guardarán la mayor reserva respecto de ellas, sin perjuicio de que el indiciado o su defensor, en base en la información recibida, puedan presentarlas pruebas de descargo que juzguen oportunas.'



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

Sumado a lo anterior, la fracción III, del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone lo siguiente.

Artículo 14. También se considerará como información reservada:

III.- Las averiguaciones previas;

Del contenido de los artículos antes descritos, se observa que tanto la legislación aplicable en materia de transparencia así como en materia penal consideran como información reservada a las averiguaciones previas.

Así, conforme a lo dispuesto en los artículos 14, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 16 del Código Adjetivo Penal, se considera información reservada a las averiguaciones previas, es decir, aquella información que se genera y recopila en la etapa procedimental en la que el Ministerio Público lleva a cabo las diligencias para conocer la verdad histórica de los hechos delictivos, para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, a efecto de ejercitar o no la acción penal y, por tanto, la documentación relacionada con la misma, sin importar su naturaleza o contenido.

Asimismo, en la normatividad citada se prevé como único supuesto de excepción, para efectos de acceso a la información pública gubernamental, la entrega de una versión pública de la resolución de no ejercicio de la acción penal, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal, sin que pueda ser menor de tres ni mayor de doce años, contando a partir de que dicha resolución haya quedado firme, o bien cuando este resulte de la falta de datos que establezcan que se hubiese cometido un delito.

SUPUESTO DE EXCEPCIÓN QUE EN EL ASUNTO NOS OCUPA, NO RESULTA APLICABLE.

Luego entonces, como se señaló anteriormente la averiguación previa así como todos los documentos que integran, independientemente de su contenido o naturaleza, y los objetos, registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados y únicamente podrán tener acceso a ellos quien este legitimado para tal efecto conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, esto es inculpado, su defensor y la víctima u ofendido o su representante legal.

En este orden de ideas, se le comunica la hoy recurrente que en caso de encontrarse en alguno de los supuestos antes indicados acudiera directamente con el Agente del Ministerio Público de la Federación resguardante de la investigación.

Derivado de lo expuesto, se advierte que **no es procedente** proporcionar la documentación requerida, al tratarse de información considerada como clasificada.

TERCERO. Resulta necesario señalar que si bien la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en su artículo 40, establece que cualquier persona o su representante podrá presentar, ante la unidad de enlace, una



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

solicitud de acceso a la información mediante escrito libre o en las formas que apruebe ese Instituto, sin que en ningún caso la entrega de información esté condicionada a que se motive o se justifique su utilización, ni se requiera demostrar interés alguno; también lo es que **tratándose de averiguaciones previas**, dicha información se **rige** en términos de lo dispuesto en **la legislación aplicable en materia penal**, es por ello que la Propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 20, y el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, establece que tratándose de averiguaciones previas los únicos que podrán tener acceso al expediente son: el inculpado, su defensor y la víctima u ofendido o su representante legal.

Lo anterior se traduce en que tratándose de información relativa a averiguación previa, si resulta indispensable:

- a) Acreditar el interés jurídico en dicha investigación para poder tener acceso a la información contenida en la averiguación previa de que se trate, con las propias reservas de la ley que así establezca la legislación de la materia; y
- b) Que el único facultado para dar información, a quien este legitimado para tal efecto, es el Ministerio Público Federal resguarda en de la investigación.

En este sentido, resulta necesario señalar que los artículos 225, fracción VIII del Código Penal Federal, y 16, párrafos sexto y séptimo del Código Federal de Procedimientos Penales, establecen que el Ministerio Público **NO** podrá dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obren en una averiguación previa o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean confidenciales, asimismo se establece que al que quebrante la reserva de la información de la averiguación previa o proporcione copia de los documentos que contenga, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal que corresponda.

Es por ello que **los expedientes de las averiguaciones previas**, salvo los casos de excepción señalados en el propio artículo 16, párrafos tercero y cuarto del Código Federal de Procedimientos Penales, no corresponden al marco de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, toda vez que de acuerdo a lo antes referido la única autoridad facultada para proporcionar dicha información, es el Agente del Ministerio Público de la Federación que conozca de la investigación; asimismo, el acceso que se ve restringido únicamente a: el inculpado su defensor y la víctima u ofendido o su representante legal.

Por consiguiente, se considera procedente solicitar a ese Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, se **confirme** la clasificación de **reserva** de la 'averiguación previa relacionada con los sucesos acontecidos en Iguala el 26 de septiembre de este año', que es requerida por la ahora recurrente.

CUARTO. En cuanto al agravio manifestado por la particular, consistente en: '...debe entregar la información debido a que existe un interés público que es superior a la reserva de la información dado que las víctimas sufrieron violaciones graves a derechos



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

humanos, como lo determino la comisión nacional de derechos humanos y es por lo tanto, nadie incluida la pgr podre clasificar esta información como reservada'

Se debe apuntar que el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (disponible en [http://legal.un.org/icc/statute/spanish/rome_statute\(s\).pdf](http://legal.un.org/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf)), dispone lo siguiente:

'Artículo 7 Crímenes de lesa humanidad

1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por 'crimen de lesa humanidad' cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte **de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil** y con conocimiento de dicho ataque:

- a) Asesinato;
 - b) Exterminio;
 - c) Esclavitud;
 - d) Deportación o traslado forzoso de población;
 - e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional;
 - f) Tortura;
 - g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable;
 - h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte:
 - i) Desaparición forzada de persona;
 - j) El crimen de apartheid;
 - k) Otros actos humanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.
- [...]

De lo anterior, se advierte que para que un acto sea considerado como crimen de lesa humanidad, debe cometerse como parte de un ataque **generalizado o sistemático** contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

Es decir que, prima facie y a partir de la información pública oficial emitida por esta Procuraduría, en el presente asunto **NO** se advierte que se pudiera tratar de ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil, sino que fueran hechos que si bien no son muy delicados, **constituyen acontecimientos aislados**.

Siendo así, debe resaltarse que la averiguación previa indicada con motivo de la desaparición de los estudiantes normalistas el 26 de septiembre de 2014, fue por la probable comisión de los delitos de **secuestro, delincuencia organizada y que se están concluyendo diligencias para acreditar el delito de funcionarios municipales de desaparición forzada**, según la propia información pública oficial contenida en el Boletín de esta Procuraduría General de la República, No. 198/14 del 22 de octubre del año en curso (disponible en <http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol14/Oct/b19814.shtm>).



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

NO así, por los Delitos Contra Humanidad previstos en el Libro Segundo, Título Tercero del Código Penal Federal.

Del mismo modo, es de suma importancia hacer notar que bien la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación sobre los hechos acontecidos el día 26 de septiembre de 2014 (según consta el comunicado de prensa del 5 de octubre de 2014¹), lo cierto es, que el día de hoy **NO EXISTE** un pronunciamiento emitido por el organismo especializado(o algún otro órgano competente), en donde se **determine** que en dichos sucesos acontecieron violaciones graves a los derechos humanos, ni muchos menos que se haya determinado una recomendación en tales términos.

Ello implica que, en caso de proporcionarse la información requerida, **se vulnerarían los derechos humanos de las víctimas** (directas e indirectas) relacionadas con los hechos ocurridos en el Estado de Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, **en claro detrimento a su derecho de privacidad, a su derecho de acceso a la justicia, así como a la reparación del daño y al resguardo de su identidad**, previsto en los artículos 16, párrafo segundo, 17 y 20, apartado C, fracciones IV y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De manera adicional, es menester apuntar que el artículo 6, apartado A, fracción I la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:

'Artículo 6º.- [...]

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y **sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público** y seguridad nacional, **en los términos que fijan las leyes**. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. [...]

En relación con lo anterior, se debe señalar que la reserva de ley establecida por el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales en cuanto a las averiguaciones previas, obedece a que dicha **información protege asuntos de interés general** (indagatorias del orden criminal), cuya difusión afecta a la sociedad en su conjunto. Es decir, que **la averiguación previa es en sí misma una razón de interés público**, de ahí que la propia Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en su artículo 14, fracción III le otorgue carácter de información reservada.

¹ http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Comunicados/2014/COM_2014_280.pdf



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

**Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República**

Folio: 0001700026815

Consecuentemente, en el caso en concreto, no resulta aplicable la excepción prevista por el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, motivo por el cual subsiste la clasificación de reserva de la averiguación previa solicitada por el particular.

En los anteriores preceptos legales se sustenta a cabalidad la clasificación de reserva de la información ahora recurrida, toda vez que, la averiguación previa protege bienes jurídicos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como: individuales (la vida y la libertad) y colectivos (la sociedad), es decir, es un documento en el que se ven inmersos los posibles responsables, las víctimas, los testigos, todo aquel servidor público que deba rendir declaración o emitir algún tipo de dictamen o informe, el o los defensores y el propio Agente del Ministerio Público Federal el cual sí bien es un servidor público y está obligado a transparentar su actuar (Criterio 6/10), al divulgar sus datos se corre el riesgo de vulnerar su vida e incluso la de cualquiera otro de los que en ella se encuentren, así como la estabilidad social en el caso de no garantizarse el orden público, siendo el fin perseguido por la averiguación previa al llevar a cabo una investigación por la comisión de delito o delitos que agreden a la sociedad.

*Otro aspecto importante a resaltar es el hecho de que, si bien los datos personales que protege la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a través de su testado, **existen otros elementos inmersos en la indagatoria** que son de igual relevancia y es el perjuicio que se causaría al cumplimiento de las leyes y la persecución de los delitos al proporcionar versión pública de los documentos a quienes no colman el requisito establecido en el artículo 16 del Código Penal de Procedimientos Penales Federales, ya que se estaría revelando la estrategia de investigación realizada por el Agente del Ministerio Público y sus auxiliares en el descubrimiento de la verdad histórica de un hecho posiblemente constitutivo de delito.*

Es así, que el artículo 14, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en su literalidad, manifiesta como información reservada la averiguación previa por lo que proporcionar versión pública del expediente solicitado, contravendría al precepto legal invocado.

QUINTO. De conformidad con la teoría el interés público, como concepto genérico, se concreta y especifica cuando la Administración actúa en el campo de sus potestades, de manera que toda actuación administrativa tiene un fin, como uno de sus elementos objetivos, que supone la concreción del interés público o general, la Administración pública sirve con objetividad los intereses generales, siendo el caso particular de la Procuraduría General de la República conforme a lo establecido en los numerales 21 y 102 apartado 'A' de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3 y 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con el 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la investigación y persecución de la comisión de los delitos del orden federal.

*Por tanto, contrario a lo que la ahora recurrente pretende, la reserva de la información contenida en la averiguación previa en su totalidad es un documento protegido por la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos **por razón de interés***



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

público, además de la Ley que en consecuencia garantiza la referida reserva, siendo esta la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en su numeral 14, fracción III, aunado al término que ese Instituto le ha otorgado al realizar el análisis de la clasificación de averiguación previa como una 'cuestión de orden público'. Sustenta lo anterior, la Tesis aislada P.LX/2000. Localización: [TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XI, Abril de 2000; Pág. 74:

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.

El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como 'reserva de información' o 'secreto burocrático'. En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

Amparo en revisión 3137/98. Bruno F. Villaseñor. 2 de diciembre de 1999. Unanimidad de ocho votos.

Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel, Juventino V. Castro y Castro y José de Jesús Gudiño Pelayo Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Gonzalo Arredondo Jiménez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintiocho de marzo en curso, aprobó, con el número LX/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de marzo de dos mil.

*Luego entonces, esta Institución tiene como misión contribuir a garantizar el Estado democrático de Derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante una procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos, en colaboración con instituciones de los tres órdenes de gobierno y al servicio de la sociedad, por lo que proporcionar a una persona o, a un pequeño grupo de personas, versión pública de una averiguación previa no garantizaría el cumplimiento al 'Interés Público' ya que el beneficio se limitaría única y exclusivamente a ese pequeño grupo y **ESTA INSTITUCIÓN SE DEBE A LA SOCIEDAD EN SU TOTALIDAD**. Es por ello que el acto administrativo llevado a cabo por esta Procuraduría General de la República, **mira siempre a la satisfacción del interés general** aunado a que la averiguación previa es información reservada por disposición expresa de una ley.*



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

SEXTO. Resulta importante señalar que de conformidad con el artículo 31 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la **reserva invocada** por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada **NO SE ENCUENTRA SUJETA A LA AUTORIDAD DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN** de esta Procuraduría General de la República.

SÉPTIMO. Sin demérito de lo expuesto, desde la respuesta inicial se indicó a la particular, que **aquella información y datos que esta dependencia ha considerado hacer del conocimiento público**, en relación con el suceso referido en su solicitud de acceso, se encuentra disponible a través del portal electrónico de esta Procuraduría General de la República (www.pgr.gob.mx), mediante los siguientes boletines y comunicados de prensa:

- Boletín 195/14 PGR OFRECE RECOMPENSA PARA LA LOCALIZACIÓN DE 43 ESTUDIANTES DE LA NORMAL RURAL DE AYOTZINAPA, GUERRERO
<http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bo114/Oct/b19514.shtm>
- Boletín 184/14 - ENCABEZA PROCURADOR JESÚS MURILLO KARAM REUNIÓN SOBRE INVESTIGACIONES DE HECHOS OCURRIDOS EN AYOTZINAPA
<http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bo114/Oct/b18414.shtm>
- Boletín 180/14 ATRAE PGR INVESTIGACIÓN POR DESAPARICIÓN DE ALUMNOS DE LA NORMAL RURAL DE AYOTZINAPA, GUERRERO
<http://pgr.gob.mx/Prensa/2007/bo114/Oct/b18014.shtm>
- Boletín 198/14 - CONFERENCIA DE PRENSA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA; JESÚS MURILLO KARAM, SOBRE SUCESOS EN IGUALA, GUERRERO
<http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bo114/Oct/b19814.shtm>
- Boletín 201/14
<http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bo114/Oct/b20114.shtm>
- Boletín 207/14.
<http://wmv.pgr.gob.mx/prensa/2007/bo114/Nov/b20714.shtm>
- Boletín 212/14.
<http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bo114/Nov/b21214.shtm>
- Conferencia de prensa del C. Procurador General de la República, efectuada el día 7 de noviembre de 2014:
<http://www.presidencia.gob.mx/multimedia/conferencia-de-prensa-delprocurador-general-de-la-republica-jesus-murillo-karam/>



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

*Por lo que, bajo los argumentos vertidos en el presente escrito de alegatos se considera procedente solicitar a ese Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, se **confirme** la reserva de la información de la solicitud de Información 0001700026815.*

No se omite señalar, que el anterior criterio ya ha sido confirmado por ese Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos a través de los siguientes recursos de revisión: 0514/09, 1156/09, 1719/09, 0298/10, 1245/10, 0685/11, 0724/11, RDA 2582/12, RDA 2959/12, RDA 4375/12, RDA 1296/13, RDA 0210/14 y RDA 0498/14.

Por lo expuesto y fundado, atentamente solicito a usted C. Comisionada:

PRIMERO.- *En atención a las consideraciones señaladas en el presente ocurso tener por reconocida mi personalidad en el presente escrito de formulación de alegatos, y por hechas las manifestaciones en él contenidas.*

SEGUNDO.- *En su oportunidad y previos los trámites legales se **confirme** la respuesta otorgada por esta Institución, en términos de lo dispuesto en el artículo 56, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental." (sic)*

A la fecha de la presente resolución, este Instituto no ha recibido alegatos del recurrente.

SEXTO. Ampliación de plazos para resolver y aprobación para ejercicio de facultades. El ocho de abril de dos mil quince, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 55 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el Pleno de este Instituto aprobó por unanimidad la ampliación, por un periodo igual el término previsto en las fracciones I y V del citado artículo 55. Sin perjuicio de lo anterior, también aprobó que la Comisionada Ponente pudiera ejercer las facultades previstas en los artículos 17 y 55 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para la resolución del presente asunto.

El veintinueve de abril de dos mil quince, este Instituto notificó al recurrente mediante correo electrónico, el acuerdo de ampliación y aprobación para ejercicio de facultades, de conformidad con lo establecido en el artículo 86, fracción III del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

El veintinueve de abril de dos mil quince, mediante la Herramienta de Comunicación con la Administración Pública Federal, se notificó a la Procuraduría General de la República, el acuerdo de ampliación y aprobación para el ejercicio de facultades, mencionado anteriormente.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

SÉPTIMO. Requerimiento de información adicional. El nueve de abril de dos mil quince, mediante oficio número **IFAI-OA/Comisionados/Ponencias/2S.01/064/15**, a través de la Herramienta de Comunicación con la Administración Pública Federal, fue notificado al Comité de Información de la Procuraduría General de la República, un requerimiento de información adicional, en los siguientes términos:

"[...]"

1. *Indique en qué tomo y foja de dicha indagatoria, obran los reportes y las fotografías que el 27 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional entregó a esa Procuraduría, en relación a los sucesos correspondientes a los días 26 y 27 de septiembre de 2014.*
2. *En relación con el punto anterior, indique en qué tomo y foja de dicha indagatoria, obran documentales que hagan referencia al número de fotografías y/o la descripción de las mismas." (sic)*

El dieciséis de abril de dos mil quince, a través de la Herramienta de Comunicación con la Administración Pública Federal, este Instituto recibió el oficio número **SJAI/DGAJ/04635/2015**, de la misma fecha a la de su recepción, emitido por la Titular de la Unidad de Enlace de la Procuraduría General de la República y dirigido a la Comisionada Ponente, a través del cual desahogó el requerimiento de información adicional formulado, en los siguientes términos:

"[...]"

*Al respecto me permito manifestar que en la indagatoria **PGR/SEIDO/UEIDMS/001/2015**, obran 6 fotografías que fueron exhibidas mediante comparecencia de un militar adscrito al 27 batallón de infantería de Iguala, Guerrero, misma que consta en el tomo 20 del referido expediente." (sic)*

OCTAVO. Diligencia de acceso a información clasificada. El veintidós de abril de dos mil quince, la Comisionada Ponente expidió el oficio **IFAI-OA/Comisionados/Ponencias/2S.01/064/15**, dirigido al Comité de Información de la Procuraduría General de la República, mismo que es del tenor siguiente:



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

"Con fundamento en los artículos 17, tercer párrafo, 37, fracción II, 49, 50 54 y 55, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 88 y 89 de su Reglamento, 21 fracción III del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y punto Primero, fracciones VIII, IX X, y XI y Segundo del Acuerdo del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, por el que se confieren funciones a los secretarios de Acuerdos y Ponencia, para coadyuvar con los comisionados ponentes en la sustanciación de los medios de impugnación y procedimientos competencia del Instituto; así como en el Acuerdo del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos ACT-PUB/08/04/2015, que le otorga a la Comisionada Ponente las facultades contenidas en los preceptos mencionados; resulta necesario tener acceso a la información clasificada, para contar con los elementos suficientes para la substanciación y resolución del recurso de revisión citado al rubro, misma que consiste en lo siguiente:

1. Los reportes y las fotografías que el 27 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional entregó a esa Procuraduría, en relación a los sucesos correspondientes a los días 26 y 27 de septiembre de 2014; documentación que obra en la averiguación previa número PGR/SEIDO/UEIDMS/01/2015.

2. Documentales que hagan referencia al número de fotografías y/o la descripción de las mismas; mismas que se localizan en la indagatoria antes citada.

Para tal efecto, se señalan las diez horas con treinta minutos, del día treinta de abril de dos mil quince, para la celebración de la citada audiencia, la cual tendrá verificativo en las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma, número 75, segundo piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, atendiendo a los argumentos esgrimidos para el traslado de la información relativa a la averiguación previa relacionada con los sucesos acaecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, hechos valer en el recurso de revisión RDA 5151/14." (sic)

El veintidós de abril de dos mil quince, se notificó al Comité de Información de la Procuraduría General de la República, mediante la Herramienta de Comunicación con la Administración Pública Federal, el oficio número IFAI-OA/Comisionados/Ponencias/2S.01/064/15 antes transcrito.

El día treinta de abril de dos mil quince, en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de la República, tuvo verificativo la diligencia de acceso a documentación clasificada y, al efecto, se levantó el acta conducente, en los términos siguientes:

"Al inicio de la diligencia el servidor público adscrito a la Procuraduría, manifestó que las fotografías fueron entregadas por un declarante, miembro del Ejército, es decir, son



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

**Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República**

Folio: 0001700026815

producto de una comparecencia, razón por la cual, no existen reportes respecto de la exhibición de las impresiones fotografías.

En ese sentido, en la indagatoria número PGR/SEIDO/UEIDMS/001/2015, consta en el tomo 20, a partir de la foja número 365, lo siguiente:

- *La Declaración Ministerial de un Coronel de Infantería, en calidad de testigo, de fecha cuatro de diciembre de dos mil catorce, relacionada con los hechos del interés del particular.*
- *En la sección final de dicha declaración constan las únicas fotografías que obran en la indagatoria relacionadas con los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en formato blanco y negro.*
- *En la foja 370 constan copias fotostáticas de tres fotografías en conjunto y en una sola foja y, enseguida, constan las mismas fotografías desagregadas a fojas 371, 372 y 373, con un poco de ampliación.*
- *Aparecen en las fotografías personas físicas sin poderse identificar, de apariencia en su mayoría jóvenes, observándose tranquilos, todos vestidos con ropa informal y calzados, sentados y con cabello corto. Cabe señalar, que no es posible apreciar el número de personas que aparecen en las fotografías debido a la falta de legibilidad en las mismas, a excepción de una de ellas, donde aparecen dos individuos.*
- *De la lectura de la Declaración de mérito se señala que en las fotografías aparecen estudiantes y un profesor. Es importante subrayar, que el declarante no los identifica.*

Asimismo, dicha comparecencia obedece a lo manifestado en los informes de los días 26 y 27 de septiembre de 2014, los cuales obran a fojas 214 a 225 del tomo 47, siendo el primero de la 214 a la 217, el segundo de la 218 a la 221 y el tercero de la 222 a la 224. Cabe señalar que son informes realizados por militares dirigidos a sus superiores, donde constan los nombres de diversos elementos pertenecientes al Ejército.

En dichos informes consta una descripción de los hechos y se establece que personal militar llega al Hospital María Cristina, que se encuentra con luces apagadas, al tocar a las puertas se identifican como personal militar y el Comandante encuentra a personas en estado de crisis en el segundo piso; los hacen descender a la entrada del hospital, se sientan en las bancas y sillas que ahí están. Señalan los informes que reciben llamadas telefónicas y se identifican como estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, así como un profesor, siendo aproximadamente 25 personas. Manifestando que habían sido agredidos con armas de fuego, al parecer por Policías Municipales. El personal militar se identificó con los estudiantes, solicitaron el apoyo de una ambulancia, y les manifestaron que se encontraban en ese lugar para brindarles seguridad y respeto a sus derechos humanos; que se retiraban y que la ambulancia llegaría en cualquier momento, permaneciendo aproximadamente hasta la 1:30 horas del día 27 de septiembre de 2014. El militar que describe los hechos señala que al recibir la orden de regresar al hospital Cristina, advierte que como a la 1:40 pasan dos ambulancias de la Cruz Roja, que vio que llegaron al Hospital Cristina, por lo que se retiró del lugar debido a que ya no había a quién prestarle los servicios de primeros auxilios. Se hace notar que el informe señala que había una persona herida en el labio superior. A la 1:55 arriba nuevamente a la Clínica Cristina, percatándose que ya no se encontraba el personal de estudiantes y una



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

persona que dijo laborar en el Hospital indicó que no quisieron esperar a que llegara la ambulancia. Por lo que se traslada nuevamente a las calles de Anillo Periférico Benito Juárez, esquina con Calle Juan N. Álvarez, donde se encontraban dos cuerpos sin vida y autobuses baleados. Los cuerpos fueron trasladados a SEMEFO de Guerrero y culmina sus actividades el declarante, aproximadamente a las 5:45 horas del 27 de septiembre de 2014.

Realizadas todas las manifestaciones pertinentes y devueltos los documentos originales a los que se tuvo acceso, siendo las once horas con cincuenta minutos del día en que se actúa, se da por terminado el acceso, firmando al calce y al margen todos los que en ella intervinieron." (sic)

En razón de que fue debidamente sustanciado el presente recurso de revisión y que no existe diligencia pendiente de desahogo, se emite la presente resolución de acuerdo con los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es competente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en lo ordenado en el artículo 6o, Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el Transitorio Octavo del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014; en el artículo 3o., fracción XIII y los Transitorios Primero y Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como lo dispuesto en los artículos 37, fracción II, 49, 50 y 55, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil dos; los artículos 88 y 89 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil tres; así como los artículos 15, fracciones I y III, 21, fracciones III y IV del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil catorce.

SEGUNDO. Estudio de sobreseimiento. Este Instituto, previo al análisis de fondo del agravio formulado por el recurrente, por ser de previo y especial pronunciamiento, se analizará si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. Al



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

respecto, en el artículo 58 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se prevé:

Artículo 58. El recurso será **sobreseído** cuando:

- I. El recurrente se desista expresamente del recurso;*
- II. El recurrente fallezca o, tratándose de personas morales, se disuelva;*
- III. Cuando admitido el recurso de impugnación, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos de la presente ley, o*
- IV. La dependencia o entidad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que el medio de impugnación quede sin efecto o materia.*

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza ninguna de las causales de sobreseimiento mencionadas; ya que el recurrente no se ha desistido del recurso, no ha fallecido y no se verificó causal de improcedencia alguna.

Por otra parte, es menester señalar que la respuesta de la Procuraduría General de la República consistió en la clasificación de la documentación como información reservada y confidencial; circunstancia que fue combatida en el recurso de revisión y, aunado a ello, a manera de alegatos éste sujeto obligado ratificó los términos de su respuesta inicial. Consecuentemente, este Instituto no considera que el medio de impugnación haya quedado sin materia y, por ende, es necesario su análisis y estudio de fondo.

TERCERO. Litis del recurso. Previo a abordar el análisis del agravio, resulta pertinente hacer referencia a los antecedentes del asunto, y una vez establecido el marco teórico, efectuar el estudio del caso en concreto.

En ese orden de ideas, el particular requirió los reportes y las fotografías sobre las actividades correspondientes a los días 26 y 27 de septiembre de 2014, que el 27 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional, con sede en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero, entregó a la Procuraduría General de la República. Cabe mencionar, que se solicitó el detalle relativo al número y descripción de las fotografías obtenidas.

Es importante señalar, que el particular en su solicitud indicó que en cierto programa radiofónico, el Secretario de Gobernación en turno manifestó que en el expediente del caso constaban las declaraciones de los 26 elementos del 27 Batallón citado, quienes acudieron al llamado de una clínica, en razón de que había la presencia de personas armadas. Con base en ello, sustentó la existencia de fotografías pertenecientes a 20 jóvenes, algunos de ellos en cucullas y otros sentados en el



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

suelo. Por último, el ciudadano hizo referencia a la dirección electrónica a partir de la cual es posible desplegar una nota periodística relacionada con los hechos antes mencionados.

En su respuesta, la Procuraduría General de la República indicó que había turnado la solicitud de mérito a la **Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada**, unidad administrativa que señaló que **los documentos en cuestión se encontraban inmersos en una averiguación previa y, por ende, eran reservados**, motivo por el cual **no era posible revelarlos bajo ninguna circunstancia**.

En ese sentido, concluyó que la información debía permanecer como reservada y confidencial hasta por un período de 12 años; lo anterior, según lo previsto por los artículos 16 del Código Federal de Procedimientos Penales; 13 fracción V, 14 fracciones I y III, así como 18 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 13 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, así como 225 fracción XXVIII del Código Penal Federal.

Adicionalmente, ésta Representación Social adujo que se debía considerar que divulgar la información, vulneraría los derechos humanos de las víctimas relacionadas con los hechos que se investigan, en detrimento a su derecho a la privacidad, al acceso a la justicia, a la reparación del daño y al resguardo de su identidad, previstos en los artículos 16, párrafo segundo, 17 y 20, apartado C, fracción IV y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por otra parte, el sujeto obligado informó que la información pública sobre el caso, se encontraba disponible en determinados boletines oficiales de prensa, a los cuales era posible acceder consultando cierta liga electrónica.

Por último, la Procuraduría General de la República mencionó que la respuesta se había expedido con fundamento en lo dispuesto en los artículos 15, 29, fracción III, 31 y 45 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 fracción III de su Reglamento; por lo que al ser información en resguardo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, no era necesario ningún pronunciamiento por parte del Comité de Información de ésta Representación Social.

Más adelante, en su medio de impugnación, el recurrente se inconformó con la reserva de la documentación. Al respecto, adujo que este Organismo Autónomo, en la resolución del expediente **RDA 5366/14** en contra de la Secretaría de la Defensa



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

Nacional, determinó que la documentación debía de entregarse sin importar que ésta formara parte de una averiguación previa y que pudiera contener datos que vulneraran la actuación del Ministerio Público Federal; esto, bajo el argumento de que el interés público en mantener la averiguación previa en reserva se veía superado por el interés de la sociedad de conocer las diligencias llevadas a cabo para la investigación; y, además, el ciudadano mencionó que las víctimas sufrieron violaciones graves a derechos humanos, tal y como lo había determinado la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En dichos términos, concluyó que nadie podía clasificar la información requerida como reservada.

Por cuestión de turno, tocó conocer del recurso a la Ponencia de la Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, misma que admitió el medio de impugnación y corrió el traslado de ley a las partes. Hecho esto, la Procuraduría General de la República rindió sus alegatos, en el sentido siguiente:

- Que tanto la normativa de transparencia como la penal, consideraban las averiguaciones previas como información reservada, dado que éstas eran documentación que se generaba y recopilaba en la etapa procedimental en la que el Ministerio Público llevaba a cabo las diligencias para conocer la verdad histórica de los hechos delictivos, para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado; ello, a efecto de ejercitar o no la acción penal y, por tanto, la documentación relacionada con la misma, sin importar su naturaleza o contenido también debía reservarse;
- Que el único supuesto de excepción, para efectos de acceso a la información pública gubernamental, consistía en la entrega de una versión pública de la resolución de no ejercicio de la acción penal, supuesto que no resultaba aplicable;
- Que la averiguación previa así como todos los documentos que la integran, independientemente de su contenido o naturaleza eran estrictamente reservados y únicamente podían tener acceso aquéllos que estén legitimados, esto es, el inculcado, su defensor, la víctima u ofendido o su representante legal;
- Que tratándose de información relativa a averiguaciones previas resultaba indispensable que se verificara lo siguiente: a) acreditar el interés jurídico en dicha investigación para poder tener acceso a la información contenida en la averiguación previa y b) que el único facultado para dar información, a quien gozara de legitimación era el Ministerio Público Federal que resguardaba la investigación;



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

- Que los artículos 225, fracción VIII del Código Penal Federal y 16 párrafos sexto y séptimo del Código Federal de Procedimientos Penales, establecían que el Ministerio Público no podía dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obrara en una averiguación previa;
- Que al que quebrantara la reserva de la información de la averiguación previa o proporcionara copia de los documentos que la contuviera, estaría sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa o penal;
- Que los expedientes de las averiguaciones previas, salvo los casos de excepción señalados en el propio artículo 16, párrafos tercero y cuarto del Código Federal de Procedimientos Penales, no correspondían al marco de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, toda vez que la única autoridad facultada para proporcionar dicha información, es el Agente del Ministerio Público de la Federación que conozca de la investigación;
- Que en cuanto la manifestación del recurrente consistente en que debía entregarse la información debido a que existía un interés público superior a la reserva, bajo el argumento de que las víctimas sufrieron violaciones graves a derechos humanos y que así lo determinó la Comisión Nacional de Derechos Humanos; explicó que conforme al artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, para que un acto sea considerado como crimen de lesa humanidad debía cometerse como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque; en esa tesitura, concluyó que en el presente asunto no se advertían ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil, ya que habían sido, desde su perspectiva, acontecimientos aislados;
- Que la averiguación previa incoada con motivo de la desaparición de los estudiantes normalistas, fue por la probable comisión de los delitos de secuestro y delincuencia organizada; y que en dicha indagatoria se estaban concluyendo las diligencias para acreditar el delito de desaparición forzada perseguido en contra de funcionarios municipales; por lo que determinó que no se estaban incoando los procedimientos por delitos en contra de la humanidad previstos en el libro segundo, título tercero del Código Penal Federal.
- Que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició una investigación sobre los hechos acontecidos el día 26 de septiembre de 2014; sin embargo,



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

adujo que al día en que rendían los alegatos, aún no existía un pronunciamiento concluyente de parte de esa autoridad u alguna otra competente, en donde se determinara que en dichos sucesos se verificaron violaciones graves a los derechos humanos;

- Que en caso de proporcionarse la información requerida, se vulnerarían los derechos humanos de las víctimas (directas e indirectas) relacionadas con los hechos ocurridos en Guerrero, en claro detrimento a su derecho de privacidad, a su derecho de acceso a la justicia, así como a la reparación del daño y al resguardo de su identidad;
- Que la difusión de las indagatorias del orden criminal, afectaba a la sociedad en su conjunto, ya que la averiguación previa es en sí misma una razón de interés público. Ello, bajo el argumento de que las indagatorias protegen bienes jurídicos tutelados en la Constitución, tales como la vida y la libertad;
- Que las indagatorias son documentos en los que se ven inmersos los posibles responsables, las víctimas, los testigos, todo aquel servidor público que deba rendir declaración o emitir algún tipo de dictamen o informe, el o los defensores y el propio agente del Ministerio Público Federal;
- Que el propio agente del Ministerio Público Federal si bien es un servidor público y está obligado a transparentar su actuar, al divulgar sus datos se corría el riesgo de vulnerar su vida e incluso la de cualquiera otro de los que en ella se encuentren, así como la estabilidad social en el caso de no garantizarse el orden público, siendo el fin perseguido por la averiguación previa al llevar a cabo una investigación por la comisión de delito o delitos que agreden a la sociedad;
- Que existían elementos inmersos en la indagatoria que eran de igual relevancia que los datos personales de los involucrados en el procedimiento, por lo que la divulgación de la documentación ocasionaría un perjuicio en el cumplimiento de las leyes y la persecución de los delitos, ya que se revelaría la estrategia de investigación realizada por el agente del Ministerio Público y sus auxiliares en el descubrimiento de la verdad histórica de un hecho posiblemente constitutivo de delito;
- Que el artículo 14, fracción III de la Ley de la materia, en su literalidad manifiesta como información reservada la averiguación previa, por lo que proporcionar



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

versión pública del expediente solicitado, contravendría al precepto legal invocado;

- Que de conformidad con la teoría el interés público, toda actuación administrativa tenía un fin, por lo que la Administración Pública Federal servía con objetividad a los intereses generales, siendo el caso de la Procuraduría General de la República la investigación y persecución de la comisión de los delitos del orden federal;
- Que el derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6 de la Constitución no era absoluto, sino que, como toda garantía, se hallaba sujeto a limitaciones que se sustentaban en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados; limitaciones que, incluso, habían dado origen a la figura jurídica denominada: reserva de información;
- Que al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, el mencionado derecho no podía ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encontraba excepciones que lo regulaban y, a su vez, lo garantizaban;
- Que este Organismo Autónomo tenía como misión contribuir a garantizar el estado democrático de derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de la Constitución, mediante una procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos, en colaboración con instituciones de los tres órdenes de gobierno y al servicio de la sociedad; por lo que proporcionar a una persona o, a un pequeño grupo de personas versión pública de una averiguación previa no garantizaría el cumplimiento al interés público ya que el beneficio se limitaría única y exclusivamente a ese pequeño grupo, siendo que este Instituto se debía a la sociedad en su totalidad;
- Que de conformidad con el artículo 31 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la reserva invocada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada no se encontraba sujeta a la autoridad del Comité de Información, y



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

- Que en conclusión, requería de este Organismo Autónomo, la confirmación de la reserva de la averiguación previa relacionada con los sucesos acontecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre del 2014.

Con posterioridad, el Pleno de este Instituto aprobó por unanimidad la ampliación, por un periodo igual el término previsto en las fracciones I y V del citado artículo 55. Sin perjuicio de lo anterior, también aprobó que la Comisionada Ponente pudiera ejercer las facultades previstas en los artículos 17 y 55 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para la resolución del presente asunto.

Hecho esto, la Comisionada Ponente notificó a esa Procuraduría un requerimiento de información adicional, en los siguientes términos: a) indique en qué tomo y foja de dicha indagatoria, obran los reportes y las fotografías que el 27 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional entregó a esa Procuraduría, en relación a los sucesos correspondientes a los días 26 y 27 de septiembre de 2014; y b) en relación con el punto anterior, indique en qué tomo y foja de dicha indagatoria, obran documentales que hagan referencia al número de fotografías y/o la descripción de las mismas.

En respuesta al requerimiento de mérito, el sujeto obligado adujo que en la indagatoria **PGR/SEIDO/UEIDMS/001/2015**, obraban seis fotografías que fueron exhibidas mediante comparecencia de un militar adscrito al 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, misma que consta en el tomo 20 del referido expediente.

Como última actuación en el procedimiento, se verificó una diligencia de acceso a la averiguación previa número **PGR/SEIDO/UEIDMS/01/2015** y, en el acta conducente, se hizo constar que las fotografías fueron entregadas por un declarante, miembro del Ejército, es decir, que fueron producto de una comparecencia, razón por la cual, no existían, como tal, reportes respecto de la exhibición de las impresiones fotográficas; circunstancia que en la parte final de la diligencia fue retomada.

Asimismo, en el acta se refirió que, en el tomo 20 de la indagatoria, a partir de la foja número 365, se localizaba la Declaración Ministerial de un Coronel de Infantería, en calidad de testigo, de fecha cuatro de diciembre de dos mil catorce, relacionada con los hechos del interés del particular. En el acta se manifiesta que en la sección final de la declaración, se localizaban las únicas fotografías que obraban en la indagatoria relacionadas con los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en formato blanco y negro.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

En ese sentido, en el acta se refiere que en la foja 370 constaban las copias fotostáticas de tres fotografías en conjunto en una sola foja y, enseguida, constaban las mismas fotografías desagregadas a fojas 371, 372 y 373 con un poco de ampliación.

De esta manera, en el acta también se refirió que en las fotografías aparecían personas físicas sin poderse identificar, de apariencia en su mayoría jóvenes, observándose tranquilos, todos vestidos con ropa informal y calzados, sentados y con cabello corto. Asimismo, se refirió que no era posible apreciar el número de personas presentes en las fotografías, debido a la falta de legibilidad en las mismas, a excepción de una de ellas, donde sí se contabilizaron dos individuos. Además, en el acta se mencionó que aunque el declarante hizo mención de estudiantes y un profesor, dicho declarante no los identificó.

Por otra parte, en el acta también se hizo constar que dicha comparecencia se encontraba vinculada con lo manifestado en los informes de los días 26 y 27 de septiembre de 2014, los cuales obraban a fojas 214 a 225 del tomo 47; siendo el primero de la 214 a la 217, el segundo de la 218 a la 221 y el tercero de la 222 a la 224. De este modo, en el acta se subrayó que los informes fueron realizados por militares dirigidos a sus superiores y en ellos, constaban los nombres de diversos elementos pertenecientes al Ejército.

En ese orden de ideas, en el acta multicitada, se hizo constar que en los informes arriba mencionados, constaba una descripción de los hechos y se establecía, entre otras cosas, lo siguiente:

"...personal militar llega al Hospital María Cristina, que se encuentra con luces apagadas, al tocar a las puertas se identifican como personal militar y el Comandante encuentra a personas en estado de crisis en el segundo piso; los hacen descender a la entrada del hospital, se sientan en las bancas y sillas que ahí están. Señalan los informes que reciben llamadas telefónicas y se identifican como estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, así como un profesor, siendo aproximadamente 25 personas. Manifestando que habían sido agredidos con armas de fuego, al parecer por Policías Municipales. El personal militar se identificó con los estudiantes, solicitaron el apoyo de una ambulancia, y les manifestaron que se encontraban en ese lugar para brindarles seguridad y respeto a sus derechos humanos; que se retiraban y que la ambulancia llegaría en cualquier momento, permaneciendo aproximadamente hasta la 1:30 horas del día 27 de septiembre de 2014. El militar que describe los hechos señala que al recibir la orden de regresar al hospital Cristina, advierte que como a la 1:40 pasan dos ambulancias de la Cruz Roja, que vio que llegaron al Hospital Cristina, por lo que se retiró del lugar debido a que ya no había a quién prestarle los servicios de primeros auxilios. Se hace notar que el informe señala que había una persona herida en el labio superior. A la 1:55 arriba nuevamente a la Clínica Cristina, percatándose que ya no se encontraba el personal de estudiantes y una persona que dijo laborar en el Hospital indicó que no quisieron esperar



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

a que llegara la ambulancia. Por lo que se traslada nuevamente a las calles de Anillo Periférico Benito Juárez, esquina con Calle Juan N. Álvarez, donde se encontraban dos cuerpos sin vida y autobuses baleados. Los cuerpos fueron trasladados a SEMEFO de Guerrero y culmina sus actividades el declarante, aproximadamente a las 5:45 horas del 27 de septiembre de 2014..." (sic)

En función de lo expuesto, es menester analizar la **reserva y confidencialidad** aludida por la Procuraduría General de la República, mismas que fueron fundadas en los artículos los artículos 16 del Código Federal de Procedimientos Penales; 13 fracción V, 14 fracciones I y III, así como 18 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el artículo 27 de su Reglamento; 13 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, así como 225 fracción XXVIII del Código Penal Federal. Lo anterior, a fin de determinar si resulta fundado o no el **ÚNICO AGRAVIO** del recurrente, consistente en lo siguiente:

Ω **ÚNICO.** La improcedencia de la reserva y confidencialidad de la documentación requerida, en virtud de que en la resolución al expediente RDA 5366/14 en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional, este Organismo Autónomo determinó que la documentación debía de entregarse sin importar que ésta formara parte de una averiguación previa en curso y que pudiera contener datos que vulneraran la actuación del Ministerio Público Federal; esto, bajo los argumentos que se enlistan:

- Porque el interés público en mantener la averiguación previa en reserva se veía superado por el interés de la sociedad de conocer las diligencias llevadas a cabo para la investigación, y
- Porque las víctimas sufrieron violaciones graves a derechos humanos, tal y como lo había determinado la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, su Reglamento y demás disposiciones aplicables a la materia de la solicitud de acceso.

CUARTO. Estudio de fondo de la clasificación. Previo a realizar el análisis respectivo de la reserva de la documentación, procede analizar el marco normativo que rige al sujeto obligado, así como la relacionada con la materia de la solicitud.

Al respecto, en la Constitución Federal, se establece que la investigación y persecución de los delitos federales corresponde al Ministerio Público de la



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

Federación, el cual será el encargado de ejercer la acción penal ante los tribunales, tal como se muestra a continuación:

ARTÍCULO 21. *La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.*

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.

...

El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley.

...

ARTÍCULO 102.

A. *La ley organizará el Ministerio Público de la Federación, cuyos funcionarios serán nombrados y removidos por el Ejecutivo, de acuerdo con la ley respectiva. El Ministerio Público de la Federación estará presidido por un Procurador General de la República, designado por el Titular del Ejecutivo Federal con ratificación del Senado o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Para ser procurador se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito doloso. El procurador podrá ser removido libremente por el Ejecutivo.*

Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculcados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine.

...

Por otro lado, en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se dispone:

ARTÍCULO 1. *Esta ley tiene por objeto organizar la Procuraduría General de la República para el despacho de los asuntos que al Ministerio Público de la Federación y al Procurador General de la República les confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente ley y las demás disposiciones aplicables.*



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

**Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República**

Folio: 0001700026815

La Procuraduría General de la República, ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, ejercerá sus atribuciones respondiendo a la satisfacción del interés social y del bien común. La actuación de sus servidores se regirá por los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos.

ARTÍCULO 2. *Al frente de la Procuraduría General de la República estará el Procurador General de la República, quien presidirá al Ministerio Público de la Federación.*

...

ARTÍCULO 4. *Corresponde al Ministerio Público de la Federación:*

I. Investigar y perseguir los delitos del orden federal. El ejercicio de esta atribución comprende:

A) En la averiguación previa:

...

b) Practicar las diligencias necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado en términos de lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Penales, en coordinación con sus auxiliares y otras autoridades de los tres órdenes de gobierno, de conformidad con las disposiciones aplicables, los protocolos de actuación que se establezcan, y los convenios de colaboración e instrumentos que al efecto se celebren;

...

d) Ejercer sus facultades de investigación respecto de los delitos en materias concurrentes cuando las leyes otorguen competencia a las autoridades del fuero común, siempre que prevenga en el conocimiento del asunto, le solicite al Ministerio Público local la remisión de la investigación o se actualicen las hipótesis que para tal efecto se contemplen en ley;

...

f) Obtener elementos probatorios para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, así como solicitar a particulares su aportación voluntaria y, cuando se requiera de control judicial, solicitar al órgano jurisdiccional la autorización u orden correspondientes para su obtención;

...

h) Llevar un registro con la identificación de las personas que intervengan en la cadena de custodia y de las autorizadas para reconocer y manejar los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito;

...

n) Solicitar al órgano jurisdiccional las órdenes de cateo, la imposición del arraigo, la prohibición de abandonar una demarcación geográfica u otras medidas cautelares que resulten necesarias para asegurar el éxito de la investigación y evitar que el probable



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

responsable se sustraiga de la acción de la justicia, la protección de personas o bienes jurídicos y el debido cumplimiento de la sentencia que se dicte;

ñ) Practicar las diligencias de cateo en términos de las disposiciones legales aplicables y de acuerdo con el mandamiento judicial correspondiente, para lo que podrá auxiliarse de la policía;

...

r) Determinar el ejercicio de la acción penal o la reserva de la averiguación previa, conforme a las disposiciones aplicables;

s) Determinar el no ejercicio de la acción penal, cuando:

- 1. Los hechos de que conozca no sean constitutivos de delito;*
- 2. Una vez agotadas todas las diligencias y los medios de prueba correspondientes, no se acredite el cuerpo del delito o la probable responsabilidad del indiciado;*
- 3. La acción penal se hubiese extinguido en los términos de las normas aplicables;*
- 4. De las diligencias practicadas se desprenda plenamente la existencia de una causa de exclusión del delito, en los términos que establecen las normas aplicables;*
- 5. Resulte imposible la prueba de la existencia de los hechos constitutivos de delito por obstáculo material insuperable, y*
- 6. En los demás casos que determinen las normas aplicables;*

B) Ante los órganos jurisdiccionales:

a) Ejercer la acción penal cuando exista denuncia o querella, esté acreditado el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad de quien o quienes en él hubieren intervenido, solicitando las órdenes de aprehensión o de comparecencia.

Cuando se estime necesario atendiendo a las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado, por razones de seguridad en las prisiones o por otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, la acción penal se ejercitará ante un Juez de Distrito distinto al del lugar de la comisión del delito;

...

c) Poner a disposición de la autoridad judicial a las personas detenidas dentro de los plazos establecidos por la ley;

...

d) Aportar las pruebas y promover las diligencias conducentes para la debida comprobación de la existencia del delito, las circunstancias en que hubiese sido cometido y las peculiares del inculpado, de la responsabilidad penal, de la existencia de los daños y perjuicios, así como para la fijación del monto de su reparación;

...

e) Solicitar la autorización u orden correspondientes para la obtención de cualquier elemento probatorio cuando para ello sea necesaria la intervención de la autoridad judicial, para acreditar el delito y la responsabilidad del inculpado, de conformidad con lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Penales y demás disposiciones



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

**Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República**

Folio: 0001700026815

aplicables;

ARTÍCULO 5. *Corresponde a la Procuraduría General de la República:*

I. Participar en el Sistema Nacional de Seguridad Pública de conformidad con la ley de la materia y demás disposiciones aplicables.

...

II. Recabar, capturar, procesar, administrar y resguardar la información de los asuntos que conozca, utilizando dispositivos tecnológicos adecuados para alimentar las bases de datos correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en las normas jurídicas aplicables y los acuerdos del Procurador General de la República, así como consultar, analizar y explotar la información sobre seguridad pública contenida en dichas bases de datos;

...

ARTÍCULO 22. *Son auxiliares del Ministerio Público de la Federación:*

...

b) La Policía Federal Ministerial;

...

De lo anterior, se desprende que la Procuraduría General de la República está a cargo del Procurador, quien dirige el Ministerio Público de la Federación, al que le corresponde la investigación y persecución de los delitos del orden federal. Corresponde a éste último, entre otras funciones, las siguientes:

- ⊕ Practicar todas las diligencias necesarias para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado en coordinación con sus auxiliares y otras autoridades de los tres ámbitos de gobierno;
- ⊕ Obtener elementos probatorios, solicitar a particulares su aportación voluntaria, y cuando se requiera de control judicial, solicitar al órgano jurisdiccional la autorización u orden correspondientes para su obtención;
- ⊕ Realizar un registro con la identificación de las personas que intervengan en la cadena de custodia y de las autorizadas para reconocer y manejar los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito;
- ⊕ Solicitar al órgano jurisdiccional órdenes de cateo, imposición del arraigo, prohibición de abandonar una demarcación geográfica y otras medidas cautelares;
- ⊕ Practicar las diligencias de cateo y determinar el ejercicio de la acción penal o la reserva de la averiguación previa, y
- ⊕ Determinar el no ejercicio de la acción penal cuando los hechos de que conozca



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

no sean constitutivos de delito alguno; cuando desahogadas las diligencias y medios de prueba no se acredite el cuerpo del delito o la probable responsabilidad del indiciado; la acción penal se hubiese extinguido; se advierta una causa de exclusión del delito y resulte imposible la prueba de la existencia de los hechos constitutivos de delito.

Asimismo, la Procuraduría General de República tiene el deber de ejercer la acción penal ante los órganos jurisdiccionales cuando exista denuncia o querella, siempre que se haya acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de quien o quienes hubieran intervenido, solicitando ordenes de aprehensión o de comparecencia; poner a disposición de la autoridad judicial a las personas detenidas dentro de los plazos establecidos por la ley; **aportar pruebas y promover diligencias para la debida comprobación de la existencia del delito**, las circunstancias en que se hubiese cometido; así como solicitar la autorización u orden correspondientes para la obtención de cualquier elemento probatorio cuando para ello sea necesario la intervención de la autoridad judicial, con el fin de acreditar el delito y la responsabilidad del indiciado.

En relación con los hechos del caso, es necesario traer a colación la información pública oficial relacionada. Así, se localizó el Boletín **198/147²** de la Procuraduría General de la República, de fecha 22 de octubre de 2014, en el cual se hace una relatoría de los hechos materia de la presente solicitud:

A la PGR le fue turnada por la Fiscalía General de Justicia de Guerrero el 5 de octubre, la averiguación previa relacionada con los sucesos acontecidos en Iguala el 26 de septiembre, esto significa que el día de hoy, la Procuraduría de la República lleva 17 días con la investigación.

A manera de contexto, hay que recordar que Arturo Beltrán Leyva fue abatido en Cuernavaca en el 2009 y entonces era el líder del grupo delictivo de Los Beltrán Leyva, a su muerte, su grupo se divide y se crean varios bandos, entre ellos, el de Guerreros Unidos, estos dos grupos, estos grupos, no son dos, son cuatro, han venido disputándose áreas de influencia, principalmente en el estado de Guerrero, el grupo principal de controversia con éste es el de Los Rojos.

El 18 de octubre del 2014, la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría capturó a Sidronio Casarrubias Salgado, líder del grupo criminal Guerreros Unidos, quien ha aportado información en torno a los hechos acontecidos en Iguala el 26 de septiembre.

² <http://pgr.gob.mx/prensa/2007/bol14/Oct/b19814.shtm>



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

**Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República**

Folio: 0001700026815

A partir de esta detención y después de sus declaraciones, se ha logrado establecer una línea de investigación que hoy comparto con ustedes.

Si recuerdan, en un principio teníamos varias líneas de investigación, hoy tenemos una línea de investigación; el grupo delincuenciaal autodenominado Guerreros Unidos había tejido una red de complicidad en varias alcaldías, sobre todo con personal de seguridad municipal. En el caso concreto de Iguala, esta complicidad abarcaba desde autoridades municipales hasta la policía local con Guerreros Unidos.

Este grupo delictivo, de acuerdo con las declaraciones de los detenidos y del propio líder del grupo, recibía del presidente municipal de 2 a 3 millones de pesos de manera regular, mensual, bimensual, semanal, de los cuales, cuando menos 600 mil, según declaran los propios operadores financieros, eran destinados al control de la policía local, además de que el grupo delincuenciaal decidía los nuevos ingresos de los integrantes como policías municipales.

Este líder del grupo delictivo Guerreros Unidos, señaló a la señora María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde de Iguala, como la principal operadora de actividades delictivas desde la presidencia municipal, desde luego, en complicidad con su esposo, el señor José Luis Abarca y el Secretario de Seguridad, Felipe Flores Velázquez.

También, como se ha informado, la señora Pineda Villa es pariente en grado directo de dos operadores financieros del grupo que dirigía Arturo Beltrán Leyva.

Como antecedente directo es importante señalar, en julio de 2013 la alcaldía de Iguala, ya con José Luis Abarca como presidente municipal, fue agredida en un conflicto entre personas afines al alcalde y el grupo Unión Popular Emiliano Zapata.

De acuerdo con los antecedentes y las declaraciones de integrantes del ayuntamiento, en este incidente de hace más de un año participaron estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.

Ya entrando en los hechos acontecidos el 26 de septiembre en Iguala, podemos referir que alrededor de las 18 horas, estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos abordan en Ayotzinapa dos camiones Estrella de Oro con destino a Iguala, que arriban a Iguala alrededor de las 21 horas, los estudiantes toman dos unidades adicionales, esta vez de la empresa Costa Online, hubo resistencia del chofer de una tercera unidad de esta misma empresa, al cual lesionaron, en ese momento los estudiantes contaban con los dos camiones obtenidos en Chilpancingo, más los otros dos obtenidos en Iguala.

En adición a las lesiones reportadas al conductor del camión de pasajeros, algunos relatan otro incidente enfrente de un lavado de autos, también en la ciudad de Iguala, donde resultó herida una dependiente, esta línea de investigación, sublínea de investigación sigue abierta.

Según testimonio de los "halcones", informantes, del grupo delictivo Guerreros Unidos y elementos de la Policía de Iguala, reportan al Centro de Control de Iguala el arribo de estudiantes de Ayotzinapa y de algunas otras personas, esto fue declarado por el



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

**Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República**

Folio: 0001700026815

funcionario local David Hernández Cruz, adscrito al área de Protección Civil y Seguridad Pública de Iguala, quien estaba a cargo del Centro de Control de la Policía de Iguala.

Este funcionario local inicia el levantamiento de los reportes y envío de las comunicaciones a las unidades de la policía de Iguala. Aunado a las declaraciones de quien dirigía el Centro de Control de la Policía Municipal de Iguala, se suman las declaraciones de Marco Antonio Ríos Verder, integrante del grupo criminal Guerreros Unidos y de policías detenidos, quienes asumieron que el grupo que se aproximaba, se dirigía a sabotear la celebración que se realizaría, que se realizaba en esos momentos por la esposa del alcalde, María de Ángeles Pineda, con motivo de su informe de actividades.

En las declaraciones de los detenidos se precisa que podría repetirse, pensando ellos que podría repetirse el escenario de conflicto que se vivió en junio de 2013 en la alcaldía de Iguala, se les ordena reaccionar y pedir apoyo a la policía de Cocula.

Los mismos detenidos declaran que la orden de enfrentar a las personas les llega por radio desde la Central y se les dice que viene de parte del A-5, clave que se usaba para identificar al alcalde de Iguala.

Entre ambas policías bloquean la carretera y evitan el desplazamiento de los autobuses en que se movían los estudiantes, en ese primer incidente, un policía municipal priva de la vida con arma de fuego a uno de los estudiantes.

Al existir esta agresión, parte del grupo de los estudiantes que se aproximaba y otros sujetos, intentan darse a la fuga en un camión, por lo que la policía de Iguala empieza el rastreo de la unidad que había logrado escapar.

En la confusión reinante, la Policía de Iguala detiene y dispara al autobús que transportaba al equipo de fútbol "Los Avispones de Chilpancingo", al darse cuenta del error, los libera, minutos después detienen el camión que se había escapado.

El grupo de detenidos es ingresado a la Central de Policía de Iguala y tiempo después son sustraídos de esa dependencia por policías del municipio de Cocula, quienes actuaban en complicidad con los de Iguala, se tiene acreditado que el subjefe de la policía de Cocula, César Nava, estaba también a las órdenes de los Guerreros Unidos y existe una línea de investigación para averiguar si esta penetración del crimen organizado en Cocula llegó a niveles superiores.

Para tratar de encubrir sus hechos delictivos, la policía de Cocula cambió el balizado de sus unidades y alteró las bitácoras y fatigas de hechos relevantes, cuestión que fue detectada por los peritos de la Procuraduría de la República, ya que se tienen a la mano las bitácoras originales que fueron encontradas en un chaleco en la policía Municipal de Cocula, además de que se ubicó el taller donde se cambió la numeración e las patrullas, mismo hecho que fue ratificado con un examen pericial, tienen ahí en la pantalla las fotos.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

**Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República**

Folio: 0001700026815

En este momento, el grupo de personas en el que se presume estaban algunos estudiantes, son subidos a una camioneta de redilas blanca y toman un camino de terracería que los lleva a la zona de Pueblo Viejo, en esta coyuntura, Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos, es contactado por su lugarteniente conocido como "El Gil", este último reporta vía mensaje celular los conflictos que se estaban suscitando en Iguala, atribuyéndolos al grupo delictivo contrario.

Ante ello, Sidronio Casarrubias avala las acciones para, entre comillas, la defensa de su territorio de influencia en Iguala.

El camino de terracería que toman los delincuentes para llevar al grupo de personas retenidas ilegalmente es muy conocido por "El Gil", él vive en esa zona, ahí está su vivienda, misma que también es muy cercana al paraje donde se encontraron, primero seis fosas y en total nueve.

Además, el día 9 de octubre en el patio de la casa de "El Gil", se encontró una camioneta de redilas blancas que presuntamente se utilizó para el traslado de las personas retenidas, esto es cuando ese día 9 la Procuraduría General de la República hace un cateo de su casa.

En estas fosas se han realizado dos exámenes periciales; los dos primeros, uno realizado por la PGR y otro por la Policía Federal, se basaron en muestras genéticas que nos entregó la Fiscalía General de Guerrero, los resultados de esos primeros exámenes resultaron negativos para identificar a los estudiantes no localizados.

El tercer peritaje, viene siendo realizado por forenses argentinos que coadyuvan en la investigación, ellos tomaron muestras directas a los familiares de los estudiantes y estamos en espera de los resultados, estos resultados serán fundamentales para corroborar o no la muestra que nos fue entregada por la Fiscalía guerrerense.

En este punto quiero decirles que haciendo la revisión de lo que nos fue entregado por la Fiscalía de Guerrero y siguiendo las líneas de investigación que nos marcamos, hemos encontrado dos cuerpos más en ese mismo número de fosas, hasta este momento, mismos que nuestros peritos y los peritos argentinos están analizando.

De todo lo anterior ¿qué se acredita?

Con las declaraciones obtenidas, las investigaciones realizadas, los peritajes hechos, lo acontecido el 26 de septiembre en Iguala constituyó una represión violenta por parte de las policías de Iguala y Cocula, dirigidos por el grupo delincuencia que ya está muy señalado, con la intención de disuadir a un grupo de personas a hacer presencia en el evento de celebración que el alcalde y su esposa estaban realizando esa noche en Iguala, con motivo del informe de la segunda.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

Asimismo, en el Boletín 212/14³ de la Procuraduría General de la República, de fecha 7 de noviembre de 2014, se localizó la siguiente información:

Veamos los avances, paso por paso:

Como podemos apreciar en el mapa, el grupo de jóvenes salió a bordo de dos camiones Estrella de Oro de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzipana, rumbo a la entrada de la ciudad de Iguala, posteriormente se trasladaron a la terminal de autobuses, donde tomaron otros dos camiones de una empresa.

El ex presidente municipal de Iguala, quien tenía designado en la comunicación interna de la policía municipal el código "A-5", fue quien dio la orden a los policías municipales de contener a las personas que viajaban en esos cuatro camiones, según declara el propio operador de la central de radio de la policía municipal de Iguala, David Hernández Cruz, y la ratifica uno de los vigilantes que ellos conocen como halcones, que recibía comunicación.

Es en este mismo evento, como se ha informado, los policías municipales de Iguala privaron de la vida a tres normalistas.

El ex presidente municipal se encontraba en esos momentos en el informe que daba su esposa sobre sus actividades frente al DIF municipal.

Se avanza en la investigación sobre María de los Ángeles Pineda por su relación con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita junto con su esposo.

Después del primer incidente que sufren los normalistas y al continuar su camino en los autobuses, elementos de la policía municipal de Iguala los retiene con violencia y los traslada a la central policiaca, desde ese punto y con apoyo de la Policía Municipal d Cocula, trasladan en patrullas de los municipios al grupo de jóvenes hasta un punto entre Iguala y Cocula en que se abre una brecha hacia la zona que se denomina Loma de Coyote, la cual también está señalada en el mapa que se muestra.

Ha quedado acreditado por las investigaciones del Ministerio Público Federal que en este punto, entre Iguala y Cocula, los policías municipales entregaron a los detenidos a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.

En la investigación que nos fue remitida por la Fiscalía de Guerrero, se aseguraba que los jóvenes habían sido llevados a las fosas ubicadas en la zona de Pueblo Viejo, en donde se señalaba, se les había sepultado. Hasta el momento, los peritajes realizados nos han permitido tener la certeza de que los restos encontrados en esas primeras fosas, las de Pueblo Viejo, no son las de los jóvenes estudiantes y también se ha logrado determinar la plena identificación de cuatro de las personas que se encontraban en esas

³ <http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol14/Nov/b21214.shtm>



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

**Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República**

Folio: 0001700026815

fosas, las cuales fueron asesinadas en el mes de agosto, es decir, un mes antes de los hechos.

Incluso se encontraron restos que correspondían a mujeres, mientras que el grupo de estudiantes normalistas de Ayotzinapa estaba constituido sólo por varones, hechos de los que se ha iniciado una investigación y en este momento ya podemos determinar que policías municipales de Iguala se encuentran involucrados en el homicidio de estos cuatro cuerpos identificados en las primeras fosas de Cerro Viejo.

En esa coyuntura, el hoy detenido, Sidronio Casarrubias Salgado, líder de ese grupo criminal, como lo refiere en su declaración, fue contactado por su lugarteniente de nombre Gildardo López Astudillo, conocido como "El Gil", quien le informó vía mensaje celular, los conflictos que se estaban suscitando en Iguala, atribuyéndoselos al grupo delictivo contrario. Casarrubias Salgado fue quien avaló las acciones para, entre comillas, defender su territorio.

Pueden ver en pantalla las fotografías de los señalados y me interesa que vean en específico la de Gildardo López Astudillo, conocido como "El Gil", porque es la primera vez que se publica y para esta Procuraduría sería de la mayor importancia la colaboración del público en la búsqueda de este individuo. La foto, en un momento más la verán y si me permiten, continúo, las más recientes detenciones entre las que figuran los tres autores materiales mencionados nos han permitido conocer la última etapa de la cadena delictiva que hasta este momento tenemos.

Los últimos tres detenidos declaran que en la brecha que lleva al paraje Loma de Coyote, recibieron de los policías municipales a un número de personas que no pueden precisar con exactitud, pero que uno de los detenidos estimó en su declaración, en más de 40 personas, esta es parte de su declaración.

Como observamos en el mapa, en lugar de tomar el camino a Pueblo Viejo, lugar que fue en primera instancia señalado por la Fiscalía del Estado de Guerrero, los detenidos señalan que tomaron la carretera con dirección a Cocula, para posteriormente dirigirse al basurero de ese municipio. Declaran también que los subieron a un vehículo con capacidad de carga de 3.5 toneladas y a otra camioneta de carga menor. En estos vehículos los condujeron al basurero señalado, que es un barranco oculto a la vista y que para entrar a él se tiene que abrir una reja que limita el acceso al público o al predio. En pantalla pueden apreciarse las imágenes de las camionetas utilizadas en el basurero de Cocula. Uno de los delincuentes, quien tenía designada la función de "halcón" informante, declara haberlos visto pasar por el punto en que tenía él la encomienda de vigilar. Dos de los detenidos declaran que algunas de las personas que trasladaron al basurero de Cocula llegaron o sin vida o inconscientes y que los otros fueron interrogados por integrantes del grupo criminal para determinar quiénes eran y las razones de su llegada a Iguala. Después de estas imágenes veremos las imágenes de esta declaración.

Los documentos, los detenidos perdón, señalan que en ese lugar privaron de la vida a los sobrevivientes y posteriormente los arrojaron a la parte baja del basurero, donde quemaron los cuerpos; hicieron guardias y relevos para asegurar que el fuego durara



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

**Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República**

Folio: 0001700026815

horas, arrojándole diesel, gasolina, llantas, leña, plástico, entre otros elementos que se encontraron en el paraje. El fuego, según declaraciones, duró desde la media noche hasta aproximadamente las 14 horas del día siguiente, según uno de los detenidos y otro dice que hasta las 15 horas del día 27 de septiembre.

Por el calor que desprendía el área, los delinquentes no pudieron manipular los restos de los cuerpos, sino hasta cerca de las 5 y media de la tarde, según sus propias declaraciones. Cuando los peritos analizaron el lugar, encontraron cenizas y restos óseos que por las características que tienen, corresponden a fragmentos de restos humanos. También aquí están las imágenes.

Corroboran estos dichos las declaraciones de dos empleados del área de servicios públicos del municipio de Cocula, quienes en su declaración ante el Ministerio Público señalan que cuando iban a bordo del camión de basura municipal, identificado como la unidad 01, fueron interceptados por dos de los ahora detenidos, quienes les impidieron el paso y les ordenaron que regresaran, esta versión fue en un primer momento narrada por dos de los detenidos y posteriormente confirmada por los propios empleados del municipio de Cocula, quienes además reconocieron a los detenidos como los mismos que les impidieron el paso, señalando que no se habían acercado a declarar de modo propio en razón de tener temor a represalias. Viendo todo esto, entiende uno ese temor.

Continuando en el relato de los hechos, los detenidos declaran que cuando bajan al lugar donde se habían arrojado y quemado los cuerpos, recibieron la orden de quien apodan "El Terco", de fracturar los restos de los huesos calcinados para ser depositados en bolsas de basura negras. Según sus declaraciones, estas bolsas fueron vaciadas en el río San Juan, salvo dos que uno de los declarantes dice haber arrojado completas.

Fuerzas federales, investigadores y peritos recorrieron la zona señalada por los detenidos, como ustedes lo acaban de ver en las imágenes, hicieron en el Río San Juan una búsqueda exhaustiva, en esta búsqueda y en el cumplimiento de su deber, por desgracia para las instituciones, falleció ahogado un elemento de la Policía Federal. Buzos de la Armada de México y peritos tanto mexicanos como argentinos, encontraron restos de las bolsas y su contenido, una de ellas permanecía cerrada, misma que contenía elementos óseos, que hoy podemos confirmar que por sus características corresponden a restos humanos. Les pido sigan viendo las imágenes.

A decir de los peritos, el alto nivel de degradación causado por el fuego a los restos encontrados, hace muy difícil la extracción de ADN que permita la identificación, sin embargo, no agotaremos esfuerzos, no los escatimaremos hasta agotar todas las posibilidades científicas y técnicas. Los peritos, tanto de la Procuraduría General de la República como los forenses argentinos en un esfuerzo exhaustivo, continuarán sus trabajos hacia la identificación.

Para avanzar en la eventual identificación de estos restos humanos, los equipos forenses han recomendado que los estudios se realicen en los laboratorios más altamente especializados del mundo. Luego de varias videoconferencias y llamadas a distintos laboratorios, se acordó realizar estudios denominados mitocondriales, los



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

**Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República**

Folio: 0001700026815

equipos periciales coincidieron que el mejor lugar para practicar estos estudios sería la Universidad de Innsbruck en Austria.

Al solicitar a los expertos internacionales la determinación de tiempo que llevarán estos estudios, complicados por la extrema calcinación de los restos, nos han señalado que no se puede especificar una fecha definida para la entrega de sus resultados.

Entre las muchas pesquisas realizadas en esta investigación por la Procuraduría General de la República y las autoridades federales, se han encontrado entre otras cosas armas de grueso calibre, incluidas armas de calibre 50, de 50 milímetros, 53 mil cartuchos como parte del arsenal que pertenecía al grupo criminal.

Este hallazgo es una muestra de la peligrosidad de ese grupo delincuencia al que hemos venido desarticulando.

De lo que se desprende hasta este momento en las investigaciones quiero dejar muy claro que no hay evidencia alguna de que los estudiantes de Ayotzipana formaran parte o auxiliaran a grupo criminal alguno.

Las autoridades federales continúan en la búsqueda y aprehensión de todos los identificados como participantes de los hechos, 74 personas están detenidas y se están por cumplimentar 10 órdenes de aprehensión más, pero detendremos a todos los involucrados en estos hechos.

Reitero que la investigación queda abierta hasta agotar todas las posibilidades que permitan identificar los restos humanos encontrados en la barranca y en las bolsas localizadas en el Río San Juan; mientras tanto, se seguirán considerando como desaparecidos a los estudiantes de Ayotzinapa para efectos de la investigación.

Como lo hemos señalado en varias ocasiones, la averiguación está abierta al escrutinio de los coadyuvantes nombrados por los familiares de los desaparecidos, quienes han tenido acceso a ella, por instrucciones del Presidente de la República, todas las fuerzas federales participan activa y coordinadamente en lo que ya es una de las investigaciones más grandes de que se tenga memoria. En esta destaca el uso de la tecnología, la inteligencia, coordinación y la distribución del trabajo entre las dependencias del Gobierno Federal.

A partir de los boletines de prensa citados, se desprende que los hechos verificados el 26 de septiembre en Iguala Guerrero se desarrollaron de la siguiente manera:

- ❖ Que el 26 de septiembre de 2014, alrededor de las 18 horas, estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos abordan en Ayotzinapa dos camiones Estrella de Oro con destino a Iguala, que arriban a Iguala alrededor de las 21 horas, posteriormente se trasladaron a la terminal de autobuses, donde tomaron otros dos camiones de la empresa Costa Online;



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

- ❖ Que según testimonio de los "halcones", informantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y elementos de la Policía de Iguala, reportaron al Centro de Control de Iguala el arribo de estudiantes de Ayotzinapa;
- ❖ Que aunado a las declaraciones de quien dirigía el Centro de Control de la Policía Municipal de Iguala, se sumaron las declaraciones de Marco Antonio Ríos Verde, integrante del grupo criminal Guerreros Unidos y de policías detenidos, quienes asumieron que el grupo que se aproximaba, se dirigía a sabotear la celebración que se realizaba en esos momentos por la esposa del alcalde, María de Ángeles Pineda, con motivo de su informe de actividades;
- ❖ Que en las declaraciones de los detenidos se precisó que podría repetirse el escenario de conflicto que se vivió en junio de 2013 en la alcaldía de Iguala (conflicto entre personas afines al alcalde y el grupo Unión Popular Emiliano Zapata), por lo que se les ordenó reaccionar y pedir apoyo a la policía de Cocula;
- ❖ Que los detenidos declararon que la orden de enfrentar a las personas les llega por radio desde la Central y se les dice que viene de parte del A-5, clave que se usaba para identificar al alcalde de Iguala;
- ❖ Que entre ambas policías bloquearon la carretera y evitaron el desplazamiento de los autobuses en que se movían los estudiantes. Es en este mismo evento, los policías municipales de Iguala privaron de la vida a tres normalistas;
- ❖ Que al existir esta agresión, parte del grupo de los estudiantes que se aproximaba y otros sujetos, intentaron darse a la fuga en un camión, por lo que la policía de Iguala empezó el rastreo de la unidad que había logrado escapar;
- ❖ Que en la confusión reinante, la Policía de Iguala detuvo y disparó al autobús que transportaba al equipo de fútbol "Los Avispones de Chilpancingo", pero al darse cuenta del error los liberó; minutos después detuvieron el camión que se había escapado;
- ❖ Que el grupo de detenidos fue ingresado a la Central de Policía de Iguala y tiempo después fueron sustraídos de esa dependencia por policías del municipio de Cocula, quienes actuaban en complicidad con los de Iguala;
- ❖ Que el grupo de personas en el que se presume estaban algunos estudiantes, fueron subidos a una camioneta de redilas blancas y tomaron un camino de terracería que los llevó a la zona de Pueblo Viejo. En esta coyuntura, Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos, fue contactado por su lugarteniente conocido como "El Gil"; este último reportó vía mensaje celular los conflictos que se estaban suscitando en Iguala, atribuyéndolos al grupo delictivo contrario. Ante ello, Sidronio Casarrubias avaló las acciones para "la defensa de su territorio" de influencia en Iguala;
- ❖ Que en la investigación que fue remitida por la Fiscalía de Guerrero, se aseguró que los jóvenes habían sido llevados a las fosas ubicadas en la zona de Pueblo



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

**Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República**

Folio: 0001700026815

Viejo, en donde se señaló, se les había sepultado. Sin embargo, los últimos tres detenidos declararon que en la brecha que lleva al paraje Loma de Coyote, recibieron de los policías municipales a un número de personas que no pudieron precisar con exactitud, pero que uno de los detenidos estimó en su declaración, en más de 40 personas;

- ❖ Que en lugar de tomar el camino a Pueblo Viejo, lugar que fue en primera instancia señalado por la Fiscalía del Estado de Guerrero, los detenidos señalaron que tomaron la carretera con dirección a Cocula, para posteriormente dirigirse al basurero de ese municipio. Declararon también que los subieron a un vehículo con capacidad de carga de 3.5 toneladas y a otra camioneta de carga menor. En estos vehículos los condujeron al basurero señalado, que es un barranco oculto a la vista y que para entrar a él se tiene que abrir una reja que limita el acceso al público o al predio;
- ❖ Que dos de los detenidos declararon que algunas de las personas que trasladaron al basurero de Cocula llegaron o sin vida o inconscientes y que los otros fueron interrogados por integrantes del grupo criminal para determinar quiénes eran y las razones de su llegada a Iguala;
- ❖ Que los detenidos señalaron que en ese lugar privaron de la vida a los sobrevivientes y posteriormente los arrojaron a la parte baja del basurero, donde quemaron los cuerpos; hicieron guardias y relevos para asegurar que el fuego durara horas, arrojándole diesel, gasolina, llantas, leña, plástico, entre otros elementos que se encontraron en el paraje. El fuego, según declaraciones, duró desde la media noche hasta aproximadamente las 14 horas del día siguiente, según uno de los detenidos y otro dice que hasta las 15 horas del día 27 de septiembre de 2014, y
- ❖ Que los detenidos declararon que cuando bajan al lugar donde se habían arrojado y quemado los cuerpos, recibieron la orden de quien apodan "El Terco", de fracturar los restos de los huesos calcinados para ser depositados en bolsas de basura negras. Según sus declaraciones, estas bolsas fueron vaciadas en el río San Juan, salvo dos que uno de los declarantes dijo haber arrojado completas.

Por otra parte, se localizó el Boletín 184/149⁴ de la Procuraduría General de la República, de fecha 07 de octubre de 2014, el cual contiene la siguiente información:

*ENCABEZA PROCURADOR JESÚS MURILLO KARAM REUNIÓN SOBRE
INVESTIGACIONES DE HECHOS OCURRIDOS EN AYOTZINAPA. El Procurador
General de la República, Jesús Murillo Karam, consecuente con las instrucciones del*

⁴ <http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol14/Oct/b18414.shtm>



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

Presidente de la República, encabezó esta mañana, una reunión con autoridades federales y estatales, sobre las investigaciones que se realizan para determinar quiénes son los responsables de los hechos ocurrido en Ayotzinapa, Guerrero.

*En la reunión, que se realizó en las instalaciones del **41 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Ciudad de Iguala**, participaron el Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado, **así como del Ejército Mexicano**, y la Gendarmería Nacional.*

Cabe señalar, que hoy por la mañana arribó a bordo de cinco helicópteros de la PGR, personal de la institución entre agentes del Ministerio Público, peritos forenses, criminalistas y especialistas en distintas ramas de la investigación, quienes coadyuvaran en la integración de la indagatoria.

En ese orden de ideas, el Boletín 187a/1410⁵ de la Procuraduría General de la República, de fecha 9 de octubre de 2014, contiene lo siguiente:

RUEDA DE PRENSA SOBRE ESTADO DE INVESTIGACIONES POR SUCESOS EN IGUALA, GUERRERO. La relevancia del asunto y las instrucciones específicas del Jefe del Ejecutivo hacen que tengamos la obligación con la opinión pública de ir informando cuáles son los avances en este asunto tan serio, tan delicado y tan indignante de lo que sucedió en Iguala.

A partir de que la Procuraduría General de la República se incorporó ya de manera formal en esta investigación, quería decirles que a partir del día de ayer tenemos cuatro detenidos, cuatro nuevos detenidos, cuya identificación está confirmándose, por eso todavía no les doy los nombres, pero la relevancia de estas detenciones radica en que nos llevaron a un lugar en donde encontramos cuatro fosas en donde a decir de estos detenidos, a decir de ellos, fueron ahí también depositados los restos de estudiantes asesinados, no podemos confirmar todavía que esto sea real hasta que no hayamos hecho un levantamiento adecuado de estas y poder identificar mediante procedimientos periciales serios si esta revelación es cierta, estamos ya en la zona, tenemos ya ubicadas estas fosas, están ya trabajando los grupos de peritos de la Procuraduría General de la República, están perfectamente custodiada la escena, de manera tal que no se altere, ni se toque y estaremos en el procedimiento procesal para los nuevo cuatro detenidos.

...

Le voy a pedir al Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal que les de los detalles.

TOMÁS ZERÓN DE LUCIO (TZL): Muchas gracias señor Procurador, muy buenas tardes, lo que hemos realizado por instrucciones del señor Procurador, es, instalamos unas mesas de trabajo, las cuales se mantendrán de manera permanente en Iguala, en cuales vamos a estar dividiéndolo de diferentes formas, vamos a tener una mesa estratégica de alto nivel, tenemos una mesa de gabinete, en la cual estamos analizando el

⁵ <http://pgr.gob.mx/prensa/2007/bol14/Oct/b187a14.shtm>



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

**Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República**

Folio: 0001700026815

análisis de toda la información y tenemos una mesa de investigación y operación, todo esto coordinada con las diferentes instancias del Gobierno Federal, se encuentra Policía Federal, se encuentra Gendarmería, el Ejército, está Marina, está la Procuraduría General de la República coordinando con información que también nos está brindando la Procuraduría estatal.

¿Qué es lo que estamos tratando de hacer con estas mesas? Identificar y cuantificar con exactitud el número de estudiantes no localizados, estamos ahorita en la búsqueda de las personas que aparecieron para localizar y que puedan realizar las declaraciones necesarias para seguir con la investigación. Asimismo, hemos definido ya objetivos para lograr la ubicación y detención, de las cuales, como informó ya el señor Procurador, llevamos 4, sumados a los 30 que teníamos al día de ayer, ya llevamos 34 detenidos relacionados con este hecho y la instrucción que tenemos, es agotar todas las líneas de investigación. De manera pericial, estamos también con muchas diligencias dentro de las que predomina la genética, antropología, odontología, criminalística, fotografía y video, al día de ayer teníamos 35 peritos que estaban trabajando en la zona, hoy estamos reforzando con 10 peritos más, los cuales se suman a la búsqueda en estas nuevas fosas, tenemos una célula de inteligencia de campo, la cual está trabajando muy de la mano con las demás instancias, la Comisión Nacional de Seguridad nos está apoyando en este evento con 400 policías federales, policías tácticos, policías de investigación y la policía científica, así como el Ejército Mexicano con el personal de 35 Zona Militar.

Parte de los objetivos que tenemos es la identificación, la ubicación y detención del Presidente Municipal, de su esposa y del Secretario de Seguridad Pública, así como un número ya también determinado de objetivos, los cuales ya estamos identificando, ya estamos ubicando y en este momento seguimos trabajando, es cuanto señor Procurador.

Adicionalmente, en el Boletín 005/15⁶ de la Procuraduría General de la República, de fecha 13 de enero de 2015, se dio a conocer lo siguiente:

Los funcionarios de la Procuraduría General de la República expusieron las líneas de investigación que se llevaron a cabo durante la investigación, destacando la exposición de peritajes y dictámenes científicos que obran en autos, y de los cuales se desprende que las declaraciones de los involucrados, específicamente de quienes participaron en la última etapa de los hechos, que tienen sustento y que fueron el día 26 de septiembre.

Además, les fue presentado un video -que en su momento será dado a conocer a la opinión pública- en donde se detalló pasó a paso el resultado de la investigación, destacando la detención de 97 personas al día de hoy, así como la cronología de los eventos el día de los hechos, de acuerdo a las declaraciones y la reconstrucción narrada por los hoy ya consignados.

Desde el primer día, el Gobierno Federal tuvo conocimiento legal e inició las investigaciones, se han integrado más de 82 tomos y 13 anexos al expediente, mismos

⁶ <http://www.pgr.gob.mx/Prensa/2007/bol15/Ene/b00515.shtm>



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

**Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República**

Folio: 0001700026815

que han podido ser consultados en su totalidad por los representantes de los padres de familia, acreditados previamente para este tema.

En el mismo sentido, durante el día uno se integró una mesa de inteligencia en la que participan representantes de todas las corporaciones de seguridad del Gobierno Federal y oficinas de inteligencia del país, asesorados por personal de agencias extranjeras que colaboraron en la recolección y explotación de información sobre el paradero de los estudiantes.

Se ha logrado acreditar la relación de María de los Ángeles Pineda Villa con el grupo delincuencia "Guerreros Unidos", obteniéndose al día de hoy una nueva orden de aprehensión que fue cumplimentada en reclusión y en contra de 53 personas más por el delito de delincuencia organizada Asimismo, se obtuvo una orden de aprehensión en contra de 45 personas, entre las que destaca José Luis Abarca Velázquez, por el secuestro de los 43 estudiantes normalistas, también dentro de una nueva consignación.

De igual manera se obtuvo una orden de aprehensión en contra de cinco policías municipales del municipio de Iguala por el delito de desaparición forzada, así como el auto de formal prisión para los últimos diez policías de dicho municipio consignados por esta Procuraduría hace unos días.

Al responder algunas de las dudas de los padres de familia, se expuso lo siguiente:

Primero: todas las declaraciones tienen sustento jurídico y ya forman parte de esta investigación.

Segundo: el día de hoy se han realizado 16 cateos y se han agotado todas las líneas de investigación surgidas durante la indagatoria, habiendo rendido declaración 385 personas, incluyendo a 36 militares.

Tercero: se han realizado análisis forenses a 93 equipos telefónicos asegurados a los presuntos responsables para establecer redes de vínculo el día de los hechos, y obran dentro de las constancias 444 dictámenes de distintas especialidades periciales elaborados por la Agencia de Investigación Criminal.

Cuarto: al día de hoy se ha detenido a 97 personas, sobre quienes se han tipificado diferentes grados de responsabilidad por diversos delitos, respecto de 221 órdenes de aprehensión, siendo que para algunas de estas personas se ha cumplimentado más de una orden.

Quinto: la Procuraduría General de la República informó al respecto de las diligencias que se están llevando a cabo para la detención del resto de los implicados como resultado de esta investigación.

Sexto: de ninguna declaración que se ha obtenido en la Procuraduría se desprende que elementos del Ejército o algún cuerpo de seguridad del Gobierno Federal, haya tenido participación alguna en la desaparición de los estudiantes.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

**Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República**

Folio: 0001700026815

Séptimo: la búsqueda que se realizó por parte del Gobierno Federal, en compañía de los padres durante casi cuatro meses para dar con el paradero de los estudiantes, no se suspendió ni un momento, ni siquiera en la pasada temporada vacacional, habiendo realizado recorridos, inclusive los días 24 y 31 de diciembre acompañados las fuerzas federales de los padres de los normalistas.

Ocho: se les explicaron los resultados científicos que indican la posibilidad de haber incinerado los cadáveres, tal y como lo señalan las declaraciones de los propios detenidos; se les invitó a revisar los dictámenes que obran en el expediente al cual tienen acceso sus asesores y sus representantes, mismos que han sido acreditados como coadyuvantes dentro de la investigación.

Por otro lado, en la página de la Cámara de Diputados, fue posible localizar el Boletín número 4333⁷ de fecha 08 de octubre de 2014, mediante el cual se dio a conocer que se instaló una Comisión Especial para el caso Ayotzinapa:

Este miércoles quedó formalmente instalada la Comisión Especial para dar Seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos originados en Iguala, Guerrero, a alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, "Raúl Isidro Burgos".

Tras declararse en sesión permanente, el grupo plural de legisladores se pronunció por no politizar el tema y conducirse con profesionalismo y ética, dado que la investigación no es un asunto menor y los trabajos que desarrolle la Comisión estarán siendo observados por la opinión pública nacional e internacional.

*Su presidente, el diputado Guillermo Anaya Llamas (PAN) informó que uno de los primeros acuerdos fue **girar oficios a los titulares de la Procuraduría General de la República y de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Gobernación, para solicitarles información respecto al caso Ayotzinapa y agendar reuniones de trabajo.***

Asimismo, dijo, se enviarán los oficios correspondientes a los responsables del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México.

Del mismo modo, los legisladores acordaron trasladarse al estado de Guerrero lo más pronto posible para reunirse con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, con el procurador general de Justicia local, con familiares de los estudiantes desaparecidos, con líderes estudiantiles y con organismos de la sociedad civil, entre otros.

⁷ <http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/Octubre/08/4333-Diputadosinstalan-Comision-Especial-para-el-caso-Ayotzinapa-coinciden-en-no-politizar-trabajos>



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

**Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República**

Folio: 0001700026815

Anaya Llamas manifestó que este crimen ha generado una indignación nacional y por su gravedad, esta comisión deberá dar un seguimiento exhaustivo a las indagatorias de manera responsable y ética.

La diputada Lizbeth Rosas Montero (PRD) coincidió en que no se debe politizar el caso y que este órgano legislativo asuma un papel de estabilizador de la gobernabilidad y no ser una caja de resonancia para satanizar al gobierno del estado.

Planteó elaborar un plan de trabajo que contemple reuniones con funcionarios de los gobiernos federal y de Guerrero, con autoridades ministeriales, organizaciones de la sociedad civil, organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, el CISEN, Sedena, y con los familiares de los normalistas desaparecidos, incluso, dijo, con representantes de la Iglesia católica de la entidad.

...

La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) se pronunció por demostrar que esta comisión especial no fue creada para proteger al gobernador de Guerrero respecto a los hechos ocurridos en Iguala, ni para quitarlo o desestabilizar a su gobierno con miras a las próximas elecciones.

La posición del PT, dijo, es esclarecer los hechos y hacer justicia a los estudiantes. La legisladora se manifestó por actuar con celeridad y en este sentido pidió citar a comparecer, "cuanto antes", a funcionarios del gobierno federal y estatal, así como trasladarse a Guerrero en las próximas horas para iniciar los trabajos correspondientes.

Por acuerdo de la Cámara de Diputados, el grupo de trabajo quedó integrado por un representante de cada una de las siete fuerzas políticas y estará vigente hasta el 31 de agosto de 2015.

De manera paralela, en la página de la Cámara de Diputados, fue posible localizar la Nota número 8500⁸ de fecha 08 de octubre de 2014, que es del tenor siguiente:

La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) afirmó que propuso ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que la Comisión Especial para dar seguimiento a investigaciones del caso de normalistas en Iguala, viaje mañana jueves a Guerrero.

También solicitó que la comisión especial se reúna con los titulares de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, y de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, así como con el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, además de su secretario y autoridades municipales de Iguala.

⁸<http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2014/10-Octubre/08/8500-Pide-PT-que-Comision-Especial-sobre-el-caso-de-normalistas-en-Iguala-viaje-mananajueves-a-Guerrero-y-se-reuna-tambien-con-funcionarios-del-gobierno-federal>



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

**Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República**

Folio: 0001700026815

La diputada también planteó encuentros con los estudiantes sobrevivientes del reciente ataque con armas de fuego, en los que estarían involucrados policías municipales, y con los familiares de los 43 normalistas desaparecidos.

"Sobre todo y debido a que estamos en el ojo internacional, con una gran falta en derechos humanos, justicia y Estado de derecho, estamos pidiendo que nos podamos reunir con asociaciones internacionales", dijo Aguilar Gil en declaraciones a la prensa, al finalizar una reunión de la Jucopo.

La Comisión Especial para dar seguimiento a investigaciones del caso de normalistas en Iguala quedó instalada este miércoles en San Lázaro y de inmediato se declaró en sesión permanente, a fin de dar celeridad a la elaboración de su plan y agenda de trabajo.

*Asimismo, la Jucopo acordó hoy citar a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional para abordar a la brevedad posible los casos de los normalistas en Iguala, Guerrero, y de los presuntos delincuentes muertos en Tlatlaya, Estado de México, y que **comparezcan los titulares de Defensa, PGR, Gobernación, Cisen y CNDH.***

La diputada del PT señaló que su fracción entregó sus propuestas al presidente de la comisión especial, José Guillermo Anaya Llamas (PAN), en las que también se plantea que se celebren dos reuniones al mes, en lugar de una.

"Esperemos que los otros grupos parlamentarios se puedan unir a ella, y podamos realmente hacer funcionar esta comisión, si no, nosotros lo hemos dicho con mucha claridad, nos retiraremos de la misma, porque entonces (sólo) vendría a cubrir el requisito de que la Cámara de Diputados la creó para un tema de urgencia, pero que no se le está dando ese tratamiento", concluyó.

En ese mismo sentido, la Cámara de Diputados publicó la nota número 8804⁹ de fecha 29 de octubre de 2014, que indica lo que sigue:

Asegura Mejía Berdeja que comisión especial que da seguimiento al caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala promoverá reunión con secretario de la Defensa Nacional Palacio Legislativo, 29-10-2014 (Notilegis).- El diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC) aseguró que la comisión especial que da seguimiento a las investigaciones sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, acordó promover una reunión con el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda.

Esa reunión es "para profundizar sobre la omisión del Batallón 27, con sede en Iguala, cometida el 26 y 27 de septiembre, cuando se presentaron los hechos", indicó en declaraciones a la prensa.

⁹ <http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2014/10-Octubre/29/8804-Asegura-Mejia-Berdeja-que-comision-especial-que-da-seguimiento-al-caso-de-los-43-estudiantes-desaparecidos-en-Iguala-promovera-reunion-con-secretario-de-la-Defensa-Nacional>



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

"De igual manera se está gestionando que (los integrantes de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Hechos Ocurredos en Iguala, Guerrero) nos podamos trasladar a Iguala para estar directamente en el lugar de los acontecimientos", agregó.

Señaló que los diputados se trasladarán a Iguala en cualquier momento y en unos días se reunirán también con el gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez.

Para nosotros, insistió, "es clave estar en Iguala y tener un diálogo directo con los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos y con los familiares de los desaparecidos".

Asimismo, informó que también se llevará a cabo "una nueva reunión con el Procurador (General de la República, Jesús) Murillo Karam, en virtud de que en la investigación de referencia, hay nuevos hechos y hallazgos y para que el funcionario nos precise cómo van las indagatorias.

Por último, en la página del Senado de la República fue posible encontrar los informes de actividades del grupo de trabajo plural que se instaló para el seguimiento de las investigaciones de los hechos acontecidos en el municipio de Iguala Guerrero; de dicha documental se aprecia lo siguiente:

12 de noviembre de 2014. Se remitieron a la Universidad de Innsbruck, en Austria, presuntos restos humanos encontrados durante la indagatoria, a efecto de su análisis, también se recabó la declaración de [REDACTED] socio del hospital Cristina, quien declara en relación a los hechos acaecidos el 26 SEP. 14, cuando estudiantes normalistas llegaron al lugar acompañados de un lesionado, quien posteriormente fue trasladado por los mismos compañeros que lo acompañaban y un profesor a recibir atención médica a otro lugar ya que no se contaba con personal médico en esos momentos, refiere además de la participación de elementos del ejército que acudieron al lugar a tomar conocimiento de los hechos, de igual forma se recabó la declaración de [REDACTED] enfermera del nosocomio en cita, quien narra cómo se introdujeron los estudiantes al hospital Cristina, confirma la presencia de militares mientras los estudiantes estaban en el interior de la clínica.

De la información oficial antes transcrita e inserta, se desprende que con motivo de los sucesos del 26 de septiembre en Iguala Guerrero, se instalaron **mesas de trabajo** (mesa estratégica de alto nivel, mesa de gabinete, mesa de investigación y operación) en coordinación con diferentes instancias del Gobierno Federal, entre las que se encuentra el Ejército Mexicano.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

Adicionalmente, se aprecia que existió una reunión en las instalaciones del 41 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Ciudad de Iguala, referente a las investigaciones que se realizan para determinar quiénes son los responsables de los hechos ocurridos en Guerrero, en la cual estuvieron presentes, diferentes integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Procurador General de la República, el Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría, autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como de la Gendarmería Nacional.

En ese orden de ideas, se dio a conocer que personal de la 35 Zona Militar estuvo colaborando en la búsqueda de los desaparecidos en las fosas localizadas en la zona, en coordinación con peritos de la Procuraduría General de la República, policías federales, policías tácticos, policías de investigación y la policía científica.

En concordancia con lo dicho, la Cámara de Diputados creó una Comisión Especial para dar Seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos originados en Iguala, Guerrero, a alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, "Raúl Isidro Burgos", la cual acordó girar oficio al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, para solicitarle información respecto al caso Ayotzinapa y agendar reuniones de trabajo. Entre los objetivos de dichas reuniones, se contempló el profundizar sobre la omisión del Batallón 27, con sede en Iguala, cometida el 26 y 27 de septiembre, cuando se presentaron los hechos.

De este modo, del tercer informe de actividades del grupo de trabajo plural que se instaló en el Senado para el seguimiento de las investigaciones de los acontecimientos relacionados con los estudiantes multicitados, se aprecia con claridad que dentro de las acciones realizadas por la Procuraduría General de la República, se encuentra el haber recabado la declaración tanto de un socio del Hospital Cristina como de una enfermera de ése nosocomio, los cuales confirmaron la presencia de militares mientras los estudiantes normalistas se encontraban en el interior de la Clínica, quienes acudieron al lugar a tomar conocimiento de los hechos.

La información pública localizada y relatada tiene gran importancia en el caso concreto, dado que, a partir de ésta se obtienen elementos suficientes para determinar que el Ejército Mexicano tuvo presencia en los hechos del interés del ciudadano. Ya que las acciones que en su momento realizó la milicia, debieron encontrarse debidamente documentadas, puesto que así lo ordena el *Reglamento General de Mandos Territoriales, Guarniciones Militares y Servicio Militar de Plaza*, que dispone lo que sigue:



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

ARTÍCULO 1. *El presente Reglamento tiene por objeto establecer la estructura, organización y funcionamiento de las:*

- I. Regiones Militares;*
- II. Zonas Militares;*
- III. Regiones Aéreas Militares;*
- IV. Bases Aéreas Militares, y*
- V. Guarniciones Militares y Servicio Militar de Plaza.*

ARTÍCULO 6. *Para el ejercicio del Mando Territorial y de acuerdo con las necesidades militares, el territorio nacional y el espacio situado sobre el mismo se divide en Regiones; en el primer caso se denominan Regiones Militares y en el segundo, Regiones Aéreas Militares.*

ARTÍCULO 7. *Región es aquella porción del territorio nacional que, atendiendo a necesidades de seguridad interior y defensa exterior de la Federación, así como a factores de índole político, económico, social, geográfico y militar, abarca una o más zonas contiguas y por lo menos una entidad federativa.*

ARTÍCULO 8. *Mando de Región es la autoridad militar que ejerce el Comandante de la misma sobre los organismos del Ejército y Fuerza Aérea, para esta última en los aspectos administrativos y disciplinarios, jurisdicionados en una porción del territorio nacional, en la cual se desarrollan diversas acciones de carácter operativo y administrativo en cumplimiento a las leyes, reglamentos y directivas giradas por la Secretaría.*

ARTÍCULO 16. *El Comandante de Región, es el conducto entre la Secretaría y los organismos de su Región, excepto de aquellos que por disposición expresa estén sometidos a un mando especial; tiene los deberes y atribuciones siguientes:*

- I. Conocer y dar seguimiento a la situación general que prevalece en su jurisdicción*
- II. Mantener y supervisar el despliegue operativo acorde a la situación que prevalezca en la jurisdicción;*

V. Adoptar las medidas adecuadas en los casos de alteración del orden dentro de su jurisdicción y coadyuvar con las autoridades correspondientes en su restablecimiento, de conformidad con los preceptos legales y disposiciones que sobre el particular existan;

XXVIII. Rendir parte diariamente de las novedades de su jurisdicción al Alto Mando, sin perjuicio de hacerlo inmediatamente cuando por su naturaleza así lo amerite;



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

ARTÍCULO 59. Zona es aquella porción de la Región que, atendiendo a necesidades de seguridad interior y a factores de índole político, económico, social, geográfico y militar, abarca una entidad federativa, parte de ella o porciones de entidades limítrofes.

ARTÍCULO 60. Mando de Zona es la autoridad militar que ejerce el Comandante de la misma sobre los organismos del Ejército y Fuerza Aérea, para esta última en los aspectos administrativos y disciplinarios, dentro de su jurisdicción, en la cual desarrolla diversas acciones de mando y administración militar en cumplimiento a las leyes, reglamentos y directivas giradas por el Mando de Región.

ARTÍCULO 68. El Comandante de Zona es el conducto entre la Comandancia de Región y sus organismos subordinados, excepto de aquellos que por disposición expresa estén sometidos a un mando especial, tiene los deberes y atribuciones siguientes:

I. Conocer y dar seguimiento a la situación general que prevalece en su jurisdicción;

II. Mantener y supervisar el despliegue operativo acorde a la situación que prevalece en la jurisdicción;

III. Coordinar con la Región, el apoyo aéreo necesario para el desarrollo de actividades militares, ajustándose a las directivas emitidas por el Alto Mando;

...

XXV. Rendir parte diariamente de las novedades de su jurisdicción a la Comandancia de Región, sin perjuicio de hacerlo inmediatamente cuando por su naturaleza así lo amerite;

...

De conformidad con el ordenamiento antes citado, los Comandantes de las Zonas y Regiones Militares tienen la obligación de rendir parte diariamente de las novedades de su jurisdicción o inmediatamente cuando por su naturaleza así lo amerite. Ello comprende, en su caso, atender y documentar la solicitud de auxilio de la autoridad civil correspondiente para preservar la seguridad pública. Sobre este punto, es importante mencionar que, de conformidad con las Tesis Jurisprudenciales números 36/2000, 37/2000 y 38/2000, las Fuerzas Armadas pueden actuar en auxilio de las autoridades civiles, en materia de seguridad pública.

Una vez expuesto el contexto del asunto, ello a través de la normativa y los boletines oficiales referidos; procede resaltar, que a través del tercer informe de actividades del grupo de trabajo plural que se instaló en el Senado, es posible colegir la presencia de actividades o acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional relacionadas con los hechos verificados en Iguala Guerrero; lo que dio lugar, a la generación de informes y/o fotografías referentes a esos sucesos, que hoy en día obran en una averiguación previa, a cargo del sujeto obligado, del interés de la solicitante.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

A manera de poder determinar cuál es esa averiguación previa, en la que se contienen los reportes o registros, así como las fotografías correspondientes a las actividades de los días 26 y 27 de septiembre de 2014, que el 27 Batallón de Infantería entregó sujeto obligado; es necesario señalar que este Instituto ya ha realizado diligencias de acceso concernientes a las indagatorias vinculadas con los acontecimientos del interés del recurrente.

En ese tenor, resulta necesario hacer alusión a la resolución correspondiente al recurso de revisión **RDA 5151/14**, que se votó en la sesión plenaria del 18 de febrero de 2015, donde se requirió al sujeto obligado la averiguación previa iniciada con motivo de los hechos ocurridos en Iguala, el 26 de septiembre de 2014, relacionados con la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa. En las constancias de ése expediente, se hizo constar que en relación con los hechos que nos atañen, existe sólo una averiguación previa, misma que se identifica con el número **PGR/SEIDO/UEIDMS/01/2015**.

De esta forma, en la averiguación previa número **PGR/SEIDO/UEIDMS/01/2015**, obra la documentación objeto de la solicitud, es decir, los informes, así como las fotografías correspondientes a las actividades de los días 26 y 27 de septiembre de 2014, que el 27 Batallón de Infantería entregó sujeto obligado.

Hecho esto, resulta importante señalar que el artículo 3 fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, establece que por documentos se entienden: los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración.

En concordancia con lo anterior, la fracción V del mencionado precepto establece que por información se considera la contenida en los documentos que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier título. Asimismo, en términos del artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las dependencias y entidades están obligadas a entregar los documentos que se encuentren en sus archivos.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

En función de lo dicho, los informes o reportes, así como las fotografías correspondientes a las actividades de los días 26 y 27 de septiembre de 2014, que el 27 Batallón de Infantería entregó sujeto obligado y que son parte integrante de la averiguación previa número **PGR/SEIDO/UEIDMS/01/2015**, constituye información que documenta el ejercicio de las facultades o las actividades de los servidores públicos adscritos tanto a la Secretaría de la Defensa Nacional como a la Procuraduría General de la República.

Sin embargo, es necesario aclarar, que el particular no pretende acceder a toda la indagatoria, sino únicamente a aquellas secciones en donde se localicen **los reportes y las fotografías** sobre las actividades correspondientes a los días 26 y 27 de septiembre de 2014, que el 27 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional, con sede en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero, entregó a la Procuraduría General de la República; así como también **los documentos donde conste un detalle relativo al número y descripción de las fotografías.**

Sobre este punto, es menester retomar, que la Comisionada Ponente, en el procedimiento que se resuelve, tuvo acceso a la averiguación previa número **PGR/SEIDO/UEIDMS/01/2015**. Y, como consecuencia de la diligencia, fue posible acotar debidamente el universo documental inmerso en la indagatoria; ya que se logró determinar, identificar y/o especificar, en qué tomo y fojas de la citada indagatoria, obraban las documentales que constituyen el objeto o materia de la solicitud.

Bajo esa línea, es importante relacionar los contenidos de información que componen la solicitud con las secciones de la indagatoria que atienden a lo requerido. De tal suerte, que a continuación se hará un análisis por cada petición del ciudadano.

- ✓ **Reportes sobre las actividades correspondientes a los días 26 y 27 de septiembre de 2014, que el 27 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional, con sede en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero, entregó a la Procuraduría General de la República.**

Sobre este punto, es importante señalar que en el acta de la diligencia de acceso, levantada el día treinta de abril del dos mil quince, se hizo constar que las fotografías fueron entregadas por un declarante, miembro del Ejército, por lo que las **fotografías fueron producto de una comparecencia**, razón por la cual, no existen, como tal, reportes respecto de la exhibición de las impresiones fotográficas.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

No obstante, en la misma acta, también se hizo constar que **aunque en la indagatoria no hay reportes, sí hay tres informes**, realizados por militares y dirigidos a sus superiores, en donde se hacía referencia a los hechos concernientes a las fotografías que el 27 Batallón del Ejército entregó al ahora sujeto obligado.

En relación con lo anterior, resulta importante señalar que la Ley de la materia no establece a los particulares la obligación de identificar con exactitud el nombre o la ubicación de los documentos de su interés; es decir, los gobernados no están obligados a conocer con toda precisión el nombre o identificación estricta de algún documento específico que cualquier dependencia o entidad de la Administración Pública Federal conserve en sus archivos.

En este sentido, si bien el nombre del documento invocado por el particular [reporte] no resultó adecuado, prevalece el hecho que la autoridad identificó el diverso del interés del solicitante, es decir, los informes elaborados por miembros del Ejército.

Consecuentemente, se advierte que aún y cuando el ciudadano no identificó el documento a partir del cual motivó sus pretensiones, lo cierto es que sí hay una expresión documental de lo requerido. De este modo, los informes de mérito, constan a fojas 214 a 225 del tomo 47 de la indagatoria número **PGR/SEIDO/UEIDMS/01/2015**; siendo el primero de la 214 a la 217, el segundo de la 218 a la 221 y el tercero de la 222 a la 224.

- ✓ **Fotografías sobre las actividades correspondientes a los días 26 y 27 de septiembre de 2014, que el 27 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional, con sede en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero, entregó a la Procuraduría General de la República.**

Sobre este punto, es importante señalar que en el acta de la diligencia de acceso, levantada el día treinta de abril del dos mil quince, se hizo constar que en la foja 370, del tomo 20 de la indagatoria, obraban las copias fotostáticas de tres fotografías en conjunto y enseguida, constaban las mismas fotografías, pero desagregadas a fojas 371, 372 y 373 con un poco de amplificación.

- ✓ **Los documentos donde conste un detalle relativo al número y descripción de las fotografías sobre las actividades correspondientes a los días 26 y 27 de septiembre de 2014, que el 27 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional, con sede en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero, entregó a la Procuraduría General de la República.**



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

En relación a este contenido, es necesario mencionar que en el acta de la diligencia de acceso, levantada el día treinta de abril del dos mil quince, se hizo constar que en la indagatoria obraba la **Declaración Ministerial de un Coronel de Infantería**, en calidad de testigo, de fecha cuatro de diciembre de dos mil catorce, relacionada con los hechos del interés del particular y, también se hizo constar que precisamente en la sección final de la declaración, se localizaban las únicas fotografías que fueron entregadas por el Ejército a esa Procuraduría, relacionadas con los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014.

En ese sentido, dicha Declaración fue el medio para la entrega de las fotografías y, además, en donde obra el detalle y la descripción solicitados. En ese entendido, es importante referir, que en el tomo 20 de la indagatoria, de la foja número 365 a la 369 obra la declaración de mérito.

Una vez determinada la expresión documental que atiende a lo solicitado, resulta procedente que este Instituto, en uso de su facultad contemplada en los artículos 17 *in fine* y 37, fracción III de la Ley de la materia, determine la **procedencia o improcedencia de la respuesta** otorgada por el sujeto obligado a la solicitud que nos atañe, misma que consistió en **clasificación de la documentación como reservada y confidencial**, en términos de los artículos 16 del Código Federal de Procedimientos Penales; 13 fracción V, 14 fracciones I y III, así como 18 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el artículo 27 de su Reglamento; 13 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, así como 225 fracción XXVIII del Código Penal Federal.

En el artículo 13, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se establece lo siguiente:

ARTÍCULO 13. *Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya información pueda:*

...

V. Causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la recaudación de las contribuciones, las operaciones de control migratorio, las estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos mientras las resoluciones no causen estado.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

Por su parte, en el artículo 27 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se señala que al clasificar expedientes y documentos como reservados o confidenciales, los titulares de las unidades administrativas deberán tomar en consideración el daño que causaría su difusión a los intereses tutelados en los artículos 13, 14 y 18 de la propia Ley. Lo anterior implica que las dependencias y entidades deben llevar a cabo la debida motivación para acreditar que la información se ubica en el supuesto jurídico invocado.

En este sentido, se advierte que procede la clasificación con fundamento en el artículo 13, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando la difusión de la información solicitada pueda, entre otros, poner en peligro las actividades de prevención o persecución de los delitos; es decir, cuando pueda impedir u obstruir las acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de éstos, o bien, las atribuciones que ejerce el Ministerio Público de la Federación durante la averiguación previa y ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación.

No es óbice a lo anterior, que en el caso concreto **existe una causal específica que tutela la clasificación expresa de las averiguaciones previas**, que es la prevista en el artículo 14, fracción III de la Ley de la Materia, pues tiene como finalidad que se garantice la prevención y persecución del delito por parte del Ministerio Público.

Por tanto, resulta **improcedente** la reserva invocada por la Procuraduría General de la República, conforme al artículo 13, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

En seguimiento con las causales de reserva invocadas por ésta Representación Social, debe recordarse que aludió a las contenidas en el artículo 14, fracciones I y III de la Ley de la materia, por lo que, se procederá a continuación con su estudio.

Al respecto, en el artículo 14, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se establece:

ARTÍCULO 14. También se considerará como información reservada:

*I. La que por **disposición expresa de una Ley sea considerada confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental confidencial;***

...

III. Las averiguaciones previas;



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

...

No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.

En términos de artículo 14, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se considera como información reservada, entre otra, la que por disposición expresa de una ley sea considerada confidencial o reservada, mientras que en la fracción III del artículo referido, se consideran como información reservada las averiguaciones previas. En tales circunstancias, el fundamento legal perteneciente a la ley de la materia que rige el caso concreto es la fracción III del artículo 14, ya que es la causal específica que atiende el supuesto que nos ocupa.

- **Clasificación de la información acorde al artículo 14 fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.**

Al respecto, en el artículo 14 fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se establece lo siguiente:

ARTÍCULO 14. *También se considerará como información reservada:*

...

III. Las averiguaciones previas:

...

No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad."

En términos de artículo citado, se considera como información reservada, las averiguaciones previas. Asimismo, se prevé en su último párrafo que en caso de violaciones graves de derechos fundamentales o bien tratándose de delitos de lesa humanidad, no podrá invocarse la reserva de las investigaciones que se estén realizando.

Ahora bien, es menester recordar que el sujeto obligado señaló que la clasificación se invocaba en relación con lo previsto en el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, pues bien, dicho numeral es del tenor siguiente:



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

ARTÍCULO 16. *El Juez, el Ministerio Público y la Policía estarán acompañados, en las diligencias que practiquen, de sus secretarios, si los tuvieran, o de dos testigos de asistencia, que darán fe de todo lo que en aquéllas pase.*

Al expediente de averiguación previa únicamente tendrán acceso el inculpado, su defensor y la víctima u ofendido o su representante legal. La averiguación previa así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, y los objetos, registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados.

Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, únicamente deberá proporcionarse una versión pública de la resolución de no ejercicio de la acción penal, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal, sin que pueda ser menor de tres ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha resolución haya quedado firme.

Si la resolución de no ejercicio de acción penal resulta de la falta de datos que establezcan que se hubiese cometido el delito, el Ministerio Público podrá proporcionar la información de acuerdo a las disposiciones aplicables, siempre y cuando no se ponga en riesgo indagatoria alguna.

En ningún caso se podrá hacer referencia a información confidencial relativa a los datos personales del inculpado, víctima u ofendido, así como testigos, servidores públicos o cualquier persona relacionada o mencionada en la indagatoria.

El Ministerio Público no podrá proporcionar información una vez que se haya ejercitado la acción penal a quien no esté legitimado.

Al servidor público que quebrante la reserva de la información de la averiguación previa o proporcione copia de los documentos que contenga, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal que corresponda.

Conforme a la legislación adjetiva penal, **la averiguación previa, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados con ésta, son estrictamente reservados.**

Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, únicamente procede la entrega de una versión pública de la resolución de **no ejercicio de la acción penal**, una vez transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, sin que pueda ser menor de tres ni mayor de doce años, contados a partir de que dicha resolución haya quedado firme. Es decir, **aun concluidas las indagatorias, dichos documentos estarán sujetos al plazo de reserva.**



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

Adicionalmente, se establece que en ningún caso, el Ministerio Público de la Federación puede proporcionar información una vez que se haya ejercitado la acción penal a quien no esté legitimado. De esta forma, en caso de que el Ministerio Público de la Federación haya determinado el ejercicio de la acción penal en una averiguación previa, para efectos de acceso al expediente de consignación, es necesario acreditar la personalidad del interesado, a fin de verificar su legitimidad de acceso, donde únicamente tendrán acceso el inculpado, su defensor y la víctima u ofendido o su representante legal.

Derivado de lo anterior, el **artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales establece un supuesto de reserva específico**, pues considera que salvo la resolución de no ejercicio de la acción penal, toda aquella información que esté relacionada con la averiguación previa tendrá el carácter de reservada, motivo por el cual no es susceptible de acceso.

Con independencia de lo expuesto, la Procuraduría General de la República, también clasificó las fotografías y los reportes requeridos con fundamento en el 13 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, el cual establece lo siguiente:

ARTÍCULO 13. *A las actuaciones de averiguación previa por los delitos a que se refiere esta Ley, exclusivamente deberán tener acceso el indiciado y su defensor, una vez que haya aceptado el cargo, únicamente con relación a los hechos imputados en su contra, por lo que el Ministerio Público de la Federación y sus auxiliares guardarán la mayor reserva respecto de ellas, sin perjuicio de que el indiciado o su defensor, en base en la información recibida, puedan presentar las pruebas de descargo que juzguen oportunas.*

No se concederá valor probatorio a las actuaciones que contengan hechos imputados al indiciado, cuando habiendo solicitado el acceso a las mismas al Ministerio Público de la Federación, se le haya negado.

De la lectura al artículo de referencia, se desprende que las averiguaciones previas en relación con los delitos que contempla la Ley Federal Contra Delincuencia Organizada, únicamente deben tener acceso el indiciado y su defensor cuando éste haya aceptado el cargo, y solamente por lo que hace a los hechos imputados en su contra, con el fin de que puedan presentar las pruebas de descargo que juzguen oportunas. En ese sentido, el Ministerio Público de la Federación y sus auxiliares **deben guardar la mayor reserva** respecto de ellas. En otras palabras, el numeral en cita también contempla la **reserva de las averiguaciones previas iniciadas en relación con los delitos previstos en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada**



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

En seguimiento a lo anterior, el artículo 27 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, establece que al clasificar expedientes y documentos como reservados o confidenciales, los titulares de las unidades administrativas deben tomar en consideración el daño que causaría su difusión a los intereses tutelados en los artículos 13, 14 y 18 de la propia Ley. Consecuentemente, los sujetos obligados deben llevar a cabo la debida motivación, para acreditar que la información se ubica en el supuesto jurídico invocado.

En concatenación con lo expuesto, conforme a lo previsto en el Octavo y Vigésimo Sexto de los *Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal - Lineamientos Generales-*, al clasificar información con el fundamento en cita, basta con que la misma encuadre en el supuesto normativo; es decir, que se trate de aquella que forma parte de la averiguación previa, entendiendo por ésta la etapa durante la cual el Ministerio Público efectúa todas aquellas actuaciones y diligencias necesarias para conocer la verdad histórica de un hecho constitutivo de delito, a efecto de ejercitar o no la acción penal.

En función de lo anterior, se concluye que en principio resultaría aplicable la causal de reserva contemplada en el artículo 14, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al tratarse de una averiguación previa que aún no ha concluido, es decir que se encuentra en trámite; sin embargo, dicha causal tiene una excepción, prevista en el último párrafo del artículo mencionado, la cual señala que no puede invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad, por lo que, resulta necesario analizar si en el presente caso se actualiza alguno de los referidos supuestos.

Robustece la necesidad de verificar lo anterior, el hecho que el recurrente, vía su recurso de revisión, consideró aplicable la excepción a la reserva de la averiguación previa establecida en el último párrafo del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; dado que realizó las manifestaciones siguientes:

- Que el interés público en mantener la averiguación previa en reserva se ve superado por el interés de la sociedad de conocer todas las diligencias que se lleven a cabo para la investigación conducente.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

- Que las víctimas sufrieron violaciones graves a derechos humanos, por lo que nadie podía clasificar dicha información como reservada.

Al respecto, en el artículo 36 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se establece lo siguiente:

ARTÍCULO 36. *Para los efectos del artículo 14 de la Ley, se considerarán como violaciones graves de derechos fundamentales y delitos de lesa humanidad los que se establezcan como tales en los tratados ratificados por el Senado de la República o en las resoluciones emitidas por organismos internacionales cuya competencia sea reconocida por el Estado Mexicano, así como en las disposiciones legales aplicables.*

De conformidad con el precepto en cita, se desprende que para los efectos de lo establecido en el artículo 14 de la Ley de la materia, se considerarán como violaciones graves de derechos fundamentales y delitos de lesa humanidad los que se establezcan como tales en los tratados ratificados por el Senado de la República o en las resoluciones emitidas por organismos internacionales cuya competencia sea reconocida por el Estado Mexicano.

En ese entendido, es necesario hacer alusión a la siguiente Tesis del Poder Judicial Federal, que es del tenor siguiente:

DERECHO A LA INFORMACIÓN. ACCESO A LAS AVERIGUACIONES PREVIAS QUE INVESTIGUEN HECHOS QUE CONSTITUYAN GRAVES VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS O DELITOS DE LESA HUMANIDAD. *En materia de derecho a la información pública, la regla general en un Estado democrático de derecho debe ser el acceso y máxima publicidad de la información. Sin embargo, la regla general presenta algunas excepciones, las cuales, por mandato constitucional, deben estar previstas en leyes en sentido formal y material. Una de estas excepciones es el caso de las averiguaciones previas, cuyo contenido debe considerarse como estrictamente reservado, en términos de lo dispuesto en el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, y de los artículos 13, fracción V, y 14, fracción III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Ahora bien, esta limitante tampoco puede considerarse como absoluta y presenta una excepción -de modo que estamos ante una excepción a la excepción- consistente en que, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no puede alegarse el carácter de reservado cuando la averiguación previa investigue hechos constitutivos de graves violaciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Las averiguaciones previas se mantienen reservadas en atención a que la difusión de la información contenida en ellas podría afectar gravemente la persecución de delitos y, con ello, al sistema de impartición de justicia. A pesar de lo anterior, la ley previó como excepción a la reserva de las averiguaciones previas aquellos casos*



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

*extremos en los cuales el delito perseguido es de tal gravedad que el interés público en mantener la averiguación previa en reserva se ve superado por el interés de la sociedad en su conjunto de conocer todas las diligencias que se estén llevando a cabo para la oportuna investigación, detención, juicio y sanción de los responsables. Estos casos de excepción son las investigaciones sobre graves violaciones a derechos humanos y delitos o crímenes de lesa humanidad. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recuerda que el Tribunal Pleno reconoció en la tesis jurisprudencial P./J. 54/2008, el doble carácter del derecho de acceso a la información, como un derecho en sí mismo, pero también como un medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos. En este sentido, el Tribunal Pleno destacó que el derecho de acceso a la información es la base para que los gobernados ejerzan un control respecto del funcionamiento institucional de los poderes públicos, por lo cual se perfila como un límite a la exclusividad estatal en el manejo de la información y, por ende, como una exigencia social de todo Estado de Derecho. En virtud de lo anterior, cobra una especial relevancia la necesidad de permitir el acceso a la información que conste en averiguaciones previas que investiguen hechos que constituyan graves violaciones a derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, pues estos supuestos no sólo afectan a las víctimas y ofendidos en forma directa por los hechos antijurídicos, sino que ofenden a toda la sociedad, precisamente por su gravedad y por las repercusiones que implican.*¹⁰

De lo anterior se tiene que la excepción a la reserva de las averiguaciones previas son aquellos casos extremos en los cuales el delito perseguido es de tal gravedad que el interés público en mantener la averiguación previa en reserva se ve superado por el interés de la sociedad en su conjunto de conocer todas las diligencias que se estén llevando a cabo para la oportuna investigación, detención, juicio y sanción de los responsables.

En ese tenor, resulta necesario analizar la competencia que tiene este Organismo Autónomo, para interpretar para efectos del derecho de acceso a la información, la actualización de las excepciones previstas en el último párrafo del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las cuales corresponden a violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad.

En relación con lo anterior, es de considerar los términos en que se expidió la sentencia del amparo 1371/2013, dictada por el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, el once de abril de dos mil catorce, el cual fue promovido en contra de la resolución del recurso de revisión RDA 2486/14 y su acumulado RDA 4291/13, emitida por este Instituto. En dicha resolución, se determinaron entre otras cuestiones, las siguientes:

¹⁰ [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1; Pág. 652.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

"[...]"

7.1. El IFAI sí tiene facultades para pronunciarse prima facie sobre violaciones graves de derechos humanos respecto de los hechos consignados en averiguaciones previas.

Contrario a lo asentado por el IFAI, dicho Instituto sí cuenta con facultades para pronunciarse prima facie sobre las violaciones graves de derechos humanos únicamente para efectos de asumir y ejercer sus propias competencias en materia de acceso a la información de las averiguaciones previas.

En este sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo en Revisión 168/2011 expresó lo siguiente:

*"Al respecto, esta Sala observa que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que las averiguaciones previas sobre hechos posiblemente constitutivos de graves violaciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad carecen del carácter de información reservada. **Esto no quiere decir que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública cuente con facultades para determinar si se han actualizado las hipótesis antes descritas, ni quiénes serían los responsables.***

*En primer término, los criterios bajo los cuales se consideran ciertos hechos como graves violaciones a derechos humanos han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mientras que los delitos de lesa humanidad se encuentran tipificados en el Código Penal Federal y en el Estatuto de Roma. Así, la determinación correspondiente la harán las propias autoridades investigadoras, que en este caso fue la Procuraduría General de la República, **de modo que cualquier eventual pronunciamiento por parte del Instituto tendrá naturaleza prima facie** y se circunscribirá en las propias conclusiones de la autoridad investigadora, según consten en el expediente de averiguación previa. (...) **Adicionalmente, la calificación de los hechos dentro de alguna de las categorías en comento podrá realizarse por la autoridad judicial competente.***

Como se advierte de lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia asentó que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que las averiguaciones previas sobre hechos posiblemente constitutivos de graves violaciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad carecen del carácter de información reservada.

Precisó que esto no quiere decir que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública cuente con facultades para determinar si se han actualizado las hipótesis antes descritas, ni quiénes serían los responsables; **sin embargo, apuntó que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública sí tiene competencia para pronunciarse prima facie sobre el hecho consistente en si una averiguación previa versa o no sobre violaciones graves a derechos humanos, aunque exclusivamente para efectos de brindar o no acceso a la información solicitada.**

...



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

De lo transcrito, se desprende que este Instituto sí tiene facultades para pronunciarse *prima facie* sobre violaciones graves de derechos humanos, únicamente para el efecto de asumir y ejercer la competencia en materia de acceso a la información de las averiguaciones previas.

Adicionalmente, en dicha sentencia se retomó que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión número 168/2011, estableció, con base en lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que las averiguaciones previas sobre hechos constitutivos de graves violaciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad no tienen el carácter de información reservada. Consecuentemente, este Instituto carece de facultades para: a) determinar si se han actualizado dichas hipótesis y b) determinar quiénes serían los responsables.

En otras palabras, acorde con los señalamientos de la autoridad jurisdiccional, si bien es cierto este Organismo Autónomo no cuenta con la competencia para determinar quiénes son los responsables y si éstos cometieron delitos de lesa humanidad o violaciones graves a derechos humanos, también lo es que sí puede pronunciarse *prima facie* sobre si una averiguación previa versa o no sobre violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad; teniendo presente que dicho pronunciamiento única y exclusivamente se realiza para brindar o no el acceso a la información que conforma, integra o compone a las averiguaciones previas, como es el caso de reportes o fotografías.

En ese mismo sentido, la sentencia dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, de fecha trece de marzo de dos mil catorce, dictada en el juicio de amparo 1189/2013-VIII, promovido en contra de la resolución emitida por este Instituto al recurso de revisión RDA 0791/12 BIS, se resolvió lo siguiente:

[...]

En ese contexto, de los razonamientos anteriores, se concluye que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en términos del artículo 37 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, sí cuenta con facultades para interpretar si en el caso específico, opera la excepción de reserva prevista en el artículo 14, último párrafo, respecto de la averiguación previa número PGRITAMPS/MAT-III-2194/2010, relativa al caso de la masacre ocurrida en San Fernando, Tamaulipas en el año dos mil diez.

Asimismo, para determinar si el caso en concreto se ubica en dicha excepción de reserva, resulta incorrecto que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

Maria Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

Datos Personales, respalde la reserva formulada por la Procuraduría General de la República, en términos de lo previsto en el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, toda vez que como se expuso en el presente fallo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya declaró que la restricción que prevé dicho precepto para el caso de las averiguaciones previas, es desproporcional y transgrede el derecho humano de acceso a la información.

*Finalmente, contrario a lo manifestado por el Instituto citado del contenido de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no se advierte que alguno de sus preceptos, prevea que debe existir un pronunciamiento sobre el caso en específico para que entonces el Instituto pueda determinar la procedencia de la excepción de reserva tratándose de averiguaciones previas, en las que los solicitantes consideren que la información se trata de violaciones graves a derechos humanos o de lesa humanidad, no obstante ello, existen diversos ordenamientos nacionales e internacionales e interpretaciones que prevén los lineamientos a seguir para llegar a esa determinación, por lo que como intérprete de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, está facultada para determinar si el caso concreto, esto es la masacre de San Fernando, Tamaulipas, ocurrida en el año dos mil diez, se ubica o no, en la excepción de reserva, siguiendo los lineamientos básicamente, previstos en los artículos 149 y 149 bis del Código Penal Federal, que tipifica como delitos contra la humanidad y el genocidio; 7 del estatuto de Roma, que define qué se considera como delitos de lesa humanidad; así como los lineamientos previstos en la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 1ª. XI/2012 (10a), de rubro **VIOLACIONES GRAVES A DERECHOS HUMANOS. SU CONCEPTO PARA EFECTOS DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA QUE LAS INVESTIGA**, que establece criterios cuantitativos (número, intensidad, amplitud, generalidad, frecuencia o su prolongación en el tiempo), y cualitativos (multiplicidad de violaciones comprendidas dentro del fenómeno delictivo, especial, magnitud de las violaciones en relación a la naturaleza de los derechos afectados; y una participación importante del estado, a ser los actos cometidos por agentes estatales o con aquiescencia del estado) para determinar que una violación a derechos humanos es "grave", y subsumir el caso en concreto, esto es la masacre de San Fernando Tamaulipas ocurrida en el año dos mil diez a los preceptos y criterios descritos.*

...

A partir de lo anterior, se tiene que la autoridad jurisdiccional concluyó que este Instituto sí tiene facultades para realizar una interpretación referente a si en el caso concreto operan o no los supuestos previstos en el último párrafo del artículo 14 de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Adicionalmente, se aprecia que no es necesario que otra autoridad se pronuncie previamente sobre si hubo o no violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, para que este Instituto tenga la posibilidad de



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

determinar, solamente para efectos del derecho de acceso a la información, si se actualiza o no la excepción a la reserva prevista en el artículo 14, último párrafo de la Ley de la materia.

Bajo esa línea, con la sentencia recaída al juicio de amparo número 1189/2013-VIII, se contempla nuevamente y con ello se reafirma, que este Instituto sí tiene competencia para determinar si se ubica o no en las excepciones de la reserva de la averiguación previa, al caso en concreto, por ser el intérprete de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con lo que únicamente ejerce las facultades con las que cuenta. En conclusión, conviene referir que en términos de los artículos 6 y 37, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, corresponde a este Instituto interpretar el mencionado ordenamiento legal.

Por otro lado, y con el fin de robustecer los argumentos vertidos, no puede pasar por alto que con motivo de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, se constituye un bloque constitucional en materia de derechos humanos, pues todas y cada una de las autoridades del Estado mexicano están obligadas a respetar todo derecho humano previsto tanto en la Constitución Federal como en todo Tratado Internacional del que México sea parte.

En función de lo anterior, el artículo 1º de la Constitucional prescribe que en aras de brindar irrestricto respeto a los derechos humanos, todo órgano con facultades decisorias o de *imperium* está obligado a respetar el principio pro persona; que implica que la aplicación e interpretación de la norma siempre debe ser siempre en el sentido de favorecer en la mayor medida el otorgamiento y reconocimiento de los derechos humanos.

Para tales efectos, se cuenta con la obligación de llevar a cabo un “control de convencionalidad”¹¹, que es precisamente armonizar el orden jurídico de tal suerte

¹¹ Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Almonacid Arellano y otros*. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 124; *Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros)*. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, párr. 128; *Caso La Cantuta*. Sentencia de 29 de septiembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 167; *Caso Boyce y otros*. Sentencia de 20 de noviembre de 2006. Serie C No. 169, párr. 78; *Caso Heliodoro Portugal*. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 154, párr. 179; *Caso Radilla Pacheco*. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 339; *Caso Manuel Cepeda Vargas*. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 208; *Caso Comunidad Indígena XákmokKásek*. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214, párr. 311; *Caso Rosendo Cantú y otra*. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216, párr. 219; *Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña*. Sentencia de 1 de septiembre de 2010. Serie C No. 217, párr. 202; *Caso Vélez Loor*. Sentencia de 26 de noviembre de



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

**Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República**

Folio: 0001700026815

que su aplicación no vulnere ni restrinja en lo más mínimo cualquier derecho humano previsto en la Constitución Federal y los tratados internacionales y aún más, en la jurisprudencia convencional interamericana.

Sobre este punto, cabe subrayar que en el expediente varios 912/2010, del catorce de julio de dos mil once, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al dar cumplimiento a la ejecución de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el "Caso Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos" en relación con lo establecido en el artículo primero constitucional, respecto a la obligación de todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, se pronunció, que si bien es cierto que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deben aplicar las normas correspondientes a derechos humanos haciendo la interpretación más favorable a la persona con el fin de lograr una protección más amplia, no se tiene la posibilidad de la inaplicación o declaración de la incompatibilidad de las mismas, por todas las autoridades.

En ese sentido, el modelo de control de constitucionalidad y convencionalidad para nuestro país, dependerá de la autoridad encargada de aplicar normas que contengan derechos humanos. Consecuentemente, este Organismo Autónomo, se encuentra en el supuesto de tipo de control denominado "Interpretación más favorable", al no ser un órgano jurisdiccional.

Por lo tanto, se considera que este Instituto, al hacer esta interpretación no está invadiendo, de forma alguna, competencias de otras autoridades, sino por el contrario, está ejerciendo las facultades y las atribuciones con las que cuenta.

Es importante mencionar que este Organismo Autónomo no es quien determina qué es una violación grave de derechos humanos o un delito de lesa humanidad, sino que atendiendo a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional, realiza un pronunciamiento *prima facie* para tener la posibilidad de establecer, en cierto caso, si se verifican o no los supuestos contemplados en el

2010. Serie C No. 218, párr. 287; *Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia)*. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219, párr. 106; *Caso Cabrera García y Montiel Flores*. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, párrafos 223 a 235; *Caso Gelman*: Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C No. 221, párr. 193. *Caso Fontevecchia y D'Amico*. Sentencia de 29 de noviembre de 2011. Serie C No. 238, párr. 93; Véase también el Voto Razonado del Juez Ad Hoc Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot en la sentencia del *Caso Cabrera García y Montiel Flores*. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220 y especialmente el engrose del asunto *Radilla Pacheco*, *Resolución dictada por el Tribunal Pleno en el expediente varios 912/2010* de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 2011



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

artículo 14, último párrafo de la Ley de la materia, con el único objetivo de otorgar o no el acceso a la información que compone cierta averiguación previa, como lo pueden ser reportes y fotografías.

En conclusión, si bien este Instituto no está facultado para determinar quiénes son los responsables de un ilícito y si se configuró o no un tipo penal, sí puede pronunciarse si se actualiza la excepción prevista en el último párrafo del artículo 14 de la Ley de la materia, para el exclusivo efecto de establecer los casos en que sí debe prevalecer el derecho de acceso a la información de la sociedad.

Una vez que ha sido determinada la competencia de este Instituto para pronunciarse prima facie sobre las violaciones graves de derechos humanos, para efectos de brindar o no acceso a la información solicitada, a continuación se analizará si en el caso concreto se actualiza la excepción prevista en el último párrafo del artículo 14 de la Ley de la materia, relativa a violaciones graves a derechos fundamentales.

Para comenzar, es indispensable mencionar que hablar sobre violaciones a los derechos humanos es distinto que hablar sobre graves violaciones a los derechos humanos.

En atención al artículo primero constitucional, una violación a derechos humanos implica la vulneración a algún derecho reconocido en la Constitución o bien en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Ahora bien, uno de los elementos que caracteriza como "grave" a una violación es el carácter inderogable de los derechos humanos afectados y/o la violación de las normas imperativas del derecho internacional.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derecho Humanos caracterizó como graves violaciones de derechos humanos aquellos actos "como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.¹² Así, en tanto afectan derechos humanos inderogables y/o prohibiciones de ius cogens, (normas imperativas internacionales) estos actos constituyen graves violaciones a los derechos humanos y, en consecuencia, deben ser sancionados penalmente.

¹² Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Barrios Altos vs Perú, sentencia del 14 de marzo de 2001, párr. 41.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

Este tipo de violaciones van en contra de la dignidad de las personas, por lo que la realización, aquiescencia u omisión en la prevención o sanción de violaciones graves de derechos humanos son incompatibles con la idea misma de un Estado democrático de derecho, con sus principios rectores, con su configuración y operación.

Estas graves violaciones a los derechos humanos, entre otros actos, constituyen crímenes bajo el derecho internacional, por lo que el Estado tiene la obligación internacional de juzgar y castigar a los responsables de éstos, sin la posibilidad de alegar ya sea la obediencia debida o el cumplimiento de órdenes superiores para exonerarse de responsabilidad penal.

En otro orden, en el sistema jurídico nacional resulta importante abordar lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha mencionado sobre el particular, de acuerdo con el siguiente criterio:

VIOACIONES GRAVES A DERECHOS HUMANOS. SU CONCEPTO PARA EFECTOS DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA QUE LAS INVESTIGA. De conformidad con el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no puede alegarse el carácter de reservado cuando la averiguación previa investigue hechos constitutivos de graves violaciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. **A fin de que el intérprete determine si un caso concreto se ubica en el supuesto de excepción relativo a las violaciones graves a derechos humanos y deba dar acceso a la averiguación previa correspondiente, es necesario que atienda a los lineamientos sentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta materia. Siguiendo los lineamientos establecidos por este alto tribunal, para determinar que una violación a derechos humanos es "grave" se requiere comprobar la trascendencia social de las violaciones, lo cual se podrá determinar a través de criterios cuantitativos o cualitativos. El criterio cuantitativo determina la gravedad de las violaciones demostrando que tienen una trascendencia social en función de aspectos medibles o cuantificables, tales como el número, la intensidad, la amplitud, la generalidad, la frecuencia o su prolongación en el tiempo, así como, evidentemente, la combinación de varios de estos aspectos. Es lógico que el criterio anterior no haya podido aplicarse a todos los casos, razón por la cual esta Suprema Corte también ha entendido que en algunos supuestos la trascendencia social de las violaciones se puede demostrar mediante un criterio cualitativo, determinando si éstas presentan alguna característica o cualidad que les dé una dimensión específica. En lo que respecta a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ese tribunal ha determinado que la "gravedad" radica, esencialmente, en que se presenten las siguientes características: multiplicidad de violaciones comprendidas dentro del fenómeno delictivo; especial magnitud de las violaciones en relación a la naturaleza de los**



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

derechos afectados; y una participación importante del Estado, al ser los actos cometidos por agentes estatales o con la aquiescencia, tolerancia o apoyo del Estado.¹³

De conformidad con lo anterior, para determinar si se actualiza el supuesto del último párrafo del artículo 14 de la Ley de la materia, se requiere comprobar la **trascendencia social** de las violaciones, lo cual se podrá determinar a través de criterios cuantitativos o cualitativos.

El **criterio cuantitativo** determina la gravedad de las violaciones demostrando que tienen una trascendencia social en función de aspectos medibles o cuantificables, tales como el número, la intensidad, la amplitud, la generalidad, la frecuencia o su prolongación en el tiempo, así como, evidentemente, la combinación de varios de estos aspectos.

El **criterio cualitativo**, determina si estas violaciones presentan alguna característica o cualidad que les dé una dimensión específica. Así, la "gravedad", de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, radica, esencialmente, en que se presenten las siguientes características: multiplicidad de violaciones comprendidas dentro del fenómeno delictivo; especial magnitud de las violaciones en relación a la naturaleza de los derechos afectados; y **una participación importante del Estado, al ser los actos cometidos por agentes estatales o con la aquiescencia, tolerancia o apoyo del Estado.**

En ese sentido, para poder establecer si en el presente caso se actualizan los referidos criterios, es indispensable traer a colación la información pública emitida por la propia Procuraduría General de la República sobre los hechos acaecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero y de los avances que se han dado sobre la investigación, se desprende que los delitos por lo que se han consignado a quienes participaron en dicho sucesos, son **secuestro, delincuencia organizada y homicidio.**

Lo anterior, derivado de los boletines de prensa de la Procuraduría General de la República, tal es el caso del número **198/14**, donde se señaló que se tenía plenamente identificados y acreditados a los **policias municipales de Iguala y Cocula** que incurrieron en los ilícitos de **secuestro y delincuencia organizada**; mientras que en el número **210/14** se informó que el entonces **presidente municipal**

¹³ Tesis Aislada(Constitucional), 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1; Pág. 667



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, fue puesto a disposición del Juez Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros, por los delitos de delincuencia organizada, secuestro y homicidio calificado, en cumplimiento a una orden de aprehensión.

De igual forma en el boletín **003/15** se manifestó que se puso a disposición del Ministerio Público de la Federación a diversas personas quienes eran elementos de la **Policía Municipal de Iguala, Guerrero**, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y secuestro, ejerciendo posteriormente acción penal contra las mismas por los referidos delitos. Asimismo, en el boletín **005/15** se informó que de acuerdo con la investigación se tenía la posibilidad de hacer la consignación por homicidio.

Por otra parte, de los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014, de acuerdo con la información dada a conocer en un principio por la Procuraduría General de la República, se privó de la vida a una persona¹⁴ mientras que 43 más habían desaparecido.

Posteriormente, de los avances al caso se pudo advertir que en los acontecimientos de Iguala del 26 de septiembre de 2014, también se produjo el homicidio de seis personas, pues de acuerdo con el boletín **212/14**, se precisó que se tenían detenidos a quienes privaron de la vida a seis personas en Iguala en dicha fecha, lo cual se reafirma en el boletín **240/14**.

En ese sentido, de conformidad con lo expuesto en cuanto al **criterio cuantitativo** que determina la gravedad de las violaciones demostrando que tienen una trascendencia social en función de aspectos medibles o cuantificables, tales como el número, la frecuencia o su prolongación en el tiempo, así como, evidentemente, la combinación de varios de estos aspectos, puede advertirse que se colman dichas características, como se analiza a continuación.

Derivado de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 y de acuerdo con la información pública se privó de la vida a seis personas y desaparecieron 43 estudiantes a los cuales actualmente se les ha considerado como probablemente fallecidos de acuerdo con los resultados de la indagatoria que lleva la Procuraduría General de la República,¹⁵ lo cual implica un número considerable de víctimas.

¹⁴ Boletín 198/14. Disponible en: <http://pgr.gob.mx/prensa/2007/bol14/Oct/b19814.shtm>

¹⁵ Boletines 212/14, 240/14, 017/15. Disponible en: <http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol14/Nov/b21214.shtm>,
<http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol14/Dic/b24014.shtm>
<http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol15/Ene/b01715.shtm>



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

Además, debe tomarse en cuenta la reiteración de las **conductas ilícitas**, puesto que implicaron en principio la privación ilegal de la libertad de diversas personas presuntamente por servidores públicos, mismas que de acuerdo a las investigaciones hasta la fecha practicadas y conforme a la hipótesis que hizo pública el Procurador General de la República, probablemente fueron privadas de la vida.¹⁶

Aunado a ello, es de señalarse que de acuerdo con la información difundida por la Procuraduría General de la República, se tiene certidumbre del homicidio de seis personas en los acontecimientos de Iguala del 26 de septiembre.

En el mismo sentido, se advierte una **prolongación** en el tiempo de las conductas ilícitas, y la intensidad de las mismas, puesto que, se trata de una sucesión de actos que presuntamente iniciaron con la privación ilegal de la libertad y que culminaron con el homicidio de diversas personas, por lo que se vieron trastocados gravemente el derecho a la libertad y a la vida de las personas.

En ese orden, es posible advertir que se actualiza el criterio cuantitativo para determinar la gravedad de las violaciones.

Ahora bien, el **criterio cualitativo**, determina si estas violaciones presentan alguna característica o cualidad que les dé una dimensión específica. Así, la "gravedad", de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, radica, esencialmente, en que se presenten las siguientes características: multiplicidad de violaciones comprendidas dentro del fenómeno delictivo; especial magnitud de las violaciones en relación a la naturaleza de los derechos afectados; y una participación importante del Estado, al ser los actos cometidos por agentes estatales o con la aquiescencia, tolerancia o apoyo del Estado.

En ese sentido, de acuerdo con los elementos del presente caso, es posible observar que las conductas cometidas en contra de los estudiantes encuadran presuntamente en diversos tipos penales tal como secuestro y delincuencia organizada, por lo que constituyen múltiples delitos que se prolongaron en el tiempo desde el 26 de septiembre de 2014 y que de acuerdo con la Procuraduría General de la República culminaron presuntamente con el homicidio de las mismas.

Es decir, los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 implicaron una **variedad de violaciones**, al haberse configurado diversos ilícitos, tal como lo ha hecho del

¹⁶ Boletín 017/15. Disponible en: <http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol15/Ene/b01715.shtm>



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

conocimiento la Procuraduría General de la República a través de los avances presentados públicamente sobre la investigación, al señalar que policías municipales de Iguala y Cocula presuntamente incurrieron en los ilícitos de secuestro y delincuencia organizada;¹⁷asimismo, que el ex presidente municipal de Iguala, fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, secuestro y homicidio calificado,¹⁸lo cual se constata con las manifestaciones realizadas por el personal del sujeto obligado en las diligencias practicadas con fecha veintidós y veintinueve de enero de dos mil quince.

Aunado a lo anterior, es posible advertir que las violaciones cometidas resultan de **gran magnitud** puesto que las conductas realizadas trajeron consigo la afectación reiterada a derechos de un número considerable de víctimas, trascendiendo de igual forma a los familiares de los desaparecidos, en virtud de no poder conocer su paradero y a la sociedad en su conjunto precisamente por la gravedad de las mismas, lo cual se robustece con lo manifestado por la Procuraduría General de la República en el boletín 017/15 al señalar que se trató de un crimen atípico, **no sólo por la magnitud y violencia a la que habían sido sometidas las víctimas**, sino además por el nivel de participación y los roles que jugó cada uno de los presuntos autores.¹⁹

Por otra parte, de la información pública emitida por la Procuraduría General de la República se puede **constatar una participación importante de agentes del Estado** (servidores públicos municipales) en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.

En este punto, es pertinente tener en cuenta las circunstancias que ocurrían en Guerrero las cuales se desprenden de la información oficial dada a conocer por la Procuraduría General de la República, al manifestar que el líder del grupo criminal Guerreros Unidos Sidronio Casarrubias Salgado, corrompió y se apoderó de las policías municipales de Iguala y Cocula.²⁰De igual forma que **se confirmaba la existencia de un grupo organizado donde participaban tanto miembros de la delincuencia como servidores públicos principalmente policías encabezados por**

¹⁷ Boletín 198/14 y 003/15. Disponible en: <http://pgr.gob.mx/prensa/2007/bol14/Oct/b19814.shtm> y <http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol15/Ene/b00315.shtm>

¹⁸ Boletín 210 /14. Disponible en: <http://pgr.gob.mx/Prensa/2007/bol14/Nov/b210%2014.shtm>

¹⁹ Boletín 017/15. Disponible en: <http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol15/Ene/b01715.shtm>

²⁰ Boletín 212/14. Disponible en: <http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol14/Nov/b21214.shtm>



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

el entonces Presidente Municipal de Iguala y su esposa la entonces Presidenta del DIF.²¹

Es decir, de acuerdo con el contexto que se desarrollaba en Guerrero existe la **presunción de que agentes estatales participan junto con organizaciones de la delincuencia organizada en dicha entidad federativa, lo cual en el presente caso refuerza la participación de agentes estatales en los hechos ocurridos en Iguala Guerrero.**

Aunado a ello, de los avances de la investigación se desprende la detención de **catorce personas que se desempeñaban como elementos de la Policía Municipal de Cocula, Guerrero, y un empleado administrativo de dicha policía municipal**, los cuales están presuntamente involucrados con la desaparición de los 43 estudiantes.²²

Asimismo, del Boletín 198/14 se desprende que **un policía municipal privó de la vida con arma de fuego a uno de los estudiantes** en el momento en que ocurría el incidente.

Por otra parte, también se ha informado la **detención de veinticuatro policías municipales, siendo diez de ellos de Iguala y catorce de Cocula,**²³ y posteriormente, se indicó que se tenían detenidas y consignadas a cincuenta y dos personas, entre las cuales, se encontraban **policías locales y funcionarios municipales.**²⁴ De igual forma, se dio a conocer que el ex Presidente Municipal de Iguala había quedado a disposición de la autoridad jurisdiccional, por los delitos de delincuencia organizada, secuestro y homicidio calificado.²⁵

Aunado a lo anterior, se ha manifestado por el sujeto obligado la **detención del ex Subdirector de la policía de Cocula, Guerrero integrante de la organización criminal autodeterminada Guerreros Unidos**, quien contaba con una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y secuestro en agravio de los 43 normalistas.²⁶

²¹ Boletín 017/15. Disponible en: <http://www.pgr.gob.mx/Prensa/2007/bol15/Ene/b01715.shtm>

²² Boletín 191/14. Disponible en: <http://pgr.gob.mx/prensa/2007/bol14/Oct/b19114.shtm>

²³ Boletín 193/14. Disponible en: <http://pgr.gob.mx/prensa/2007/bol14/Oct/b19314.shtm>

²⁴ Boletín 198/14. Disponible en: <http://pgr.gob.mx/prensa/2007/bol14/Oct/b19814.shtm>

²⁵ Boletín 210/14. Disponible en: <http://pgr.gob.mx/Prensa/2007/bol14/Nov/b210%2014.shtm>

²⁶ Boletín 225/14. Disponible en: <http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol14/Nov/b22514.shtm>



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

Así también, se informó más tarde que entre las personas detenidas, estaban quienes detuvieron, secuestraron, trasladaron y entregaron a la organización criminal autodenominada Guerreros Unidos a un grupo de personas, encontrándose entre ellos a **cuarenta y cuatro elementos de las policías municipales de Iguala y Cocula y a dieciséis más que se tenían identificados y se les estaba buscando.**²⁷

De acuerdo con lo antes dicho, se puede concluir que en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, se tuvo una participación importante del Estado **puesto que diversos actos fueron presuntamente cometidos por agentes estatales**, lo cual se reafirma, de conformidad con las manifestaciones realizadas por personal de la Procuraduría General de la República en las diligencias practicadas, al señalar que **se consignaron a policías municipales de Iguala y Cocula, al ex Presidente Municipal de Iguala y su esposa la entonces Presidenta del DIF.**

Ahora bien, en concordancia con los elementos que se tienen del presente caso es posible inferir que los actos que se cometieron atentaron contra la libertad, la integridad física, la seguridad y la vida de las víctimas.

En ese orden de ideas, de acuerdo con los artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a las garantías de seguridad jurídica y de legalidad, se establece que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en donde se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; y que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Asimismo, en los artículos 1, 4.1, 5.1 y 5.2, 7.1 y 7.2 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,²⁸ se establece el derecho de toda persona a que le sea respetada su vida, su integridad física, psíquica y moral, libertad y seguridad personal, al acceso a la justicia, así como que nadie debe ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

²⁷ Boletín 240/14. Disponible en: <http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol14/Dic/b24014.shtm>

²⁸ Disponible en: http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-

32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

De igual forma, en los artículos 6 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,²⁹ se establecen los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad personales, así como el derecho efectivo a obtener reparación en caso de que ilegalmente se haya sido detenido o preso.

Por lo tanto, existe una presunción de que los actos ilícitos cometidos el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero violan derechos reconocidos en nuestra Constitución y por la normatividad internacional referida que forma parte del orden jurídico mexicano, tal como, derecho a la vida, a la integridad física, psíquica y moral, libertad y seguridad personal.

De esta manera, se comprueba la **trascendencia social de las violaciones graves cometidas en los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala Guerrero**, de acuerdo con el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación³⁰ al actualizarse no sólo el criterio cuantitativo sino además el cualitativo.

Sobre este aspecto, es importante traer a colación los diversos comunicados de prensa que ha emitido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con los cuales se refuerza la probable comisión de violaciones graves a derechos humanos en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.

En el comunicado número **CGCP/354/14**³¹, del 18 de diciembre de 2014 se hace alusión a la creación de una Oficina Especial para el Caso Iguala nombrando al titular de la misma quien se encargaría de **"atender las violaciones graves a derechos humanos por los lamentables acontecimientos ocurridos en esa ciudad los días 26 y 27 de septiembre"** de 2014. Asimismo, en el comunicado **CGCP/356/14**³², del 22 de diciembre de 2014, señala que se acordó **continuar el expediente que en su momento se inició por los referidos acontecimientos como una investigación de violaciones graves a derechos humanos, bajo el número de expediente CNDH/1/2014/6432/Q/VG.**

²⁹ Disponible en: <http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D47.pdf>

³⁰ Tesis Aislada(Constitucional), 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1; Pág. 667

³¹ Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Comunicados/2014/COM_2014_354.pdf

³² Disponible en:
http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Comunicados/2014/COM_2014_356_corr.pdf



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

En ese mismo tenor, el comunicado **CGCP/356/14/018/15**,³³ del 27 de enero de 2015, refiere que el organismo instruyó a que se continúe el análisis de las actuaciones de la Procuraduría General de la República, a fin de no dejar cabo suelto, y determinar las **violaciones graves a los derechos humanos**, el cual se reproduce a continuación:

INSTRUYE EL OMBUDSMAN NACIONAL A CONTINUAR EL ANÁLISIS EXHAUSTIVO DE ACTUACIONES DE LA PGR PARA DETERMINAR VIOLACIONES GRAVES A DERECHOS HUMANOS EN EL CASO IGUALA

....

En relación con el informe dado a conocer hoy por la Procuraduría General de la República, en torno a las investigaciones sobre el caso Iguala, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puntualiza lo siguiente:

- 1.- El Ombudsman nacional instruyó a la Oficina Especial de la CNDH para el caso Iguala que continúe el análisis exhaustivo de las actuaciones de la PGR, a fin de no dejar un solo cabo suelto, **para determinar las violaciones graves a los derechos humanos, derivados de los acontecimientos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre pasados.***
- 2.- La CNDH ha solicitado la información respectiva a las diferentes autoridades, con el fin de determinar cuáles fueron las violaciones a derechos humanos que se cometieron antes, durante y con posterioridad a los hechos, particularmente las relacionadas con las diligencias ministeriales practicadas.*
- 3.- Esta Comisión Nacional entiende el dolor de las familias, su desesperación por conocer el paradero de los jóvenes y su demanda de justicia, por lo que mantendrá abierto el expediente de queja respectivo, agotará todas las "focalizaciones de investigación" y continuará con su acompañamiento a los familiares de las víctimas.*
- 4.- La CNDH subraya que no anticipará conclusiones sobre las violaciones a los derechos humanos y, al término de su investigación, hará el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda. Al mismo tiempo, reitera su absoluto respeto a la libertad de expresión y considera que no debe estigmatizarse a los jóvenes normalistas, a sus familias ni a sus representantes.*

Al respecto, debe señalarse si bien de acuerdo con lo manifestado por el sujeto obligado tanto en respuesta como en alegatos sobre que la **Comisión Nacional de los Derechos Humanos** no había emitido pronunciamiento alguno de la existencia de violaciones graves a derechos humanos en los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, debe tenerse presente que actualmente **dicho organismo ha referido que se están determinando las probables violaciones graves a los derechos**

³³ Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Comunicados/2015/COM_2015_018.pdf



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

humanos en los sucesos y que el expediente abierto para tales efectos se está llevando como una investigación de violaciones graves a derechos humanos.

Por otro lado, es imprescindible señalar que del boletín 097/15 emitido por la Procuraduría General de la República se desprende en relación con **las consignaciones por el delito de desaparición forzada que actualmente la autoridad jurisdiccional se encuentra analizando los agravios expuestos por la representación social, por lo que, está pendiente la resolución que se emita.**

Al respecto, como puede advertirse si bien todavía no se resuelve por la autoridad jurisdiccional la consignación a los probables responsables por el delito de **desaparición forzada** en relación con los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, **existen otras autoridades nacionales e internacionales, que dada la trascendencia y gravedad de los hechos se han pronunciado considerando que en los acontecimientos se configuró dicho ilícito, lo cual permite vislumbrar que dichos sucesos no sólo afectaron a las víctimas y sus familias sino también a la sociedad en general.**

Al respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través del comunicado de prensa **CGCP/340/2014**, del 5 de diciembre de 2014, destacó la importancia de que la autoridad esclareciera los hechos de **desaparición forzada de 43 estudiantes** en Iguala con el fin de conocer la verdad de éstos, se haga justicia y se castigue a los responsables.

En ese mismo sentido, en el comunicado de prensa **CGCP/348/2014**, del 15 de diciembre de 2014, al exhortarse al Ejecutivo Federal a que aceptara la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, se señaló que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al tener como objetivo principal la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos en México, reconocía, entre otros, que los vergonzosos hechos ocurridos con la **desaparición forzada** de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y del legítimo reclamo de verdad y de justicia de los familiares de las víctimas, de la **sociedad mexicana en su conjunto y de la comunidad internacional**, con el fin de resolver este oprobioso caso, así como otras **desapariciones forzadas** presentadas en diversas entidades federativas, recordaba la obligación del Estado Mexicano de dar cumplimiento, cabal e integral, a los compromisos internacionales adquiridos en materia de derechos humanos.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su comunicado de prensa no. 133/14,³⁴ del 12 de noviembre de 2014, informó entre otras cosas, que el Estado Mexicano y los representantes de los estudiantes **víctimas de desaparición forzada** y sus familias en el mes de octubre habían planteado a dicho organismo una solicitud de asistencia técnica para la búsqueda, la investigación, y el apoyo a las familias, por lo que, acordó supervisar la creación de un Grupo Interdisciplinario de Asistencia Técnica a fin de proveer asistencia y verificación técnica de las acciones iniciadas por México tras la desaparición de los estudiantes, siendo que dicho apoyo técnico incluirá medidas destinadas a resolver los problemas estructurales subyacentes a **las desapariciones forzadas, las cuales no se limitan al caso de los estudiantes de Iguala.**

En ese mismo orden, mediante el boletín de prensa del 10 de octubre de 2014 de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se afirmó por un grupo de expertos de derechos humanos de Naciones Unidas que la investigación del asesinato y la **desaparición forzada** de estudiantes en Guerrero representa una prueba crucial para la voluntad y capacidad del Estado mexicano de **lidiar con graves violaciones a los derechos humanos.**³⁵

Por otra parte, es importante señalar que el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, en sus observaciones finales del informe presentado por México en virtud del artículo 29, párrafo 1 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, indicó que la información recibida ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas, incluso iniciadas a partir de la entrada en vigor de dicha Convención.

Asimismo, en relación con los hechos que nos ocupan se manifestó que "el grave caso de los 43 estudiantes sometidos a **desaparición forzada** en septiembre de 2014 en el Estado de Guerrero ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado parte en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas"³⁶

³⁴ Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2014/133.asp>

³⁵

Disponible

en:

<http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15155&LangID=S>

³⁶

Disponible

en:

http://www.hchr.org.mx/images/CED/Observaciones%20Finales%20_Comite%20Desaparicion%20Forzada%20_MX2015.pdf



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

En ese sentido, y sobre dichas observaciones la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través del comunicado de prensa CGCP/032/15, del 13 de febrero de 2015 coincidió en que el caso de los 43 estudiantes de Iguala sometidos a **desaparición forzada** en septiembre de 2014 ilustra, desde la perspectiva del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU los desafíos que enfrenta el Estado en la prevención, investigación y sanción de este delito, así como la búsqueda de las personas desaparecidas.³⁷

En ese orden, puede advertirse que derivado de la trascendencia social del caso, por las conductas cometidas en contra de las víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala Guerrero tanto en el ámbito nacional por autoridades diversas a la Procuraduría General de la República, como en el internacional, diferentes instancias se han pronunciado sobre la necesidad de que este caso sea debidamente investigado, e incluso dichas autoridades han considerado que se **podría configurar el delito de desaparición forzada**.

Con el fin de tener mayor claridad sobre el delito en comento, debe señalarse que de acuerdo con el artículo 215-A del Código Penal Federal comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de privación de su libertad.

Asimismo, en el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, se establece que para los efectos de dicho instrumento se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.

En relación con lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos, el cual si bien trata sobre desaparición forzada, señaló que el acto de desaparición y su ejecución se inician con la privación de la libertad de la persona y la subsiguiente falta de

³⁷

Disponible

en:

http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Comunicados/2015/COM_2015_032.PDF



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

información sobre su destino, y permanece hasta tanto no se conozca el paradero de la persona desaparecida y los hechos no se hayan esclarecido.³⁸

Por lo que, en la especie a pesar de que a la fecha no se haya consignado por delito desaparición forzada, lo cierto es que dada la trascendencia y la gravedad de los mismos, otras autoridades nacionales e internacionales han considerado que podría actualizarse dicho delito, lo cual robustece la trascendencia social de las violaciones cometidas en los sucesos acaecidos en Iguala Guerrero que impactan a la sociedad en su conjunto.

Dada la relevancia del caso y la gravedad de los hechos, se han llevado a cabo distintas acciones por diversas autoridades mexicanas, tal como la instalación de una Comisión Especial en la Cámara de Diputados para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa "Raúl Isidro Burgos" quedando formalmente instalada el 8 de octubre de 2014.³⁹

Dicha Comisión Especial, ha presentado un resumen de las actividades que ha llevado a cabo, pudiéndose observar entre ellas, diversas reuniones con autoridades del Estado de Guerrero, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Secretaría de Gobernación, Procuraduría General de la República, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México, entre otras, asimismo ha solicitado información relacionada con los hechos, y ha realizado diversas acciones para tener el acercamiento con las víctimas y sus representantes.

En ese contexto el Senado de la República instauró el Grupo de Trabajo Plural para el seguimiento de las investigaciones de los hechos acontecidos en el municipio de Iguala, Guerrero, con los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa "Raúl Isidro Burgos" el cual quedó instalado el 14 de octubre de 2014.⁴⁰

Al respecto, sobre los informes emitidos por el Senado de la República del seguimiento a la investigación sobre el caso en cuestión, pueden desprenderse las acciones que se han tomado, tal como reuniones realizadas con el Procurador General de la República, y de igual forma en los referidos informes señalan la

³⁸ Caso Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos, párr. 23. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_209_esp.pdf

³⁹ Boletín número 4333, emitido por la Cámara de Diputados.

⁴⁰ Primer informe emitido por el Senado de la República.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

actuación de la Procuraduría General de la República, siendo coincidente con la reflejada en los boletines emitidos por el sujeto obligado.

De igual forma, como se refirió anteriormente derivado de lo acordado con los familiares y representantes de los estudiantes desaparecidos, el Estado mexicano solicitó la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos⁴¹ la cual acordó supervisar la creación de un Grupo Interdisciplinario de Asistencia Técnica a fin de proveer asistencia y verificación técnica de las acciones iniciadas por México tras la desaparición de los estudiantes.⁴² Cabe señalar, que se informó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos realizaría su primera reunión el once y doce de febrero del presente año,⁴³ sin que a la fecha se tenga algún comunicado oficial sobre dichas actividades.

Confirma la **trascendencia del caso**, el hecho que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su informe de actividades 2014⁴⁴, situó el caso Ayotzinapa como uno de los temas de mayor interés, tal y como se aprecia a continuación:

Temas de mayor interés
El presidente de la CNDH presentó la Recomendación 51/2014, relacionada con los hechos ocurridos el 30 de junio durante un enfrentamiento en el que un grupo de elementos de la Sedena privó de la vida a 22 civiles, presuntos delincuentes, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México. La Secretaría de la Defensa Nacional y el gobierno del Estado de México anunciaron que aceptaron la Recomendación emitida por la CNDH en torno a los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya.
La CNDH informó que investiga el caso de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y solicitó al gobierno estatal medidas cautelares a fin de garantizar la integridad de los heridos y detenidos por los hechos violentos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre. También indicó que se han realizado más de 300 diligencias y que se indaga el caso de los cadáveres no identificados hallados en fosas clandestinas de la entidad. La CNDH deploró distintas expresiones descalificadoras y estigmatizadoras de quienes atacan a los 43 normalistas desaparecidos y sus familias. Visitadores de esta Comisión han monitoreado las diversas marchas que se han convocado con motivo de este caso. Luego de los enfrentamientos registrados en Chilpancingo, Guerrero, el Ombudsman nacional envió a médicos y abogados para verificar el estado de salud de las víctimas, llevar a cabo todas las actuaciones que permitan obtener mayor información –evidencias y testimonios–, para integrar el expediente respectivo, y en su momento emitir la determinación que conforme a derecho corresponda.
El Pleno del Senado de la República aprobó el nombramiento del nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El Presidente de la República se reunió en la residencia oficial de Los Pinos con el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Durante el encuentro, el Primer Mandatario manifestó el irrestricto respeto del Gobierno de la República a los Derechos Humanos.

⁴¹ Boletín 194/14 emitido por la Procuraduría General de la República.

⁴² Comunicado de prensa número 133/14, emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

⁴³ Comunicado de prensa número 008/15, emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

⁴⁴ Disponible en:

<http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/informes/anuales/2014.pdf>



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

Finalmente, es importante señalar que cobra especial relevancia la necesidad de permitir el acceso a la información, como lo son reportes y fotografías, que consten en averiguaciones previas que investiguen hechos que constituyan graves violaciones a derechos humanos, pues dicho supuesto no sólo afectan a las víctimas y ofendidos en forma directa por los hechos antijurídicos, sino que ofenden a toda la sociedad, precisamente por su gravedad y por las repercusiones que implican.

Pues como se observa, dichos actos no afectan únicamente a las víctimas sobre las que recayeron los mismos, sino a sus familias, así como a la población del lugar de los hechos pues la multiplicidad de dichos actos atenta contra la seguridad pública creando un ambiente de temor en la sociedad ante crímenes de tal magnitud y de igual forma trasgrede a la sociedad en su conjunto derivado de la gravedad.

Por lo expuesto, en el presente caso se concluye que se actualiza la excepción prevista en el último párrafo del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en virtud de que los hechos acontecidos constituyen violaciones graves a derechos humanos.

Ahora bien, es importante recordar que el sujeto obligado en su respuesta así como en los alegatos formulados indicó que la reserva de ley establecida en el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales se debe a que se trata de información de interés general cuya difusión afecta a la sociedad en su conjunto, por lo que la averiguación previa es en sí misma una razón de interés público y, por lo tanto, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental le otorgó dicho carácter, por lo que no resultaba aplicable la excepción, establecida en el último párrafo del artículo 14 del último ordenamiento legal referido, aludida por la ahora recurrente.

Al respecto, debe tenerse presente que en materia de derecho a la información, la regla general es el acceso y máxima publicidad de la información; sin embargo, ésta presenta diversas excepciones que para tal efecto deben estar previstas en leyes, una de ellas, tal como lo indicó la Procuraduría General de la República corresponde a las averiguaciones previas y los documentos que las integran, no obstante dicha hipótesis puede tener a su vez excepciones, una de ellas consiste en aquellas averiguaciones previas que investiguen hechos constitutivos de graves violaciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, la cual también se prevé en una ley en sentido formal y material -en el último párrafo del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

Gubernamental- por lo que, cuando se actualice la misma no puede alegarse el carácter de reservado de la indagatoria.

Es decir, a pesar de que se previó que las averiguaciones previas y las documentales que las integran debían ser reservadas con el fin de no afectar la persecución de los delitos, también se contempló - en el mismo precepto normativo - una excepción para los casos extremos en que derivado de la gravedad de las violaciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad el interés público de la secrecía de la indagatoria es superado por el interés de la sociedad de conocer todas las diligencias que se estén llevando a cabo para la oportuna investigación, detención, juicio y sanción de los responsables, dicha conclusión acorde a la tesis del Poder Judicial de la Federación "Derecho a la Información. Acceso a las averiguaciones previas que investiguen hechos que constituyan graves violaciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad".

En la especie, se ha concluido que para efectos del acceso a la información la averiguación previa relacionada con los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 actualiza la excepción contemplada en la Ley de la materia, consistente en violaciones graves a derechos humanos, por lo que, el interés de la sociedad a conocer la verdad histórica de los acontecimientos, prevalece sobre el interés público de conservar la reserva de la averiguación previa que atiende lo solicitado.

En ese mismo orden, el sujeto obligado consideró que tratándose de documentales que son parte de una averiguación previa para efectos del acceso a la información sólo se puede proporcionar la versión pública de la resolución de no ejercicio de la acción penal en los términos del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, lo cual no resulta procedente pues el sistema jurídico mexicano se compone por todos aquellos ordenamientos que han sido aprobados por el órgano legislativo, por lo que, debe hacerse una interpretación armónica de éstos para cada caso, en ese sentido, tratándose de averiguaciones previas la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que es la ley especial en materia de acceso a la información, contiene una excepción a la reserva de las mismas resultando aplicable al presente caso.

Por tanto, como se ha dicho, el interés de la sociedad para conocer todas las diligencias llevadas a cabo por el Ministerio Público en el presente caso resulta superior al interés público de la secrecía de la indagatoria que se establece en los artículos 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, así como en el diverso 13 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, por lo que, de conformidad con la audiencia de acceso a la información reservada, de la averiguación previa y



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

sus anexos se advirtió: actuaciones, declaraciones, dictámenes en diversas materias, informes de policías, acuerdos de diligencias, constancias e inspecciones ministeriales, aceptación y protesta de peritos, extracciones de dispositivos de comunicación las cuales dan cuenta del ejercicio de las facultades que tiene la Procuraduría General de la República y que ha utilizado para poder conocer la verdad histórica de los hechos, así como para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de quienes participaron en su comisión.

A mayor abundamiento, en la Ley General de Víctimas, se prevé lo siguiente:

ARTÍCULO 18. *Las víctimas y la sociedad en general tienen el derecho de conocer los hechos constitutivos del delito y de las violaciones a derechos humanos de que fueron objeto, la identidad de los responsables, las circunstancias que hayan propiciado su comisión, así como tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad.*

ARTÍCULO 19. *Las víctimas tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad y a recibir información específica sobre las violaciones de derechos o los delitos que las afectaron directamente, incluidas las circunstancias en que ocurrieron los hechos y, en los casos de personas desaparecidas, ausentes, no localizadas, extraviadas o fallecidas, a conocer su destino o paradero o el de sus restos. Toda víctima que haya sido reportada como desaparecida tiene derecho a que las autoridades competentes inicien de manera eficaz y urgente las acciones para lograr su localización y, en su caso, su oportuno rescate.*

ARTÍCULO 20. *Las víctimas y la sociedad tienen derecho a conocer la verdad histórica de los hechos. Las víctimas tienen derecho a participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en los diferentes mecanismos previstos en los ordenamientos legales en los cuales se les permitirá expresar sus opiniones y preocupaciones cuando sus intereses sean afectados. Las víctimas deberán decidir libremente su participación y tener la información suficiente sobre las implicaciones de cada uno de estos mecanismos.*

...

ARTÍCULO 26. *Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición.*

...

De acuerdo con los artículos en cita se reconoce **tanto las víctimas como la sociedad en general el derecho de conocer los hechos constitutivos del delito y de las violaciones a derechos humanos** de que fueron objeto, la identidad de los responsables, las circunstancias que hayan propiciado su comisión, así como tener



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Asimismo, a conocer la verdad histórica de los hechos.

Ahora bien, las víctimas en particular tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad y a recibir información específica sobre las violaciones de derechos o los delitos que las afectaron directamente incluidas las circunstancias en que ocurrieron los hechos y, en los casos de personas desaparecidas, ausentes, no localizadas, extraviadas o fallecidas, a conocer su destino o paradero o el de sus restos.

Asimismo, cuentan con el derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño sufrido por el delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, para lo cual se comprenden las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas para que no se repitan hechos similares.

En relación con lo anterior, la Organización de los Estados Americanos⁴⁵ a través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha señalado respecto del derecho a la verdad, que la interpretación de éste ha evolucionado y actualmente se considera, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pertenece a las víctimas y sus familiares así como a la sociedad en general. Conforme a esta concepción, el derecho a la verdad se basa no sólo en el Artículo 25, sino también en los artículos 1(1), 8 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los que se prevé lo siguiente:

ARTÍCULO 1. Obligación de Respetar los Derechos

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

...

ARTÍCULO 8. Garantías Judiciales

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

⁴⁵ Disponible en: <http://www.oas.org/es/>



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

...

ARTÍCULO 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

...

ARTÍCULO 25. Protección Judicial

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados Partes se comprometen:

- a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;**
- b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y**
- c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.**

...

En ese mismo sentido, el Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos⁴⁶ en relación con el derecho a la verdad, señala en sus conclusiones que es un derecho individual que asiste tanto a las víctimas como a sus familiares, pero también tiene una dimensión colectiva y social el cual se encuentra estrechamente ligado al estado de derecho y a los principios de transparencia, responsabilidad y buena gestión de los asuntos públicos en una sociedad democrática. Además de constituir, junto con la justicia, la memoria y la reparación, uno de los pilares de la lucha contra la impunidad de las violaciones graves de los derechos humanos y de las infracciones del derecho internacional humanitario.

De igual forma, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe sobre el "Derecho a la verdad en América", aprobado el 13 de agosto de 2014, señala que el referido derecho también corresponde a la sociedad en su conjunto, teniendo así el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro.⁴⁷

⁴⁶ Consejo de Derechos Humanos., quinto periodo de sesiones, 7 de junio de 2007.

⁴⁷ Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Derecho-Verdad-es.pdf>, párr.71



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

Aunado a ello, debe tenerse presente que el derecho a la verdad permite que la sociedad tenga conocimiento de hechos como los acontecidos en Iguala Guerrero; es decir, que tengan la capacidad para prevenir la repetición de los mismos y de igual forma que el gobierno rinda cuentas sobre su actuación, trayendo como consecuencia que los ciudadanos tengan confianza en sus autoridades, al poder verificar las actuaciones llevadas a cabo para determinar a los probables responsables y establecer la verdad histórica, con el fin de que no exista impunidad.

Ahora bien, es importante dejar claro que si bien el sujeto obligado proporcionó los **vínculos electrónicos** para consultar la información que ha hecho pública en relación con los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014 a través de su respuesta, y al momento de formular sus alegatos, lo cierto es que los mismos **no satisfacen la solicitud, toda vez que lo requerido son los informes y las fotografías que forman parte de una averiguación previa, que en su momento, el sujeto obligado inició; por lo que la respuesta no corresponde con lo petitionado.**

En este punto, es importante señalar que la Procuraduría General de la República alegó que en el presente caso el proporcionar la información traería como consecuencia la vulneración a los derechos humanos de las víctimas de privacidad, acceso a la justicia, reparación del daño y resguardo de su identidad.

Al respecto, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se dispone, lo siguiente:

ARTÍCULO 6.

...

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

...

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

ARTÍCULO 16. *Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.*

...



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...

ARTÍCULO 20. *El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.*

...

C. De los derechos de la víctima o del ofendido:

...

IV. Que se le repare el daño. *En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.*

La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;

V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: *cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.*

El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación;

...

De las normas constitucionales transcritas, se desprende que la información que se refiere al ámbito privado de las personas, así como los datos personales, debe estar protegida en los términos y con las excepciones a los principios de tratamiento de datos que por razones de orden público fije la ley, es decir, **toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales.**

Por otra parte, se contiene el mínimo de derechos con los que cuentan las víctimas u ofendidos, entre ellos se encuentra la reparación del daño, el resguardo de su identidad y otros datos personales para el caso de secuestro o delincuencia organizada y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. Estableciéndose además



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

que el Ministerio Público debe garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos, y en general de todos los sujetos que intervengan en el proceso penal.

Ahora bien, en los artículos 3, fracción II y 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se establece que se entiende por **datos personales**, cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Asimismo, se prevé como **información confidencial** a los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización en los términos de esa ley.

De este modo, en dichas versiones públicas **se deberá proteger la información confidencial**, tanto de los inculpadados, las víctimas, sus familiares, testigos o terceros relacionados con dicha indagatoria, tal como, nombres, domicilios, números telefónicos particulares, datos patrimoniales, estado de salud física y de salud mental, o de cualquier otro que haga identificable a la persona.

Lo anterior, a efecto no sólo de salvaguardar los derechos de las víctimas directas e indirectas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, señalados por el sujeto obligado como derecho a la privacidad, acceso a la justicia, reparación del daño y resguardo de su identidad y a la verdad, sino además los datos personales de aquellas personas que se encuentren referidas en las constancias de la indagatoria.

Por lo tanto, contrario a lo señalado por la Procuraduría General de la República el **proporcionar versión pública de la información anteriormente identificada permite la debida protección de los datos personales** de las víctimas y de sus familiares sin que se vean afectados sus derechos de privacidad, acceso a la justicia, a la verdad, reparación del daño y resguardo de su identidad, así como de terceros relacionados con dicha indagatoria.

Ahora bien, en relación con los precedentes referidos por el sujeto obligado en sus alegatos (0514/09, 1156/09, 1719/09, 0685/11, 0724/11, RDA 2582/12, RDA 4375/12, RDA 1296/13, RDA 0210/14 y RDA 0498/14) es preciso señalar que si bien en éstos se confirmó la clasificación de la reserva de la información aludida por el sujeto obligado por tratarse de información que obraba en averiguaciones previas o relacionada con las mismas, **no resultan aplicables** en virtud de que atendiendo al caso en concreto, se actualiza la excepción contemplada en el último párrafo del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

Asimismo, debe aclararse respecto de los precedentes emitidos por el Pleno de este Instituto y contenidos en los expedientes **0298/10**, **1245/10**, y **2959/12** también alegados por el sujeto obligado, no se relacionan con la materia de la solicitud, por tanto, no resultan aplicables.

En relación con lo manifestado por el sujeto obligado consistente en que se encuentra impedido legalmente para difundir información relacionada con una averiguación previa, acorde a lo previsto por el artículo 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal, que dispone, son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos, dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obren en una averiguación previa o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean confidenciales, imponiéndosele pena de prisión de cuatro a diez años y de mil a dos mil días multa.

Al respecto, derivado de que la información que debe proporcionar el sujeto obligado es con motivo de la presente resolución que emite este Organismo Autónomo Constitucional en ejercicio de sus atribuciones, no puede aludirse dicho impedimento pues como se ha expuesto, la indagatoria iniciada con motivo de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, actualiza la excepción a la reserva de la averiguación previa establecida en el último párrafo del artículo 14 de la Ley de la materia consistente en violaciones graves de derechos fundamentales.

Con independencia de lo anterior, no pasa desapercibido para este Instituto que, el particular a manera de mejor proveer su solicitud, hizo referencia a un **programa radiofónico** denominado "*Atando Cabos*"; en ese sentido, proporcionó la liga electrónica⁴⁸ de la que es posible desplegar su contenido:

*"Periódico La Jornada
Martes 20 de enero de 2015, p. 4
Iguala, Gro.*

"Cuando me dijeron que los militares venían, lo primero que me vino a la mente fue Tlatlaya, así que les dije a los muchachos que corrieran a esconderse. La mayoría corrió al segundo piso. Yo me escondí en un baño que estaba al fondo; ahí me puse en cuclillas. Entonces comencé a escuchar los gritos de los militares."

Habla un profesor miembro de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) que sobrevivió al segundo ataque que sufrieron los normalistas de Ayotzinapa los días 26 y 27 de septiembre del año pasado.

⁴⁸ <http://www.jornada.unam.mx/2015/01/20/politica/004n1po>
Consulta del 12 de mayo del 2015.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

Los balazos, recuerda, "deben haber durado apenas tres minutos". En medio del desconcierto vio a un muchacho herido y, con ayuda de otros jóvenes, lo tomó en brazos. Corrieron hacia el centro de la ciudad y se detuvieron a tres calles, porque se toparon con una clínica privada llamada Cristina. Tocaron. Les abrieron dos enfermeras que enseguida desaparecieron.

El profesor, a quien llamaremos José Luis, había llegado entrada la noche al sitio donde los policías municipales de Iguala dispararon contra los estudiantes de Ayotzinapa y es uno de los sobrevivientes de la segunda balacera, que se atribuye a sicarios del cártel Guerreros Unidos.

El maestro hizo varias llamadas desesperadas, la mayoría a algunos compañeros suyos. Logró que le enviaran un taxi, pero el chofer, al ver al herido, no los quiso llevar.

Se comunicó entonces con otro profesor que se había encargado de llevar al hospital a la maestra Fátima Bahena Peña, quien en la balacera recibió impactos en el tórax y en el pie derecho. El otro mentor le aseguró que iban al sitio, pero lo volvió a llamar poco después: "Nos vamos a seguir derecho, porque ya van los militares para allá", le dijo la agitada voz en el teléfono.

El pasado viernes, en el programa radiofónico *Atando cabos*, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que en el expediente del caso figuran las declaraciones de 26 elementos del 27 batallón de infantería, quienes acudieron al llamado de personal de la clínica, "porque refieren que hay personas armadas".

El titular de la SG explicó: "Cuando llega el Ejército a este lugar —y hay fotos, yo las vi—, debe haber unos 20 jóvenes en cuclillas, sentados en el piso, o un poco más. Entonces revisan el sanatorio. Y esto dicho por el propio director de la clínica. Entonces, ellos preguntan a los jóvenes en qué les ayudan, qué necesitan, y los jóvenes les dicen que se vayan, que no los requieren".

Osorio Chong también aseguró que la "mayor de las acusaciones" que los jóvenes hicieron contra los militares fue "que los trataron mal en pedirles sus datos" y "que no les permitieron hacer llamadas" telefónicas.

"Digan sus nombres verdaderos porque si no, no los van a hallar"

El profesor José Luis, presente ese día en la balacera y en la clínica, tiene otra versión. En cuanto entraron a la clínica, los militares ordenaron a los muchachos, a gritos, que bajaran, y los concentraron a todos, sin dejar de encañonarlos, en una suerte de recepción cerca de la entrada.

"Allá afuera hay dos muertos, y para mí que son de ustedes", dijo el oficial a cargo. Los militares ordenaron a los muchachos levantarse la camiseta, dejar carteras y celulares en una mesa de centro y, luego, alzar los brazos.

"Dos muchachos bajaron cargando en vilo al herido y lo sentaron en un sillón. No podía hablar; nos escribía en el teléfono que no podía respirar."

El herido era el normalista Édgar Andrés Vargas, originario de San Francisco del Mar, Oaxaca, a quien una bala le destrozó el maxilar superior y la base de la nariz. El oficial a cargo, cuyo rango José Luis no identificó, tomó la palabra:

—Lo que hicieron ustedes es un delito, se metieron a una propiedad privada, así que voy a llamar a la policía municipal para que se los lleve detenidos —les dijo.

—Oiga, oficial —intervino José Luis—, ¿cómo va a llamar a la policía municipal si ellos mismos fueron los que les dispararon a los muchachos?

—¿Cómo que fueron ellos?

—Sí, fueron ellos.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

A esas horas, los cuerpos de dos normalistas yacían a tres cuerdas de distancia, bajo la lluvia, sin que ninguna autoridad se apersonara.

En la clínica estaban 26 estudiantes, José Luis, y una docena de militares "que llegaron en dos camionetas". Una vez que los estudiantes dejaron sus pertenencias en la mesa, los soldados los interrogaron.

"Digan sus nombres; no quiero mentiras, porque si no, no los van a encontrar", dijo el oficial.

"¿Y eso les enseña a sus alumnos?"

Cuando llegó su turno, José Luis dijo que es maestro.

—¿Y esto es lo que les enseña a sus alumnos?

—Yo vine a apoyarlos, porque les dispararon.

Desde el principio, José Luis suplicó al militar que pidiera una ambulancia para el muchacho herido.

"Que ya la pedí, ¿qué no entiendes?", fue la respuesta a la tercera petición.

Todo el episodio, refiere el maestro, duró una media hora. En algún momento, el oficial salió y habló con sus subalternos a la entrada de la clínica. Cuando regresó, les dijo: "Aquí los vamos a dejar; la zona ya está asegurada, no les va a pasar nada".

Entonces, los militares condujeron a los normalistas a un pasillo, mientras dejaban a José Luis en la recepción.

"Algunos se pusieron en cuclillas y otros se quedaron de pie. El oficial se puso a regañarlos: '¿Para eso los mandan sus papás a la escuela, para eso gastan?'"

Cuando los militares salieron, llegó al lugar el dueño de la clínica, el médico Ricardo Herrera. "Tenemos un herido, por favor, véalo", dijo José Luis. "Sí, ya sé, allá afuera hay dos muertos, sin nadie que los atienda", dijo el galeno.

Tampoco él lo hizo: "El médico se acercó a mirarlo, vio la herida como a 30 centímetros de distancia y sólo dijo: 'Hijole, cuate, si te dieron duro, vas a necesitar cirugía'".

Alrededor de las 3:15 de la madrugada, José Luis consiguió otro taxi. Le pidió al normalista Omar García que sostuviera a su compañero con una playera en la boca, se subiera a la parte trasera del automóvil y no hablara. Consiguió, con engaños, que los llevaran al hospital: "Nos peleamos en un bar y a mi amigo le dieron con una botella en la boca".

Naturalmente, la ambulancia prometida por el oficial del Ejército nunca llegó." (sic)

Al respecto, se enfatiza que la información aludida por el solicitante tiene el carácter de periodística, por ello, carece de valor probatorio, ya que no puede convertirse en un hecho público y notorio, pues aunque aquélla no sea desmentida por quien puede resultar afectado, el contenido de dicha información solamente le es imputable al autor de la misma, mas no así a quienes se ven involucrados en la noticia correspondiente. Situación que se reafirma en el criterio orientador de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con título Notas Periodísticas, Ineficacia Probatoria de las. Publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en la página 541, tomo II en diciembre de mil novecientos noventa y cinco.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

En función de todos los argumentos expuestos, en la especie se ha actualizado la hipótesis relativa a violaciones graves a derechos humanos, excepción contenida en el último párrafo del artículo 14 de la Ley de la materia.

Una vez analizadas las causales que hizo valer la Procuraduría General de la República para clasificar la documentación requerida, es menester determinar la manera en que ése sujeto obligado deberá poner a disposición del ciudadano las documentales que atienden a lo solicitado, es decir, **a)** los tres informes rendidos por militares dirigidos a sus superiores jerárquicos; **b)** las tres fotografías en conjunto y las mismas tres, pero desagregadas con un poco de amplificación, así como **c)** la Declaración Ministerial de un Coronel de Infantería, en calidad de testigo.

En ese orden de ideas, el análisis de lo antes señalado, se estructurará en dos apartados: el **primero**, relativo a los informes y la declaración antes señalados [incisos **a)** y **c)**], en tanto que el **segundo**, en lo atinente a las fotografías [inciso **b)**]

- l)** Informes rendidos por militares dirigidos a sus superiores jerárquicos (fojas 214 a 225 del tomo 47 de la indagatoria número **PGR/SEIDO/UEIDMS/01/2015**), y Declaración Ministerial de un Coronel de Infantería, en calidad de testigo, de fecha cuatro de diciembre de dos mil catorce (misma que obra de la foja número 365 a la 369, del tomo 20 de la indagatoria citada)

Es de recordar, que los informes antes citados, constituyen la **expresión documental** de aquellos reportes que el 27 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional, con sede en Iguala, entregó al sujeto obligado, sobre las actividades que realizaron la noche del 26 de septiembre de 2014. Cabe reiterar, que derivado de la diligencia de acceso, se obtuvo que esos informes fueron realizados por militares y estuvieron dirigidos a sus superiores, por lo que en ellos constan los nombres de diversos elementos pertenecientes al Ejército.

Por otro lado y, como se dijo antes, la **Declaración Ministerial** de un miembro de la Secretaría de la Defensa Nacional, en calidad de testigo, **constituye la expresión documental** del detalle relativo al número y descripción de las fotografías sobre las actividades correspondientes a los días 26 y 27 de septiembre de 2014, que el 27 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional, con sede en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero, entregó a la Procuraduría General de la República. Es importante señalar, que derivado de la diligencia de acceso, se obtuvo que esa declaración fue realizada por un Coronel de Infantería, en calidad de testigo.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

En el caso concreto, de las declaraciones ministeriales del personal militar, así como los informes rendidos entre los miembros de la milicia, a las que se tuvo acceso, se pudo advertir que se contienen, entre otros datos, **el nombre de ellos y sus grados.**

En ese sentido, debe señalarse que en los artículos 3, fracción II y 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se establece que se entiende por datos personales, cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Asimismo, se prevé como información confidencial a los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización en los términos de esa ley.

Asimismo, en los Lineamientos Generales se prevé lo siguiente:

Trigésimo Segundo. *Será confidencial la información que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable relativos a:*

- I. Origen étnico o racial;**
- II. Características físicas;**
- III. Características morales;**
- IV. Características emocionales;**
- V. Vida afectiva;**
- VI. Vida familiar;**
- VII. Domicilio particular;**
- VIII. Número telefónico particular;**
- IX. Patrimonio;**
- X. Ideología;**
- XI. Opinión política;**
- XII. Creencia o convicción religiosa;**
- XIII. Creencia o convicción filosófica;**
- XIV. Estado de salud física;**
- XV. Estado de salud mental;**
- XVI. Preferencia sexual, y**
- XVII. Otras análogas que afecten su intimidad, como la información genética.**

Trigésimo Tercero. *Los datos personales serán confidenciales independientemente de que hayan sido obtenidos directamente de su titular o por cualquier otro medio.*

En ese sentido, de conformidad con la normatividad citada puede concluirse que en las declaraciones ministeriales del personal militar, así como en los informes militares, existen diversos datos personales, a través de los cuales, es posible identificar o hacer identificable a las personas en concreto que se mencionan en las constancias.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

Es importante aclarar, respecto del nombre de los declarantes, así como los nombres de los militares que rinden los informes a diversos miembros de la milicia, si bien se trata de personal adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional que lleva a cabo funciones operativas, lo cierto es que atendiendo a la calidad que tienen en el procedimiento, esto es de testigos, se considera que debe protegerse en términos del artículo 18, fracción II de la Ley de la materia.

Por otra parte, debe señalarse que de conformidad con el artículo 13, fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se considera información reservada aquella cuya difusión **pueda poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona.**

Aunado a lo anterior, en el Vigésimo Tercero de los Lineamientos Generales, se señala que se clasificará como reservada la información a que se refiere la fracción IV del artículo 13 de la Ley, cuando la difusión de la información pueda poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona.

De las declaraciones ministeriales de los militares así como de los tres informes rendidos por miembros del Ejército, se desprende que existen datos que actualizan la causal de clasificación contemplada en el artículo 13, fracción IV de la Ley de la materia, los cuales son **nombre del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; nombre del superior; y de los militares,** puesto que derivado de la naturaleza de las funciones que realizan se considera que revelar sus nombres podría colocarlos en una situación de vulnerabilidad al poner en peligro su vida o su seguridad, incluso, la de sus familiares, ya que al ser identificadas dichas personas, podrían verse amenazados o presionados por parte de los grupos delincuenciales.

Es importante aclarar, que el **nombre del grado de los declarantes** (Soldados de Infantería, Capitán Segundo de Infantería, Cabo de Infantería, entre otros) inmerso en las declaraciones, no es un dato por medio del cual se puede hacer identificable a los mismos, ya que sólo se trata del cargo o puesto y no así del nombre de quien lo ocupa, razón por la cual **no puede ser información clasificada.**

En ese orden de ideas, se considera que debe otorgarse acceso a la declaración ministerial de referencia y a los tres informes multicitados que obran en averiguación previa número **PGR/SEIDO/UEIDMS/01/2015**, a través de la elaboración de las



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

respectivas versiones públicas en las que se protejan los datos confidenciales y reservados de conformidad con lo expuesto.

Ahora bien, en la solicitud de acceso se señaló como modalidad preferente "*Entrega por internet en el INFOMEX*", lo cual ya no es posible por el momento procesal en el que se encuentra el procedimiento; sin embargo, derivado de las diligencias de acceso que éste Instituto ha realizado, se aprecia que la información solicitada no se encuentra en modalidad electrónica; por lo tanto, la Procuraduría General de la República, deberá indicar al particular las diversas modalidades de acceso de la **versión pública de la información solicitada**; tales como, copia simple, proporcionando los costos de reproducción, y en su caso envío o, bien, a través de la consulta directa en las instalaciones del sujeto obligado estableciendo de manera precisa la forma para llevarse a cabo y tomando las medidas necesarias para proteger la información clasificada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley de la materia, y 50, 52 y 54 de su Reglamento.

Las versiones públicas deberá elaborarse conforme a lo dispuesto en los artículos 43 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 41 y 70, fracción IV de su Reglamento; Séptimo de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; así como en los Lineamientos para la elaboración de versiones públicas, por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Cabe precisar, que en la versión pública de las documentales solicitadas inmersas en la averiguación previa, **no podrán omitirse los nombres de los servidores públicos que presuntamente participaron en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero; así como de aquellos que hayan sido puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional competente que sean públicos**, ya que de acuerdo con la información oficial se refiere en algunos casos a policías municipales, el alcalde de Iguala, entre otros, por tanto, resulta de interés público que se conozcan, aunado a que la propia Procuraduría General de la República ya ha publicitado en diversas ocasiones los nombres de ellos.

En concatenación con lo anterior y en términos del último párrafo del artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que señala un supuesto de excepción a la confidencialidad cuando la información se halle en los registros públicos o en fuentes de acceso público, aquellos datos personales que se hayan hecho del conocimiento público no podrán ser



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

considerados como clasificados, tal como aquellos que obran en los comunicados y boletines de prensa de la Procuraduría General de la República.

Asimismo, es de mencionar que en términos del artículo 31 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada deberá emitir una resolución fundada y motivada mediante la cual confirme la clasificación de la información que se proteja en la versión pública que se elabore, ya sea reservada o confidencial, según lo antes expuesto; además, de notificar el acta conducente al recurrente.

En términos de lo dispuesto por el artículo 56, párrafo segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, este Instituto verificará previamente a su entrega las versiones públicas.

- II) Las tres fotografías en conjunto que obran en la foja 370 del tomo 20 de la indagatoria número **PGR/SEIDO/UEIDMS/01/2015**, así como las mismas tres, pero desagregadas a fojas 371, 372 y 373 con un poco de ampliación.

Es de reiterar, que **éstas documentales, constituyen la expresión documental** de todas las fotografías que el 27 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional, con sede en Iguala, entregó al sujeto obligado, sobre las actividades que realizaron la noche del 26 de septiembre de 2014.

Como ya se señaló, derivado de la diligencia de acceso, se obtuvo que las fotografías se encuentran en formato blanco y negro. Asimismo, se verificó que en ellas se muestran personas físicas sin poderse identificar, de apariencia en su mayoría jóvenes, observándose tranquilos, todos vestidos con ropa informal y calzados, sentados y con cabello corto.

Además, en el acta de la diligencia multicitada, se hizo constar que **no era posible apreciar el número de personas que aparecían en las fotografías, debido a la falta de legibilidad en las mismas**, a excepción de una de ellas, donde aparecen dos individuos. Aunado a ello, debe destacarse que, en la Declaración arriba retomada, se hizo constar que en las fotografías únicamente aparecen los estudiantes involucrados, ahora desaparecidos.

Partiendo de lo anterior, es importante señalar que **las imágenes de los estudiantes normalistas desaparecidos, no pueden omitirse o testarse en las**



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

fotografías requeridas; ya que éstas se encuentran públicas en el portal de "Recompensas"⁴⁹ de la Procuraduría General de la República, es decir, ya han sido ampliamente difundidas oficialmente y, por ende, no deben ser protegidas.

En ese entendido, se considera que debe otorgarse acceso a las fotografías de referencia que obran en averiguación previa número **PGR/SEIDO/UEIDMS/01/2015**, en **versión íntegra**, ya que derivado de la diligencia de acceso, se apreció que dichas documentales no contienen información de carácter confidencial y reservado que impida su difusión total.

En virtud de todo lo expuesto, resulta **FUNDADO** el agravio al actualizarse la hipótesis relativa a violaciones graves a derechos humanos, excepción contenida en el último párrafo del artículo 14 de la Ley de la materia.

QUINTO. Sentido. De conformidad con lo expuesto en el considerando que precede, y con fundamento en el artículo 56, fracción III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, resulta procedente **REVOCAR** la clasificación expedida por la Procuraduría General de la República, y se le **INSTRUYE** a que conceda al particular el acceso a lo siguiente:

- 1) La versión pública de los tres informes rendidos por militares dirigidos a sus superiores jerárquicos, que constan a fojas 214 a 225 del tomo 47 de la indagatoria número **PGR/SEIDO/UEIDMS/01/2015**; siendo el primero de la 214 a la 217, el segundo de la 218 a la 221 y el tercero de la 222 a la 224.
- 2) La versión íntegra de las tres fotografías en conjunto que obran en la foja 370 del tomo 20 de la indagatoria número **PGR/SEIDO/UEIDMS/01/2015**; así como las mismas tres pero desagregadas a fojas 371, 372 y 373 con damplicación.
- 3) La versión pública de la Declaración Ministerial de un Coronel de Infantería, en calidad de testigo, de fecha cuatro de diciembre de dos mil catorce, relacionada con las fotografías e informes del interés del particular, misma que obra de la foja número 365 a la 369, del tomo 20 de la indagatoria número **PGR/SEIDO/UEIDMS/01/2015**.

En virtud de lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales:

⁴⁹ Disponible en: <http://www.recompensas.gob.mx/>



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815

R E S U E L V E

PRIMERO. Se **REVOCA** la respuesta emitida por el sujeto obligado, en los términos expuestos en los considerandos cuarto y quinto de la presente resolución y conforme a lo establecido en los artículos 55, fracción V y 56, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

SEGUNDO. Se **INSTRUYE** al sujeto obligado para que, en un plazo no mayor de diez días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de su notificación, cumpla con lo ordenado en la presente resolución e informe a este Instituto las acciones implementadas para tales efectos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 56, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 91 de su Reglamento, apercibiéndolo de que en caso de incumplimiento, se procederá en términos de lo previsto en el artículo 92 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

TERCERO. Notificar la presente resolución al recurrente, en la dirección señalada para tales efectos y, por la Herramienta de Comunicación, al Comité de Información del sujeto obligado, en términos de lo dispuesto en el artículo 86 y 91 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;

CUARTO. Instruir a la Dirección General de Coordinación y Vigilancia de la Administración Pública Federal, verifique que el sujeto obligado cumpla con la presente resolución y dé el seguimiento que corresponda, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, fracción XIX y 56, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 34, fracción V del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y

QUINTO. Hacer del conocimiento del recurrente que en caso de encontrarse insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación, con fundamento en lo previsto en el primer párrafo del artículo 59 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

SEXTO. Poner a disposición del recurrente el teléfono 01 800 TELIFAI (835 4324) y el correo electrónico vigilancia@ifai.org.mx para que haga del conocimiento del Instituto cualquier incumplimiento a la presente resolución.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionado ponente

Recurso de revisión

Expediente: RDA 0802/15

Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República

Folio: 0001700026815


Así por unanimidad, lo resolvieron los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Ximena Puente de la Mora, Francisco Javier Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y María Patricia Kurczyn Villalobos, siendo ponente la última de los mencionados, ante Adrián Alcalá Méndez, Coordinador de Acceso a la Información, con las funciones del Secretario de Acceso a la Información previstas en el Reglamento Interior de este Instituto.


**Ximena Puente de la
Mora**
Comisionada Presidenta


**Francisco Javier Acuña
Llamas**
Comisionado

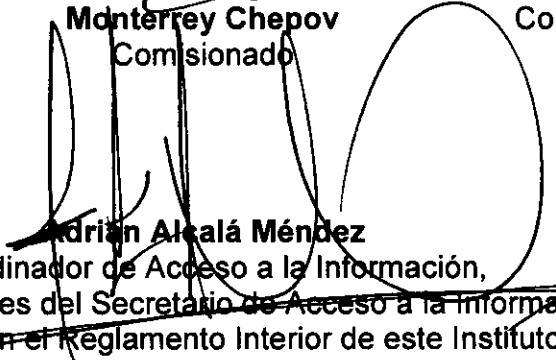

Areli Cano Guadiana
Comisionada


**Oscar Mauricio Guerra
Ford**
Comisionado


**María Patricia Kurczyn
Villalobos**
Comisionada


**Rosendoevgueni
Monterrey Chepov**
Comisionado


Joel Salas Suárez
Comisionado


Adrián Alcalá Méndez
Coordinador de Acceso a la Información,
con las funciones del Secretario de Acceso a la Información
previstas en el Reglamento Interior de este Instituto


*42P/dm